



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
Escuela Profesional de Derecho



TESIS:

Criterios jurídicos – dogmáticos para imputar el incumplimiento del deber de presumir la procedencia ilícita del bien en el delito de receptación, en el Distrito Fiscal de Lambayeque, 2019-2020

AUTOR:

Bach. Gálvez Polo Kevin Yennure

ASESOR:

- Mag. Colina Moreno Mary Isabel

PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE ABOGADO

Fecha de sustentación:

09 de marzo del 2023


LAMBAYEQUE, 2023


Tesis denominada “Criterios jurídicos – dogmáticos para imputar el incumplimiento del deber de presumir la procedencia ilícita del bien en el delito de receptación, en el Distrito Fiscal de Lambayeque, 2019-2020”, presentada para optar EL TITULO PROFESIONAL DE ABOGADO, por:


.....
Bach. Gálvez Polo Kevin Yennure
AUTOR

.....
Mag. Colina Moreno Mary Isabel
ASESOR

APROBADO POR:


.....
Mag. Mondoñedo Valle Amador Nicolás
PRESIDENTE


.....
Abog. Gamonal Guevara José Eloy
SECRETARIO


Mag. CARLOS MANUEL ANTENOR CEVALLOS DE
BARRENECHEA
Vocal del jurado

DEDICATORIA

Esta Tesis está dedicada a mi familia, quienes siempre me demuestran su aprecio, y amor incondicional, en cada etapa de mi corta vida.

A la familia Castro Pinedo, por su apoyo incondicional a lo largo de mi desarrollo académico, por creer en mí, y acompañarme en los pasos que doy en la vida.

Y en especial a mi primogénito Bastian, quien recién empieza su vida, y tiene un largo camino por delante, esperando que algún día se tome un tiempo para leer este trabajo.

AGRADECIMIENTO

Quiero agradecer ante todo a Dios por guiarme a lo largo de mi vida, para cumplir mis objetivos propuestos en el ámbito académico y profesional.

Agradezco el apoyo de toda mi familia, y las personas que forman parte de mi vida social y laboral.

Agradezco a mi asesor de tesis Mag. Mary Isabel Colina Moreno por haberse tomado el tiempo necesario para revisar la presente tesis, y poder culminar satisfactoriamente la presente tesis de derecho en materia penal, la cual me permitirá obtener el título de abogado.

INDICE

DEDICATORIA	II
AGRADECIMIENTO.....	III
RESUMEN	VII
ABSTRACT	VIII
INTRODUCCION	1
CAPITULO I: ASPECTOS METODOLÓGICOS.....	4
I. ASPECTOS METODOLÓGICOS.....	4
1. Realidad Problemática	4
1.1. Planteamiento del problema	4
1.2. Formulación del problema.	7
1.3. Justificación e importancia del estudio.	7
1.4. Objetivos.....	9
1.5. Hipótesis	10
1.6. Variables	10
CAPITULO II: MARCO CONCEPTUAL.....	12
I. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. -.....	12
1. Tesis	12
II. BASES TEÓRICAS	14
2. El delito de Receptación	14
2.1.1. Evolución Histórica	14
2.1.2. Generalidades.....	15
2.1.3. Concepto	16
2.1.4. Naturaleza Jurídica	17
2.1.5. Estructura Típica	18
2.2. Análisis dogmático del “deber de presumir” la procedencia ilícita del bien en el delito de receptación conforme a los lineamientos jurídicos de la Teoría del Delito y de la Imputación (objetiva y subjetiva).	27
2.2.1. La Teoría del delito	27
2.2.2. La Acción.....	32

2.2.3.	La Tipicidad	33
2.2.4.	Imputación Objetiva. –	34
2.2.5.	La Imputación subjetiva. –	48
2.2.6.	El deber de presumir la procedencia ilícita del bien como elemento subjetivo necesario para la configuración del delito de receptación.	60
2.2.7.	Análisis práctico sobre el incumplimiento del deber de presumir la procedencia ilícita del bien en la configuración del delito de receptación en relación con la imputación objetiva.	63
CAPITULO III: MARCO METODOLOGICO		69
3.1.	TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACION.....	69
3.1.1.	De acuerdo al fin.....	69
3.1.2.	De acuerdo al diseño de la investigación	69
3.2.	POBLACION Y MUESTRA	70
3.2.1.	Población	70
3.2.2.	Muestra	70
3.3.	TÉCNICAS E INSTRUMENTOS	70
3.3.1.	Técnicas	70
3.3.2.	Instrumentos	70
CAPITULO IV: ANALISIS Y RESULTADOS.....		71
4.1.	Procesamiento de los datos obtenidos.....	71
CAPITULO V: CONTRASTACION DE LA HIPÓTESIS.....		86
5.1.	DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS	86
5.1.1.	SOBRE EL PRIMER OBJETIVO: Analizar la estructura típica del Tipo penal de receptación previsto en el artículo 194 del Código Penal.	86
5.1.2.	SOBRE EL SEGUNDO OBJETIVO: Analizar dogmáticamente el deber de presumir la procedencia ilícita del bien en el delito de receptación conforme a los lineamientos jurídicos de la Imputación Penal.....	92
5.1.3.	SOBRE EL TERCER OBJETIVO: Explicar los criterios jurídicos-dogmáticos en que se fundamenta el deber de presumir la procedencia ilícita del bien como elemento subjetivo necesario para la configuración del tipo penal de receptación.....	102
5.1.4.	SOBRE EL CUARTO OBJETIVO: Analizar los criterios jurídicos - dogmáticos que utilizan los Fiscales del Distrito Fiscal de Lambayeque para fundamentar su imputación penal respecto al incumplimiento del deber de presumir la procedencia ilícita del bien como elemento subjetivo necesario para la configuración del tipo penal de receptación.....	104
5.1.5.	SOBRE EL QUINTO OBJETIVO: Proponer criterios jurídicos - dogmáticos para imputar correctamente el delito de receptación, en los casos en que el sujeto activo tenía el deber de presumir la procedencia ilícita del bien.....	118
5.2.	RESULTADOS DE LA VALIDACION DE LAS VARIABLES.....	122
5.3.	CONSTRASTACION DE LA HIPOTESIS.....	130
5.4.	APORTE CIENTIFICO	131

CONCLUSIONES	138
RECOMENDACIONES	142
BIBLIOGRAFÍA	144

RESUMEN

El presente estudio de investigación **“Criterios jurídicos – dogmáticos para imputar el incumplimiento del deber de presumir la procedencia ilícita del bien en el delito de receptación, en el Distrito Fiscal de Lambayeque, 2019-2020”** tiene como fin investigar los criterios jurídicos-dogmáticos que se están utilizando en el Distrito Fiscal de Lambayeque para imputar penalmente el delito de receptación en cuanto al incumplimiento del deber de presumir la procedencia ilícita del bien como elemento subjetivo necesario para su configuración.

Actualmente, tanto en la praxis fiscal como en la judicial, es dificultoso demostrar que el autor tenía el “deber de presumir” la procedencia delictuosa del bien. En ese sentido, el fiscal al formular su imputación penal en el requerimiento acusatorio, tiene la hazaña de fundamentar correctamente con debido respaldo de los elementos de convicción o medios probatorios, que el investigado o procesado en virtud de su “rol social de ciudadano” (obediente al ordenamiento jurídico) ha incumplido el “deber de presumir” que el bien es de procedencia delictuosa.

Por lo tanto, esta investigación es necesaria debido a las constantes investigaciones aperturadas por la Fiscalía y los numerosos requerimientos acusatorios que se formulan imputando responsabilidad penal sobre el incumplimiento del deber de presumir la procedencia ilícita del bien, los cuales, por una falta de criterios jurídicos-dogmáticos utilizados en la imputación penal - que se formula en el requerimiento acusatorio - y un insuficiente material probatorio que sustente dicha imputación, los imputados son declarados inocentes por el juzgado penal competente, o en su defecto, son archivados en el control de acusación mediante la improcedencia de la acción penal o el sobreseimiento. Siendo ello así, con la presente tesis, se pretende cambiar esta presunta deficiencia y poder formular una correcta imputación penal sobre el “incumplimiento del deber de presumir la procedencia ilícita del bien” como elemento subjetivo necesario para configurarse el injusto penal de receptación.

Palabras Claves: Criterios jurídicos-dogmáticos, delito de receptación, deber de presumir la procedencia ilícita del bien, imputación penal.

ABSTRACT

The present research study "Legal - dogmatic criteria to impute the breach of the duty to presume the illicit origin of the property in the crime of reception, in the Fiscal District of Lambayeque, 2019-2020". Its purpose is to investigate the legal-dogmatic criteria that are being used in the Lambayeque Fiscal District to criminally charge the offense of reception in terms of non-compliance with the duty to presume the illicit provenance of the property as a subjective element necessary for its configuration.

Currently, both in tax and judicial practice, it is difficult to demonstrate that the author had the "duty to presume" the criminal origin of the property. In this sense, the prosecutor, when formulating his criminal charge in the accusatory order, has the feat of correctly substantiating, with due support of the elements of conviction or evidentiary means, that the person investigated or prosecuted by virtue of his "social role as a citizen" (obedient to the legal system) has breached the "duty to presume" that the property is of criminal origin.

Therefore, this investigation is necessary due to the constant investigations opened by the Prosecutor's Office and the numerous accusatory requirements that are formulated imputing criminal responsibility for the breach of the duty to presume the illicit provenance of the property, which, due to a lack of legal criteria -Dogmatics used in the criminal complaint - which is formulated in the accusatory order - and insufficient supporting evidence to support this complaint, the accused are declared innocent by the competent criminal court, or failing that, they are filed in the prosecution control by the inadmissibility of the criminal action or the dismissal. This being the case, with this thesis, it is intended to change this presumed deficiency and to be able to formulate a correct criminal imputation on the "breach of the duty to presume the illicit origin of the property" as a subjective element necessary to configure the unjust penal reception.

Key Words: Legal-dogmatic criteria, crime of reception, duty to presume the illicit origin of the property, criminal imputati.

INTRODUCCION

Los delitos contra el patrimonio, son acciones reprochadas socialmente y castigadas desde la antigüedad. En la actualidad, estas conductas están previstas en el Código Penal como “acciones que vulneran bienes jurídicos”, por ello, están prohibidas de su realización bajo apercibimiento de ser sancionados con penas, orientadas a limitar o restringir la libertad ambulatoria.

Es necesario saber que nuestra actual norma penal, está estructurada en dos partes: La General y la Especial. Donde la primera, comprende las siguientes teorías: de la Ley Penal, del delito, de la imputación, de las penas, entre otros; en cambio, tratándose de la segunda parte, se ocupa específicamente de la estructura típica de cada delito (aspecto objetivo y subjetivo) y de su respectiva pena en concreto (consecuencia jurídica). En la Parte especial encontramos una serie de tipos penales agrupados conforme al bien jurídico tutelado (vida, salud, integridad, patrimonio, honor, libertad, entre otros.).

El ilícito penal en estudio se encuentra en el catálogo de los delitos contra el patrimonio, debidamente tipificado en el artículo ciento noventa y cuatro del código penal. Este delito de receptación, estudiado en la presente tesis es incorporado en la familia o en el catálogo de los injustos penales que consideran al patrimonio como bien jurídico tutelado, esto es, para poder combatir y neutralizar aquellos actos o comportamientos (adquirir, recibir, guardar, esconder, vender, ayudar a negociar) que promueven o incitan a la realización de conductas delictivas como robar o hurtar, las cuales consisten en apropiarse de bienes ajenos para su posterior venta, en aras de conseguir un beneficio económico.

De acuerdo a la norma penal, este ilícito o injusto penal tiene dos modalidades delictivas:

- i) **El agente tenía pleno conocimiento del origen delictivo del bien.-** es decir, el sujeto activo conoce de manera directa (el ladrón le informa que el bien es robado o hurtado, el comprador observa el momento en que el bien es robado o hurtado, entre otros casos.) o indirecta (le comentan que el bien que pretende adquirir o recibir es robado o hurtado) el origen delictuoso del bien que adquirió o recibió (ya sea en donación o en prenda), así como escondió, vendió o ayudo a negociar su venta.
- ii) **El agente debió presumir el origen delictuoso del bien.-** Sobre esta modalidad existe una dificultad para determinar que “el individuo tenía el deber de presumir el origen ilícito del bien”, por ello, algunos autores señalan que depende de la concurrencia de ciertas

circunstancias como el bajo precio del bien, no se entrega comprobante de pago, el lugar donde se adquiere es de dudosa reputación (por ejemplo en la cachina), entre otros, que permita poder determinar (acreditar) la existencia del dolo por parte del adquirente, es decir, que el sujeto activo teniendo conocimiento de estas circunstancias, debió presumir que el bien que pretende adquirir es de procedencia delictuosa.

Sobre la dificultad de demostrar en esta segunda modalidad delictiva de receptación que “el autor tenía el deber de presumir el origen delictuoso del bien”, se plantean soluciones que a mi punto de vista no permitirían resolver en su totalidad esta dificultad existente. Como es el caso que, este “deber de presumir” exigido en el tipo penal de receptación, para algunos autores es entendido como una obligación (deber general) al ciudadano promedio de ser diligente al momento de querer adquirir o recibir (donación o prenda) un bien, la cual puede manifestarse cuando: el ciudadano exige las formalidades necesarias (boleta de venta, factura electrónica o algún otro documento que permita acreditar la compra, esto es, la titularidad del bien adquirido) con la finalidad de corroborar que el vendedor es el titular del bien que pretende vender. En ese sentido, el ciudadano al percatarse o conocer de la existencia de ciertas circunstancias o hechos externos (precio exiguo, clandestinidad del lugar, ausencia de documentación que acrediten la propiedad, entre otros) que hacían suponer la ilicitud del bien, no debió adquirir o recibir el bien, ya que, su actuación implicaría un pleno conocimiento, generando responsabilidad penal.

Actualmente, en la praxis fiscal, es dificultoso demostrar que el autor tenía el “deber de presumir” la procedencia delictuosa del bien.

Por otro lado, es necesario analizar si este “deber de presumir la procedencia delictuosa del bien” es una “expectativa social” propia del “rol social” de un ciudadano – fiel al ordenamiento jurídico -, es decir, si todo ciudadano debe ser diligente o cuidadoso (deber general) al momento de adquirir o recibir (donación o prenda) algún bien.

Esta investigación es necesaria debido a los numerosos casos fiscales (investigaciones), y los numerosos requerimientos acusatorios que se formulan imputando responsabilidad penal sobre el “incumplimiento del deber de presumir” la procedencia delictuosa del bien. La problemática jurídica radica en que existe una falta de criterios jurídicos-dogmáticos utilizados en la imputación penal - que se formula en el requerimiento acusatorio -, independientemente del insuficiente material probatorio que sustente dicha imputación, así como los criterios adoptados

en las disposiciones fiscales de Archivo, quedando muchas veces conductas impunes, sobre todo en casos donde ni si quiera se tiene a los agraviados identificados y tampoco se agotan los medios para individualizarlo. Esta deficiencia en la aplicación de criterios jurídicos-dogmáticos, implica que los imputados sean declarados inocentes por el juzgado penal competente, o en su defecto, son archivados en el control de acusación mediante la improcedencia de la acción penal o el sobreseimiento.

Por lo tanto, la presente investigación está orientada a determinar si los criterios jurídicos - dogmáticos que utilizan los Fiscales del Distrito Fiscal de Lambayeque para imputar el delito de receptación, en cuanto al incumplimiento del “deber de presumir la procedencia ilícita del bien” como elemento subjetivo necesario para su configuración, es conforme a los lineamientos jurídicos de la T. del Delito y la T. de la Imputación Penal. Por ello, para poder lograr este objetivo, se estructuró teóricamente de la siguiente manera: primero en analizar la estructura típica del Tipo penal de receptación previsto en el artículo 194 del Código Penal; segundo, en analizar dogmáticamente el deber de presumir la procedencia ilícita del bien en el delito de receptación conforme a los lineamientos jurídicos de la T. del Delito y la T. de la Imputación Penal, así mismo, explicar cuáles son los criterios jurídicos-dogmáticos en que se fundamenta el “deber de presumir la procedencia ilícita del bien” como elemento subjetivo en la configuración de este tipo penal. Una vez, planteado los postulados teóricos dogmáticos, se procederá analizar los criterios jurídicos - dogmáticos que utilizan los Fiscales del Distrito Fiscal de Lambayeque para fundamentar su imputación penal respecto al incumplimiento del deber de presumir la procedencia ilícita del bien, con la finalidad de proponer ciertos criterios jurídicos - dogmáticos para imputar correctamente el delito de receptación, cuando el infractor de la normal penal (autor), tenía el deber de presumir la procedencia ilícita del bien, coadyuvando a un mejor entender esta modalidad delictiva.

CAPITULO I: ASPECTOS METODOLÓGICOS

I. ASPECTOS METODOLÓGICOS

1. Realidad Problemática

1.1. Planteamiento del problema

Todo Sistema Jurídico penal, esta conformado por reglas, instituciones y leyes que fundamentan el derecho penal, rigen en un determinado territorio, cuya finalidad es regular la interrelación intersubjetiva de las conductas de la sociedad humana. En este sentido, Código Penal es aquel corpus jurídico sistematizado y ordenado de normas, reglas e instituciones dirigidas a mantener una pacífica convivencia social, por ello, en su estructura legislativa se divide en dos partes: La General y la Especial. Donde la primera, comprende teorías relacionadas al delito y a la pena; en cambio, la segunda, se ocupa específicamente de la estructura típica de cada delito y su respectiva pena en concreto (consecuencia jurídica).

En la Parte especial encontramos una serie de tipos penales, que se definen como conductas prohibidas porque son ofensivas y lesivas a los bienes jurídicos, por ello, son agrupados conforme al bien jurídico que se está protegiendo (vida, salud, integridad, patrimonio, honor, libertad, entre otros.), siendo ello así, se van agrupar en virtud del bien jurídico tutelado.

De acuerdo a lo descrito precedentemente, la parte especial está constituida y sistematizada en virtud al bien jurídico tutelado, es por ello que, en el corpus penal, se encuentran tipificados los injustos penales contra el patrimonio en sus figuras delictivas de hurto, robo, apropiación, receptación, estafa, entre otros.

Desde antaño en la sociedad humana se han realizado este tipo de injustos o ilícitos penales en sus diversas figuras delictivas que ahora conocemos; permitiendo que los autores de estos ilícitos, realicen “actos de disposición”, específicamente cediéndolos (como sería regalarlos, venderlos o donarlos) a terceros; por ello, el Estado para poder combatir y neutralizar estos comportamientos lesivos del patrimonio adopta una política criminal con la finalidad de sancionar tales conductas contrarias al sistema jurídico, especialmente a los derechos patrimoniales de los particulares perjudicados.

El ilícito penal de receptación se encuentra tipificado en el artículo ciento noventa y cuatro del Código Penal; conforme a su descripción típica, este ilícito penal se puede realizar de dos maneras: i) El agente tenía pleno conocimiento del origen delictuoso del bien, y, ii) El agente debió presumir el origen ilícito del bien.

Respecto a la primera manifestación del delito de receptación, no hay problema para determinar la existencia del dolo, ya que, el sujeto activo conoce de manera directa (el ladrón le informa que el bien es robado o hurtado, el comprador observa el momento en que el bien es robado o hurtado, entre otros casos.) o indirecta (al individuo le comentan que el bien que pretende adquirir es robado o hurtado) el origen delictuoso del bien adquirido o recibido. En cambio, sobre la segunda modalidad delictiva, existe una dificultad para determinar que “el individuo tenía el deber de presumir el origen ilícito del bien”, por ello, algunos autores señalan que depende de la concurrencia de ciertas circunstancias como el bajo precio del bien, no se entrega comprobante de pago, el lugar donde se adquiere es de dudosa reputación (por ejemplo en la cachina), entre otros, que permita poder determinar (acreditar) la existencia del dolo por parte del adquirente, es decir, dado las circunstancias concurrentes para la celebración de negocio jurídico (como es la compraventa), se debió presumir que el bien que se pretende adquirir es de procedencia delictuosa.

A pesar que algunos autores plantean como solución a esta problemática, aplicar lo precisado en líneas precedentes, no sería suficiente para solucionar esta problemática, ya que, en el Perú están acostumbrados a tener un comercio directo (informal o ambulatorio), en el cual la mayoría de compra-ventas de productos son de manera consensual (manera verbal), es decir, no se exige o se entrega una boleta o factura o comprobante de pago que acredite la adquisición, por otro lado, también encontramos aquella situación de personas que son legítimos propietarios pero por razones personales venden sus bienes muebles sin entregar alguna boleta o comprobante de pago o algún documento que permita acreditar la compra o adquisición, esto es, la titularidad del bien adquirido. En los dos supuestos descritos precedentemente, existe la confianza por parte del adquirente o comprador, de que el bien o la cosa que se pretende adquirir es de origen lícito, por lo tanto, surgen las siguientes interrogantes: ¿Una persona que pretende adquirir un bien tiene el deber de cuestionar e investigar su origen lícito? ¿Al adquirente por no tomar las medidas

necesarias o mínimas para corroborar la titularidad del vendedor o transferente, se le debe imputar responsabilidad penal por haber adquirido un bien de origen ilícito?

Se podría sostener que la redacción “debía presumir” del tipo penal de receptación, implica atribuir una obligación al ciudadano promedio de ser diligente al momento de querer adquirir un bien, la cual puede manifestarse cuando el ciudadano exige las formalidades necesarias (boleta, factura, comprobante de pago o algún documento que acredite la titularidad de la propiedad del bien) con la finalidad de poder corroborar que el transferente o vendedor es el titular del bien que pretende transferir o vender, o, en su defecto porque se presentaba ciertas circunstancias o hechos externos (precio exíguo, clandestinidad del lugar, ausencia de documentación que acrediten la propiedad, entre otros) que hacían suponer la ilicitud del bien, por lo tanto, se le imputa total responsabilidad al ciudadano promedio de tener que corroborar el origen lícito del bien que pretende adquirir, bajo responsabilidad de no hacerlo podría dar lugar a infringir la norma penal. Es necesario precisar que, en los supuestos acotados, no existe un dolo directo, sin embargo, si concurre un dolo eventual, teniendo en cuenta determinados lineamientos jurídicos dogmáticos de la teoría del delito y de la imputación, y en concordancia, claro está, con lo establecido en el artículo doce del corpus penal, el cual establece en su segundo párrafo que “toda conducta culposa debe estar expresamente establecida en el tipo penal”, es decir, si en el tipo penal no se advierte la modalidad culposa que despliega el agente (Por ej. El que, por culpa, ...), entonces la conducta, se entiende, sería de naturaleza dolosa.

Por lo tanto, es necesario determinar cuáles son los criterios jurídicos-dogmáticos que se están utilizando en el Distrito Fiscal de Lambayeque para imputar penalmente el delito de receptación en cuanto al incumplimiento del deber de presumir la procedencia ilícita del bien como elemento subjetivo necesario para su configuración, así mismo en la praxis fiscal, se tiene que las denuncias por el delito de receptación son comunes en nuestra sociedad, sin embargo, es dificultoso determinar el deber para presumir el origen ilícito del bien que adquirió, tanto en la imputación que se realiza en el requerimiento acusatorio como los medios probatorios que sustentarían la imputación. Pero en el presente trabajo de investigación solo nos enfocaremos en la imputación que realiza el fiscal en su requerimiento acusatorio, con la finalidad de analizar cuales fueron estos criterios

jurídicos dogmáticos aplicados, y, una vez analizados estos criterios, se procederá a proporcionar determinados criterios – de acuerdo a la teoría del delito e imputación penal - que servirán para fundamentar coherentemente la imputación penal en los requerimientos acusatorios; así como también se tendrá en cuenta, como referencia, los criterios adoptados para archivar investigaciones a nivel preliminar, a fin de tener un enfoque global sobre el tema que nos atañe.

1.2. Formulación del problema.

¿Cuáles son los criterios jurídicos - dogmáticos que están utilizando los Fiscales del Distrito Fiscal de Lambayeque para imputar penalmente en su requerimiento acusatorio el delito de receptación, en cuanto al incumplimiento del deber de presumir la procedencia ilícita del bien como elemento subjetivo necesario para su configuración?

1.3. Justificación e importancia del estudio.

1.3.1. Justificación del estudio.

Desde el aspecto teórico, ya que, nos permitirá adquirir nuevos conocimientos de índole jurídico, que están relacionados con las variables de estudio, esto es, con los criterios jurídicos-dogmáticos que se están utilizando para imputar penalmente el delito de receptación en cuanto al incumplimiento del deber de presumir la procedencia ilícita del bien como elemento subjetivo necesario para su configuración.

Tratándose desde el punto de vista práctico, la presente investigación realizada se justifica en la necesidad de proporcionar criterios jurídico-dogmáticos para imputar correctamente el delito de receptación en cuanto al incumplimiento del deber de presumir la procedencia ilícita del bien como elemento subjetivo necesario para su configuración, los cuales serán utilizados para fundamentar correctamente la imputación penal formulada en los requerimientos acusatorios que realicen los fiscales del Distrito Fiscal de Lambayeque.

En cuanto al punto de vista metodológico, su justificación reside en haberse aplicado diversos mecanismos metodológicos orientados a la recolección de información y datos a utilizarse. En ese sentido, se ha seguido un enfoque **cualitativo**, utilizándose las herramientas correspondientes a la recolección de información y datos, con el fin de

analizar si los criterios jurídico-dogmáticos utilizados por el fiscal para imputar penalmente el delito de receptación en cuanto al incumplimiento del deber de presumir la procedencia ilícita del bien como elemento subjetivo necesario para su configuración, es conforme a los lineamientos jurídicos de la T. del Delito y la T. de la imputación penal.

En resumidas palabras, permitirá a la comunidad jurídica, como poder imputar penalmente el delito de receptación en cuanto a su segunda modalidad: el incumplimiento del deber de presumir la procedencia ilícita del bien como elemento subjetivo necesario para su configuración.

1.3.2. Importancia del estudio.

La importancia se debe por el gran número de denuncias por receptación, los cuales son cometidos en el Distrito Fiscal de Lambayeque, y que ha ido en aumento a través de los años, generando que se aperture una serie de investigaciones fiscales, y, consecuentemente el inicio de un proceso penal, conforme a los elementos de convicción recabados.

Es necesaria esta investigación debido a los constantes casos ingresados por la comisión del delito de Receptación, en el DF Lambayeque, y los numerosos requerimientos acusatorios que se formulan imputando responsabilidad penal sobre el incumplimiento del deber de presumir la procedencia ilícita del bien, los cuales, por una falta de criterios jurídicos-dogmáticos utilizados en la imputación penal - que se formula en la Acusación - y un insuficiente material probatorio, los imputados son declarados inocentes por el juzgado penal, o en su defecto, son archivados en el control de acusación mediante la improcedencia de la acción penal o el sobreseimiento.

Esta situación de una presunta deficiencia en formular una correcta imputación penal sobre el “deber de presumir la procedencia ilícita del bien” como elemento subjetivo necesario para la configuración del tipo penal de receptación debe cambiar, es por ello que, la tesis tiene como finalidad: determinar los criterios jurídicos-dogmáticos que se están utilizando en el Distrito Fiscal de Lambayeque para imputar penalmente el delito de receptación en cuanto al deber de presumir la procedencia ilícita del bien como elemento subjetivo necesario para su configuración.

Por lo tanto, es importante esta investigación porque se pretende determinar si los criterios jurídicos-dogmáticos que se están utilizando en el Distrito Fiscal de Lambayeque para imputar penalmente el delito de receptación en cuanto al incumplimiento del deber de presumir la procedencia ilícita del bien como elemento subjetivo necesario para su configuración, es conforme a los lineamientos jurídicos de la Teoría del Delito y de la Imputación Penal.

1.4. Objetivos.

1.4.1. Objetivo General.

Establecer si los criterios jurídicos - dogmáticos que adoptan los Fiscales del Distrito Fiscal de Lambayeque para imputar el delito de receptación, en cuanto al incumplimiento del “deber de presumir la procedencia ilícita del bien” como elemento subjetivo necesario para su configuración, es conforme a los lineamientos jurídicos de la Teoría del Delito y de la Imputación Penal.

1.4.2. Objetivos Específicos.

- Analizar la estructura típica del Tipo penal de receptación previsto en el artículo 194 del Código Penal.
- Analizar dogmáticamente el deber de presumir la procedencia ilícita del bien en el delito de receptación conforme a los lineamientos jurídicos de la Imputación Penal.
- Explicar los criterios jurídicos-dogmáticos en que se fundamenta el deber de presumir la procedencia ilícita del bien como elemento subjetivo necesario para la configuración del tipo penal de receptación.
- Analizar los criterios jurídicos-dogmáticos que utilizan los Fiscales del Distrito Fiscal de Lambayeque para fundamentar la imputación penal respecto al incumplimiento del deber de presumir la procedencia ilícita del bien como elemento subjetivo necesario para la configuración del tipo penal de receptación.
- Proponer criterios jurídicos-dogmáticos para imputar correctamente el delito de receptación, en los casos en que el sujeto activo tenía el deber de presumir la procedencia ilícita del bien.

1.5. Hipótesis.

Si los Fiscales del Distrito Fiscal de Lambayeque al imputar penalmente el delito de receptación, no tienen en cuenta los criterios jurídicos-dogmáticos en que se sustenta el deber de presumir la procedencia ilícita del bien como elemento subjetivo necesario para la configuración de este ilícito penal, entonces, no está correctamente fundamentada la imputación penal en el requerimiento acusatorio conforme a los lineamientos jurídicos de la Teoría del Delito y de la Imputación Penal.

1.6. Variables.

1.6.1. Variable independiente.

Los criterios jurídicos-dogmáticos que utilizan los Fiscales del Distrito Fiscal de Lambayeque para imputar penalmente el delito de receptación.

1.6.2. Variable dependiente.

Correcta fundamentación de la imputación penal en el requerimiento acusatorio, respecto al deber de presumir la procedencia ilícita del bien como elemento subjetivo necesario para la configuración del tipo penal de receptación, conforme a los lineamientos jurídicos de la Teoría del Delito y de la Imputación Penal.

1.6.3. Métodos.

1.6.3.1. Métodos generales.

El método inductivo. – se utilizó este método en razón que se pudo lograr identificar de la revisión de un determinado número de requerimientos acusatorios imputando la segunda modalidad del injusto de receptación (presumir el origen ilícito del bien), en el periodo de enero del 2019 hasta diciembre del 2020, qué criterios jurídicos dogmáticos se han estado aplicando para fundamentar la imputación (objetiva y subjetiva) penal formulada.

El método deductivo. - se utilizó este método en razón de la necesidad e importancia jurídico-social de conocer desde un aspecto general los criterios jurídicos-dogmáticos que utilizan los fiscales del Ministerio Publico de Chiclayo, en sus requerimientos acusatorios imputando la segunda modalidad del delito de

receptación (deber de presumir la procedencia delictuosa del bien), con la finalidad de concluir de manera particular el tema investigado.

Analítico.- Debido a que analizaremos cada requerimiento acusatorio imputando la segunda modalidad del delito de receptación (deber de presumir la procedencia delictuosa del bien), específicamente los criterios jurídicos-dogmáticos que adopta el representante del Ministerio Público para fundamentar su imputación penal, con el fin de obtener un análisis total del problema planteado

1.6.3.2. Métodos Jurídicos

Método Literal. – se utilizó este método en razón que se analizó la estructura típica del ilícito de receptación, específicamente se analizó la segunda modalidad (deber de presumir la procedencia delictuosa del bien) de acuerdo a la T. del Delito y la T. de la Imputación Penal.

Método de la ratio legis. - se utilizó este método en razón que, tratándose de una investigación jurídica, se orientará a conocer la razón, ya sea jurídica y/o política criminal de la creación de esta figura penal, específicamente, de su segunda modalidad (deber de presumir la procedencia delictuosa del bien) prevista en el artículo ciento noventa y cuatro del corpus penal.

Método Dogmático. - se utilizó este método en razón que, tratándose de una investigación en el ámbito de las ciencias jurídicas, se realizó una “interpretación del derecho objetivo” con la finalidad de desarrollar teóricamente los criterios jurídicos-dogmáticos que se deben aplicar para fundamentar una imputación, en cuanto al incumplimiento del deber de presumir la procedencia delictuosa del bien como elemento subjetivo necesario en la segunda modalidad del Tipo Penal de receptación, previsto en el artículo 194° del Código Penal, conforme a los lineamientos jurídicos de la Teoría del Delito y de la Imputación Penal.

CAPITULO II: MARCO CONCEPTUAL

I. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. -

1. Tesis

La realizada por Davalos Aldas, Héctor Francisco R. (2015); propuso como objetivo general: “Diseñar un documento de análisis crítico y jurídico proveniente del cometimiento del ilícito de receptación, así como, su concepción doctrinaria, sobre la sentencia dictada por la unidad judicial penal con sede en el cantón de Ambato, en el juicio N° 18282-2013-0197”, concluyendo que: i) el ilícito de receptación se configura cuando el autor de forma dolosa ejerce la posesión de un bien de origen o procedencia delictuosa; ii) la denominada receptación en cadena o sustitutiva, se configura cuando se tiene conocimiento de la procedencia delictuosa del bien que está poseyendo en virtud de una operación comercial (ya sea, a través de una venta, compra o permuta), esto es, conocer que dicho bien proviene de un ilícito penal; iii) Existen dos modalidades de receptación, la primera consiste en que una persona conoce que los bienes obtenidos a su favor, son de la procedencia de ilícitos contra el patrimonio, en cambio, la segunda, consiste que en razón de las condiciones comerciales que se venden los bienes, se debe inferir que son de procedencia ilícita, como un precio exiguuo, lugar de dudosa reputación, entre otros; iv) La receptación es cometida diariamente en razón de la demanda por parte de la población en adquirir bienes hurtados o robados, a minúsculos precios, a diferencia de los que se ofrecen u ofertan en las tiendas comerciales licitas.

La desarrollada por Cornejo Sánchez, Mariliana (2017); planteó como objetivo general “Establecer la influencia de la sanción penal en la participación en el ilícito de receptación, en la provincia de Cuzco”, concluyendo que: la sanción penal impuesta incide directamente en quien recibió o adquirió el bien de procedencia ilícita, el cual tiene conocimiento de su proceder ilegal, o, en todo caso presume que dicho bien haya sido adquirido de manera ilícita, en la Provincia de Cuzco

La desarrollada por Yanes Sevilla, Marjorie Dayanara (2015); planteó como objetivo general “Analizar el delito de receptación y su influencia en la administración de justicia penal”, concluyendo que: i) la receptación es un tipo penal autónomo, en razón que se encuentra tipificado de manera independiente en un artículo del código penal, teniendo su

propia sanción penal a imponerse, por ello, no guardaría una relación con los demás delitos contra el patrimonio; ii) la receptación tiene sus propios elementos (objetivos y subjetivo), que lo diferencia de los demás delitos patrimoniales a pesar que el bien sea de procedencia de un ilícito penal de carácter patrimonial; iii) en la receptación se reprocha la conducta del autor en la medida que “incumplió con su deber de diligencia” de tener u ostentar la documentación (insuficiencia o ausencia de documentos) para justificar la titularidad del bien adquirido o recibido, esto es, que justifiquen la procedencia y propiedad del bien; iv) Se afecta la presunción de inocencia con la tipificación de la receptación, ya que, se procesa y sanciona a una persona al no tener o portar la documentación que sustente la titularidad o propiedad de la cosa, es decir, el juzgador sancionaría a todo ciudadano que no pueda justificar la titularidad de los bienes o cosas adquiridas, por cuanto, se debe presumir que los bienes adquiridos sin documentación son consecuencia de un delito anterior.

La realizada por Carbajar Almerco, Yuli (2018), planteó como objetivo general: “establecer un concepto del delito previo en el artículo ciento noventa y cuatro del código penal, conforme a la teoría del delito”, concluyendo que: i) Para la conceptualización del delito previo, es válido basarse en la imputación objetiva, por cuanto, se constituiría como un filtro calificador de la conducta, de acuerdo al contexto social en que se realizó y/o desarrolló, y, consecuentemente, se podrá determinar su relevancia jurídica penal; ii) En base a los criterios de rol social y riesgo permitido, permitirá establecer un concepto de delito previo en el tipo penal de receptación, siendo la conexidad y la remisión a normas extrapenales, como elementos constitutivos de esta conceptualización, siendo el primer elemento que deviene del “rol social” (entendida que el bien receptado tiene vinculación con el delito anterior), en cambio, el segundo elemento, consiste en la subsunción de la conducta, conforme a los verbos rectores tipificados.

La realizada por Mendoza Torres, Nell E. (2020), planteó como objetivo general: “determinar si el elemento subjetivo “debía presumir” en el delito de receptación, contiene elementos volitivos”; concluyéndose que solo puede imputarse el delito de receptación a “título doloso” desde una perspectiva normativista, y, que el término “debía presumir” ha sido tipificado para dar una referencia al dolo eventual, con la finalidad de evitar se recurra al desconocimiento (ignorancia), o se argumente un error de tipo. En ese sentido, el “debía presumir” se constituye como un supuesto de “ignorancia deliberada”, pero no se utilizará

ésta para imputarse como un tercer tipo de imputación subjetiva, sino para justificar una imputación por “dolo eventual”, desde una concepción normativista, la cual, como un elemento normativo del tipo penal de receptación, nos permite diferenciar un delito doloso de uno culposo.

II. BASES TEÓRICAS

2. El delito de Receptación

2.1.1. Evolución Histórica

Este ilícito penal tiene su antecedente histórico en el código de 1924, en este corpus penal derogado se contemplaba en el artículo doscientos cuarenta y tres como “delito de encubrimiento”, así este término fue el “nomen iures” utilizado para calificar a los ilícitos de receptación y encubrimiento en los corpus penales de Uruguay (art. 197) y Argentina (ar. 277). Es necesario precisar que “estos delitos a veces han tenido los mismos alcances que la receptación, sin embargo, la figura penal de favorecimiento o encubrimiento ha recibido un tratamiento diferente en otra sección del corpus penal, como es el caso del derogado código de 1924” (Peña Cabrera, 2013, pág. 159). La diferencia entre los términos de encubrimiento y receptación, radicaría que “el primero sería el género, en cambio, el segundo la especie, entendida esta última como las formas delictivas del tipo penal base” (Rio, 2004, pág. 199)

Galvez & Delgado (2012), afirman que:

Recientemente en el año 1991, se denominó el delito de receptación como tal, y sigue manteniéndose hasta la actualidad, así mismo, se denominó al delito de favorecimiento como “delito de encubrimiento”, superándose las dificultades sobre el “nomen iure” de esta figura penal.

Por otro lado, Ramiro Salinas S. (2015), nos dice que:

Anteriormente el encubrimiento era concebido como un tipo de participación delictiva, pero esta concepción ha cambiado, siendo que actualmente el delito de receptación es considerado de carácter autónomo, por los siguientes criterios: i) No existe participación en un delito de carácter autónomo y consumado; ii) el bien jurídico tutelado en la receptación es diferente al del encubrimiento; iii) los

móviles para ejecutar el delito son muy diferentes; iv) desconocimiento de un delito precedente (pág. 240).

Los legisladores peruanos al momento de tipificar el injusto penal de receptación en el vigente corpus penal, se basaron en los denominados fines de “prevención general y especial”, siendo, el primer fin destinado a disuadir a la comunidad de la comisión o realización de determinados hechos delictivos, es decir, prohíbe determinados comportamientos o acciones; por otro lado, el segundo, está destinado a que el infractor de la norma prohibitiva, no vuelva lesionar nuevamente el mismo bien jurídico (preventivo especial negativo), y, mediante la privación de su libertad en un centro penitenciario, sea rehabilitado, reeducado y reinsertado a la sociedad (preventivo especial positivo).

Al respecto, Siccha (2018), señala que:

La creación de la figura penal de receptación se basa en un “fin preventivo general positivo”, ya que, se pretende combatir la ejecución o realización de nuevos ilícitos penales. En ese sentido, la creación de este ilícito responde a la vigente política criminal de sancionar a los receptadores que incentivan, promueven o facilitan el apoderamiento o sustracción ilícita de bienes ajenos, con el pensamiento de obtener un aprovechamiento económico de bienes de procedencia delictuosa. (pág. 1386)

En este sentido, lo que se procura con la tipificación de este injusto penal es neutralizar o frenar la comisión de ilícitos penales, en los cuales, el receptor facilita el aprovechamiento del bien sustraído, por ende, promueve la realización de ilícitos penales.

2.1.2. Generalidades

Galvez & Delgado (2012), nos indican que:

El delito de receptación ha recibido un tratamiento uniforme en la doctrina penal contemporánea, al considerarlo de “carácter autónomo”, sin embargo, ha recibido cuestionamiento, ya que, algunos textos doctrinarios del siglo diecinueve consideran a este delito como un modo de participación delictiva, conforme se

puede apreciar de los siguientes Códigos Penales: Portugal, Francia de 1810 y España de 1850. Por otro lado, el derecho italiano comparte la idea de la autonomía del delito de receptación, conforme se aprecia del código napolitano de 1891, toscano y sardo.

En torno al delito de receptación, la Corte Suprema (Recurso de Nulidad 1923-2011 Lima Norte) ya ha señalado en reiterados pronunciamientos sobre “el carácter autónomo de este tipo penal, así como, la exigencia de la realización de un delito previo, y que el autor no haya intervenido en el mismo (ni como autor ni partícipe), sin embargo, el agraviado seguirá siendo el mismo en razón que es el titular del bien jurídico” (fundamento jurídico N° 10)

De acuerdo a la redacción normativa de este tipo penal, podemos decir de manera general que: las conductas típicas o modalidades de comisión de este delito, están precedidas por los siguientes verbos rectores: de “adquirir”, “recibir”, “guardar”, “esconder”, “vender” o “ayudar a negociar”, los cuales están relacionados a la “realización previa de un delito patrimonial” (robo, hurto, apropiación ilícita, estafa, etc.), y, que el sujeto activo no haya participado en este delito previo, así mismo, que tenga pleno conocimiento de la ilicitud del bien o fundada presunción del origen ilícito de ésta.

2.1.3. Concepto

El término receptación viene de “receptar”, “guardar” o “comprar bienes sustraídos”. En este sentido, receptación implica que “el actor ha tomado posesión sobre un bien de procedencia delictuosa” (Rio, 2004, pág. 123).

Para Cadenas (1992), “este ilícito permite abarcar una problemática orientada a tipificar y sancionar conductas que promuevan e incentiven a la comisión de ilícitos penales contra el patrimonio mediante la adquisición de bienes de proceder ilícito” (pág. 43).

Pumpido (1955), afirma que:

Se calificará como autor en el delito de receptación, a toda persona que tenga conocimiento de la realización de un delito patrimonial y con ánimo de lucrar,

pero sin que haya intervenido en la realización del delito previo, ayuda a los responsables de la ejecución del delito previo a poder obtener un provecho o beneficio, ya sea, adquiriéndolo, recibéndolo o escondiéndolo con la finalidad de comercializarlos. (pág. 224)

Muñoz Conde (2012), sostiene que “el reproche penal en la receptación se basa en que se ayuda al autor de un ilícito a obtener un provecho de los efectos del delito cometido, ya que, se va entregar una cantidad dineraria a cambio de la entrega de los bienes de procedencia ilícita” (pág. 132).

2.1.4. Naturaleza Jurídica

Se han planteado tesis que pretenden explicar la naturaleza jurídica de la receptación, siendo las más relevantes: i) Tesis de la dependencia, ii) Tesis de la autonomía.

La tesis de la Dependencia, nos propone que “la configuración del delito de receptación depende de la realización de un delito previo o anterior”. De acuerdo a lo descrito, la tesis fiscal (requerimiento acusatorio) debe estar orientada a probar la existencia de un delito previo (hurto, robo, apropiación ilícita, estafa, entre otros), mediante el cual se obtuvo determinados bienes o efectos, y, estos fueron adquiridos, recibidos, escondidos, o, vendidos con pleno conocimiento de su procedencia ilícita, o, debía presumir dicha procedencia. En este sentido, durante los debates del juicio oral se deberá discutir primeramente sobre la procedencia ilícita del bien, siendo necesario probar que dichos bienes receptados fueron obtenidos mediante la realización de un delito previo o anterior, posteriormente se deberá probar y demostrar si el autor tenía pleno conocimiento de la ilicitud de los bienes, o, en su defecto tenía el deber de presumir su procedencia delictuosa.

Es necesario precisar que la receptación se configura en la etapa de agotamiento del “iter criminis”, específicamente, posteriormente a la realización (consumación) del delito anterior o previo, por ello, se ha establecido en el ámbito jurídico académico, la imposibilidad de ser autor en la receptación y en el delito precedente, es decir, el autor en la receptación, no pudo haber intervenido o participado, ya sea como autor o partícipe en el delito previo.

La T. de autonomía, sustenta que “al sancionarse la receptación se pretende lograr

una política criminal preventiva, es decir, evitar la realización de ilícitos penales (delitos previos), así como, evitar el aprovechamiento de quien adquiere los bienes de procedencia ilícita, siendo esta última el motivo del receptor” (Reategui Sanchez, 2015, pág. 423).

Al respecto, Devesa (1988), sostiene que:

Este ilícito penal tiene un doble fundamento en su razón de existir como figura penal, los cuales son: 1) El autor fomenta o incentiva a la realización de ilícitos penales contra el patrimonio, los cuales no se ejecutarían si el autor del delito precedente no tuviera la convicción que los bienes apropiados ilícitamente serían adquiridos por terceros y a cambio de ello obtener un provecho económico; 2) Se vulnera el derecho de propiedad, como consecuencia de la comisión del delito precedente (hurto, robo, apropiación ilícita, entre otros), pues, hay que tener presente que el derecho de propiedad se mantiene incólume hasta que el bien o la cosa sea destruida. Es por ello que, esta nueva lesión por parte del receptor, puede considerarse su permanencia el tiempo como actividad criminal. (pág. 567-568)

De acuerdo a lo desarrollado en los fundamentos precedentes, en el ámbito doctrinario existe cierta diferencia en cuanto a la naturaleza de la receptación, donde algunos consideran que es un delito autónomo y otros como un delito conexo. Sin embargo, nuestro sistema jurídico penal lo concibe como delito autónomo.

2.1.5. Estructura Típica

Ahora procederé analizar propiamente la receptación como delito, en cuanto a: i) ¿Quién puede ser autor en el delito de receptación?, ii) ¿Cuáles son los elementos de carácter objetivo y subjetivo en el delito de receptación?, entre otros aspectos.

2.1.5.1. Bien Jurídico Protegido

Existe una serie de teorías doctrinarias orientadas a definir el bien jurídico protegido del ilícito de receptación, las cuales son: **i)** la Teoría del mantenimiento de la ilicitud, **ii)** la Teoría del aprovechamiento, y, **iii)** la Teoría contra la administración de justicia. Siendo las dos primeras orientadas a tutelar al

patrimonio como bien jurídico, en cambio, la tercera, a la administración de justicia como bien jurídico.

A. Teorías que consideran al patrimonio como bien jurídico

A.1. T. del mantenimiento de la ilicitud. -

Reategui Sanchez (2015), afirma que:

Esta tesis precisa que, mediante la ejecución de este ilícito, se ayuda a mantener una situación antijurídica producida por un delito previo, y, por ende, se produce una nueva lesión – o se sigue manteniendo una lesión – al bien jurídico patrimonio, ya que, se está impidiendo o restringiendo la posibilidad de restituirse el bien despojado a su legítimo dueño. (pág. 420)

La presente teoría considera a la receptación como una pieza adicional a la ejecución del delito previo, ya que, el desprendimiento del bien de su titular (propietario o poseedor legítimo), impide al afectado del delito precedente a disfrutar de su derecho patrimonial sobre el bien despojado. Siendo ello así, “estaríamos ante una situación de encubrimiento” (Bregalia Arias, 2003), ya que, “se colabora a los infractores de la norma penal de obtener un provecho económico de los efectos de la ejecución de un delito, manteniendo vigente la afectación al bien jurídico tutelado” (Gomez Pavon, 1988, pág. 68). Siendo ello así, “la receptación sería una forma de encubrimiento relacionada a la comisión de un delito previo” (Pumpido Ferreiro, 1955, pág. 17) .

A.2. Teoría del Aprovechamiento. –

La Teoría del aprovechamiento, afirma que “el sujeto activo se aprovecha u obtiene un beneficio económico de una actividad ilícita previa, es decir, a través de una situación antijurídica previamente creada se obtiene una ventaja económica” (Reategui Sanchez, 2015, pág. 421).

Armaza Galdós (1999), nos dice que “esta Teoría es adoptada en un fallo judicial del expediente N° 371-1998, de la Sala Mixta de Camaná, de fecha 17 de Setiembre de 1998, argumentándose que el ilícito de receptación consiste

esencialmente en aprovechar los efectos del delito antecedente, y, donde éste conserva su autonomía a pesar que el bien receptado sea el mismo que del delito antecedente” (pág. 144).

B. Teoría que considera a la administración de justicia como bien jurídico

De acuerdo a esta teoría, la receptación impide o afecta la recaudación del material probatorio sobre la realización del “delito precedente”, en el sentido que “la conducta del autor (receptador) entorpece u obstaculiza el accionar de las autoridades para hacer justicia, y, consecuentemente poder restituir el bien o la cosa a su legítimo propietario (víctima del delito anterior)” (Reategui Sanchez, 2015, pág. 422). En esta teoría no se tiene en cuenta la lesión patrimonial que se produzca por el actuar del autor.

Martos Nuñez (1985), precisa que: “el acto receptorio contribuye a la comisión de ilícitos de carácter patrimonial, así como, genera obstáculos a las autoridades para descubrir el delito y poder castigar al responsable, por cuanto, dificulta la recuperación del objeto” (pág. 180).

Por lo tanto, la comisión de este ilícito depende de la ejecución de un delito precedente o anterior (hurto, robo, apropiación ilícita, estafa, entre otros.), los cuales afectan al mismo bien jurídico protegido (patrimonio), siendo la diferencia que “el autor en el delito de receptación, aumenta o completa la lesividad al bien jurídico patrimonio” (Bajo Fernandez, 1991, pág. 483). A nuestro criterio diríamos que “el actuar del receptador implica mantener de manera indefinida una lesión al bien jurídico patrimonio, ya que, el legítimo propietario no puede disponer del bien o ve más remota su recuperación”.

2.1.5.2. Tipicidad Objetiva

2.1.5.2.1. Sujeto Activo

De acuerdo a lo regulado en el corpus penal, “cualquier ciudadano o persona, puede cometer este ilícito penal, sin embargo, no debe haber participado en el delito anterior o precedente”. Siendo ello así, en el delito de receptación, “el autor no debe haber tenido injerencia en la realización del delito previo”

(Dialogo con la Jurisprudencia, 2004, pág. 99).

En este mismo sentido, Bajo Fernández (1991), nos precisa que:

El autor en este delito, debe cumplir los siguientes requisitos: i) Haya intervenido en la etapa de agotamiento del delito precedente; ii) Tenga conocimiento del proceder ilícito de la cosa; iii) No haya intervenido de ninguna manera en el delito precedente. (pág. 484).

Peña Cabrera (2019) , nos precisa que:

El delito de receptación no exige al autor una “condición especial”, esto es, el receptor puede ser cualquiera, sin embargo, no pudo haber intervenido de ninguna manera o forma en el delito precedente, de lo contrario se estaría penalizando actos atípicos, los cuales son realizados posteriormente a la comisión de un delito. (pág. 111)

Al respecto, Prado Saldarriaga (2021) precisa que “cualquier persona puede ser autor en este delito. Sin embargo, el sujeto pasivo seguirá siendo el titular del bien mueble que fue objeto de un delito patrimonial previo como el hurto o robo.” (pág. 178)

En conclusión, cualquier ciudadano puede ser receptor, pero con la condición que no haya participado de ninguna manera o modo en el delito previo.

2.1.5.2.2. Sujeto Pasivo

En cuanto al sujeto pasivo en el delito de receptación, “es aquella persona (natural o jurídica), que en su condición de titular del bien (propietario o poseedor legítimo) es desposeído como consecuencia del hecho punible precedente (delito anterior)” (Peña Cabrera Freyre, 2019, pág. 112).

2.1.5.2.3. Objeto del delito

En cuanto al aspecto objetivo de este delito, es fundamental establecer la realización de un “delito antecedente o previo”, ya que, mediante la consumación de un delito precedente (hurto, robo, apropiación ilícita) se obtiene un apoderamiento ilegítimo o apropiación indebida de un bien mueble

ajeno, el cual posteriormente es adquirido, recibido (donación o prenda), guardado, escondido, o, vendido con pleno conocimiento de su procedencia ilícita, o, existiendo indicios suficientes para presumir la ilicitud de su procedencia.

En este sentido, autores como Armaza Galdós & Zavala Toya (1999), manifiestan que “en este delito es necesario la existencia o realización de un delito anterior” (pág. 26), por cuanto, “los bienes obtenidos deben ser de procedencia ilícita, de lo contrario la conducta es atípica” (Rojas Vargas, 2000, pág. 303).

James Reátegui (2015) , nos dice que “es necesario tener en cuenta que en los procesos penales donde se le impute a una persona el delito de receptación, debe necesariamente comprobarse la existencia de un hecho ilícito previo, a pesar que se desconozca el contexto de lo sucedido” (pág. 425).

Por ello, para la materialización del injusto penal de receptación, es necesario la remisión a un “hecho punible precedente”, entonces, debe verificarse que provenga de un ilícito ya cometido, puesto que, “si el desprendimiento patrimonial es directo del propietario, se configuraría otro delito contra el patrimonio” (Peña Cabrera Freyre, 2019, pág. 112)

Para la configuración de la receptación, es necesario que el delito previo o antecedente se haya consumado, contrario sensus, tratándose de delito tentado o frustrado, el agente del delito contra el patrimonio no tendrá la posibilidad de poder entregar el bien a un tercero (receptor).

Peña Cabrera (2019), nos dice que:

También puede configurarse el delito de receptación “cuando una persona adquiere, recibe o guarda un bien mediante un acto de disposición realizado por un inimputable (autor de un delito), porque, la reacción punitiva que vaya a recibir el autor del delito precedente (en el presente caso el inimputable) no influye en la imputación que se realice de este ilícito penal” (pág. 114).

Según, Salinas S. (2015), para la configuración de la receptación como delito “es irrelevante que el autor del delito precedente haya sido denunciado o condenado, ya que, cabe la posibilidad de no estar individualizado, o, haya prescrito la acción penal” (pág. 243).

De acuerdo a lo desarrollado precedentemente, podemos decir de manera concisa que el bien apropiado en la receptación, debe reunir las siguientes características: i) Debe haber sido el “objeto material” de un delito previo, ya sea, de un robo, hurto o apropiación ilícita; ii) debe ser el mismo del delito precedente (receptación en cadena y no sustitutiva).

Sobre este aspecto, Peña Cabrera (2019), afirma que “el objeto en la receptación son bienes de carácter económico que no solo provienen de ilícitos contra el patrimonio, sino también de delitos de infracción de deberes funcionales como malversación, peculado, entre otros” (pág. 118).

Desde nuestro punto de vista, no compartimos este pensamiento, ya que, la finalidad político criminal del delito de receptación está destinada a persuadir al ciudadano promedio de no comprar bienes o cosas de procedencia ilícita o de dudosa procedencia, bajo advertencia de ser sancionados penalmente, y, como consecuencia, al no existir demanda no habría oferta, por ende, los índices de criminalidad en delitos contra el patrimonio disminuirían prudencialmente.

Por lo tanto, “el objeto material en la receptación”, como elemento objetivo necesario para la configuración de este ilícito penal, debe ser un bien de procedencia ilícita, específicamente que provenga de un delito previo de naturaleza patrimonial (como robo, hurto, apropiación ilícita), entonces, estamos hablando de un “bien mueble ajeno” de estimación económica, que puede ser apoderado o sustraído por un tercer no legitimado.

De acuerdo a lo precisado, el objeto material del delito de receptación, pueden ser objetos como artefactos electrónicos (celular, televisor, entre otros), refacciones de un automóvil, así como, el papel moneda, los cheques, y diversos documentos, susceptibles de valor económico, que hayan sido robados o hurtados.

2.1.5.2.4. Comportamiento Típico

El artículo 194° del Código Penal, precisa una serie de comportamientos (adquirir, recibir, esconder, guardar, vender y negociar) para que se pueda configurar este ilícito penal.

En ese sentido, debe tenerse en cuenta las definiciones de la Real Academia Española, así como lo señalado por doctrinarios peruanos, a fin de tener una idea clara sobre los verbos rectores del delito de receptación.

Adquirir es hacer propio un derecho o cosa que a nadie pertenece o que se transmite a título lucrativo u oneroso, o por prescripción (Real Academia de la Lengua Española, 2020). En ese sentido, se obtendrá una cosa mediante un acto jurídico oneroso (compraventa, permuta, etc.), o gratuito (donación), el cual se perfecciona mediante la “traditio” (entrega).

Recibir es “tomar o hacerse cargo lo que le dan o le envían” (Real Academia de la Lengua Española, 2020).

La donación, en términos generales se entiende como la entrega gratuita de una cosa, ya sea mueble o inmueble. Siendo ello así, es definida como “la libertad que goza alguien de transmitir la cosa de su propiedad de manera gratuita a favor de otra que la acepta” (Española, Diccionario de la Lengua Española, 2020).

En ese sentido, **recibir en donación** es cuando un individuo recibe u acepta la cosa de manera gratuita a su favor.

Se configuraría esta modalidad delictiva cuando se reciba un objeto donado, conociendo su procedencia (naturaleza) delictiva del mismo.

La prenda es definida como “un contrato, donde se otorga a favor de otra persona una cosa, a cambio de garantizar el cumplimiento de una obligación crediticia personal”.

En ese sentido, **recibir en prenda**, consiste en que un sujeto acepta o recibe un bien mueble como garantía prendaria.

Se configurará este ilícito penal, “cuando el acreedor, acepta un bien mueble como garantía prendaria, a pesar de conocer la procedencia ilícita de la cosa” (Salinas Siccha, 2015, pág. 246)

Guardar, su significado es “poner algo donde esté seguro”, “conservar o retener algo”, “preservar algo del daño que le puede sobrevenir” (Española, Diccionario de la lengua española, 2020). Desde el aspecto jurídico, es tener una cosa con el fin de protegerla o cuidarla de cualquier peligro externo, ya sea, lícitos o ilícitos, que pudiera dañarla.

Conforme a lo indicado, guardar no es un acto de transferencia de un derecho real, ni mucho menos implica un acto de disposición sobre el bien, sino, “significa la posesión provisional de una cosa, existiendo la obligación de devolverla o entregarla a su titular” (Galvez & Delgado, 2012). En ese mismo sentido, se podría decir que “guardar es equivalente a depositar una cosa, existiendo la obligación de cuidarla hasta que sea solicitada por el titular o depositante” (Freyre, 1986).

Se configuraría esta modalidad delictiva de receptación, cuando el autor conozca la procedencia ilícita del bien, y, a pesar de ello proceda a guardarlo o custodiarlo. Es necesario precisar que el bien pudo ser entregado por el autor de delito previo e incluso por un tercero ajeno al hecho ilícito, generando la obligación de devolverle al mismo, cuando éste se lo requiera o conforme a lo acordado (el bien sea guardado por un tiempo determinado, y luego entregado).

Esconder, es “ocultar algo o no manifestarlo” (Española, DIRAE, 2020). En ese sentido, es tomar posesión de una cosa (bien mueble) y ocultarlo de los demás.

Se configuraría esta modalidad delictiva, cuando conociendo la naturaleza ilícita del bien, lo oculta con la finalidad de que los demás no lo lleguen a encontrar u identificar.

El vender, es traspasar la propiedad de un bien poseído a alguien por el precio pactado (Española, Diccionario de la Lengua Española, 2020), esto es, implica transferir el dominio de la cosa a favor de otra persona, conforme a los términos

contractuales convenidos.

Reategui Sanchez (2015), nos dice que “en el delito de receptación se obtiene un provecho, el cual puede ser compartido entre el propio receptor, así como con el autor del delito previo, es decir, significando una colaboración mutua para el aprovechamiento del ilícito penal previo” (pág. 430).

Cuando hablamos de **ayudar a negociar**, implica actuar como mediador en la realización de un acto negocial entre dos personas. Siendo ello así, se configurará esta modalidad delictiva cuando el autor interviniendo en su cualidad de mediador, incentiva o promueve que se compre un bien de procedencia ilícita. Es decir, el autor (receptor) tiene conocimiento que el bien que está ayudando a negociar o comerciar o vender es de procedencia delictuosa, así mismo, es necesario preciar que la persona que pretende adquirir o comprar el bien delictuoso, debe ser extraña a la comisión del delito precedente.

2.1.5.3. Tipicidad Subjetiva

Cuando hablamos del aspecto subjetivo de este ilícito, es fundamental que el autor tenga conocimiento de la procedencia delictuosa del bien poseído, mediante los siguientes actos: “adquirir, recibir (ya sea de manera gratuita como en donación u onerosa como la prenda), guardar, esconder, vender o, ayudar a vender”, o, en su defecto deber presumir su procedencia ilícita de los bienes que pretende obtener un provecho. En este sentido, el elemento subjetivo en el tipo penal de receptación está conformado por “conocer directamente” o “presumir” la procedencia ilícita de la cosa (delito precedente), y, la voluntad de aprovecharse de dicho bien.

De acuerdo a lo precisado, Reategui Sánchez (2015), sostiene que:

En el aspecto subjetivo del delito de receptación, existen dos niveles a tenerse en cuenta: i) El primero es el conocimiento de la realización de un delito previo de carácter patrimonial (apoderamiento ilegítimo de un bien mueble), constituyéndose como un “elemento normativo”, que no exige una información exacta del “hecho punible acontecido” (delito antecedente) y de su “nomen iures”, sino del estado anímico de certeza, esto es, un conocer

superior a la simple sospecha. En cuanto a la mera sospecha del proceder ilícito del bien, debe inferirse en razón de la “ausencia de prueba directa”, y, por el “contexto de los hechos” en la forma de obtener o adquirir el bien, es por ello que, se acreditará con los elementos probatorios necesarios, con la finalidad de establecer una relación causal y lógica, entre lo que se evidencia como modelo la medición un precio exiguo o de poco valor en la adquisición del bien procedente de un hecho ilícito”. Tratándose del segundo nivel, se encuentra el aprovechamiento, que abarca la utilidad que proporcionaría el bien de procedencia ilícita a favor del autor, pudiendo ser un disfrute directo para su uso, o, de carácter lucrativo.

Salinas S. (2015), nos dice que:

En cuanto al tipo subjetivo en la receptación, es indispensable que el autor tenga conocimiento de la procedencia ilícita del bien que va adquirirlo, recibirlo, o promover a su venta, o, en su defecto debía presumir su procedencia ilícita de los bienes que pretende obtener un provecho. En este sentido, el elemento subjetivo en el tipo penal de receptación está por el conocimiento pleno del proceder ilícito del bien, el cual ha sido obtenido generalmente mediante un delito contra el patrimonio (delito precedente), y, la voluntad de aprovecharse de dicho bien. (pág. 425)

Al respecto, en cuanto a la tipicidad subjetiva, Prado Saldarriaga (2021) señala que “admite tanto el dolo directo (el agente conoce la procedencia delictuosa del bien mueble que recepta) como el dolo eventual (el sujeto activo por las circunstancias concurrentes debía presumir la procedencia ilícita del bien mueble).” (pág. 179)

2.2. Análisis dogmático del “deber de presumir” la procedencia ilícita del bien en el delito de receptación conforme a los lineamientos jurídicos de la Teoría del Delito y de la Imputación (objetiva y subjetiva).

2.2.1. La Teoría del delito

Permite determinar la esencia del delito mediante una definición material de ésta, “la cual está informada por la función de la pena, por ello, comprende ciertas condiciones o exigencias para que una pena sea impuesta legítimamente” (García Caverro, 2019,

pág. 311). En este sentido, esta teoría permite a los operadores jurídicos poder determinar cuándo una conducta constituye delito, y, por ende, imponer al autor del delito una sanción penal establecida por la ley.

La dogmática penal, es una disciplina de las ciencias jurídicas en el ámbito penal, que tiene como objetivo definir el delito como tal, mediante la regulación positiva; siendo ello así, no se debe pretender que el contenido de la definición del delito tenga un carácter universal, exacto e inmutable.

Respecto a que no pretende tener un carácter exacto, es porque, “en virtud de la dogmática penal, se puede formular una serie de construcciones teóricas racionales, permitiendo un enriquecedor debate” (Silva Sanchez, 1992, pág. 170); en cambio, el carácter no inmutable, se refiere a que los planteamientos dogmáticos siempre deben encajar a un contexto histórico y social. Al respecto, Silva Sánchez (1992), indica que:

Los planteamientos dogmáticos siempre deben encajar a un contexto histórico y social, esto se debe, porque, “los conceptos evolucionan de acuerdo a la realidad social actual, por ello, los planteamientos dogmáticos (especialmente los de la Teoría del delito) no solo tienen como finalidad abordar a mejorar los conocimientos, sino, a poder ajustar a la actual realidad social”. (pág. 312)

En Perú como en los demás países de Latinoamérica, sus sistemas jurídicos penales tienen fuerte influencia del derecho español, el cual es influenciada por la dogmática jurídica-penal alemana, por lo tanto, en el Perú se adopta y aplica una Teoría del Delito de procedencia germánica (Hurtado Pozo, José; Prado Saldarriaga, Víctor, 2011, pág. 09).

La dogmática penal no se ha estancado en una determinada época o línea de tiempo, por el contrario, ha ido evolucionando en el transcurso del tiempo con la finalidad de sustentar todas aquellas decisiones jurídico-penales en deducciones racionales, y, por ende, sistematizar racionalmente los denominados “criterios de imputación penal”. Los primeros intentos de querer establecer una dogmática jurídica penal en Alemania fueron el resultado de una confrontación entre las concepciones racionalistas del derecho natural, y, las concepciones racionalistas positivistas de los siglos XVII y

XVIII.

Con la aparición de una dogmática penal positivista, se comenzó adoptar una teoría del delito desde un enfoque analítico, dejándose de lado una perspectiva unitaria del delito. Dentro de esta nueva tendencia, se comenzó a dividir o clasificar el delito, que de forma conjunta e interrelacionada entre sí, originaban el hecho delictivo (Jakobs, Derecho Penal: Parte General, 1998). Producto de los estudios realizados finalizando el siglo diecinueve y empezando el siglo veinte, se originó lo que en la actualidad llamamos “teoría clásica del delito”, cuyos pioneros son Ernest Von Beling (tipicidad) y Franz Von Liszt (antijuricidad), mediante este postulado teórico, el delito era concebido como “una sucesión causal de hechos dirigidos a producir una lesión al bien jurídico protegido” (Silva Sanchez, 1992, pág. 53).

La teoría clásica del delito recibió varias críticas, “debido a que se basa en la filosofía neokantiana, permitiendo la diferenciación de las ciencias naturales y las ciencias del espíritu” (Luzón Peña, 2016, pág. 26). En virtud de esta crítica al casualismo, se pudo advertir que “el injusto del delito” era dependiente a la voluntad del infractor de la norma penal (autor del delito), es por ello que, los elementos del tipo subjetivo se encuentran en la culpabilidad; en segundo lugar, “no solo se cuestionó el carácter objetivo, sino también, el aspecto valorativo y analítico” (García Caveró, 2019, pág. 319), en este sentido, Max Mayer puso en tela de juicio el carácter puramente descriptivo de la tipicidad, específicamente los denominados “elementos normativos”, cuya corroboración se realiza mediante una actividad valorativa a nivel del tipo penal (Mayer, 2007, pág. 182), siendo ello así, no es correcto asumir que la tipicidad como categoría dogmática es solo de naturaleza descriptiva.

La antijuricidad, como categoría dogmática, también fue criticada sobre la necesidad de incorporar valoraciones en el método analítico utilizado, “dando lugar que se menospreciara la transcendencia de su aspecto formal (contravención a la norma) y material (afectación al bien jurídico tutelado)” (Mezger, 1957, pág. 398), es decir, el hecho antijurídico, dejó de ser concebido como una “conducta contraria a la norma” para ser conceptualizada como un “comportamiento social dañoso”. Así mismo, se cuestionó en la teoría clásica sobre el aspecto subjetivo de la culpabilidad porque

resultaba defectuoso, sostener el método de los institutos penales, situados en la tipicidad, la cual resultaba difícil o imposible de encontrar el elemento cognoscente o volitivo como relación causal subjetiva con el resultado lesivo, como en los supuestos de la culpa inconsciente.

En virtud de las críticas recibidas a la teoría clásica o causalista, se reformuló esta teoría, dando origen a la concepción neoclásica del delito, debidamente representado por Edmund Mezger. Este nuevo planteamiento dogmático se siguió basando en la estructura del sistema clásico, que hacía una diferenciación entre el injusto penal (de carácter objetivo) y la culpabilidad (de carácter subjetivo), sin embargo, “fue de naturaleza valorativa y dependiente al elemento cultural” (García Caveró, 2019, pág. 321). En este sentido, “el hecho debía ser valorado desde un aspecto de la dañosidad social” (Mir Puig, 2008, pág. 1310), en cambio, “para corroborar la culpabilidad es necesario realizar un juicio de reproche a la conducta del autor, en relación a los patrones culturales de exigibilidad” (Mezger, 1957).

Posterior al sistema neoclásico del delito, se formuló una teoría basándose en estructuras universales e inmutables, a diferencia de la neoclásica que solo se basaba en un modelo neokantiano, basado en patrones culturales, y, en circunstancias de tiempo y espacio. Esta nueva Teoría del delito, es llamada el sistema finalista por Hans Welzel, la cual proponía que “todo legislador estaba supeditado a determinadas estructuras lógico-objetivas inmutables en su labor de regulación” (Welzel, 1964, pág. 06), por ello, estas estructuras deberían ser aplicadas al hecho delictivo de acuerdo como están reguladas en la norma.

Para Welzel (1969), “resalta como estructuras lógico-objetivas necesarias para la regulación penal a la acción humana como una acción final” (pág. 30), y, a la “libertad de voluntad, como la capacidad de poder regirse conforme a sentido” (Welzel, 1964, pág. 85). En este sentido, se definió a la acción en función a la “finalidad pretendida” o perseguida por el infractor de la norma penal, y, mediante esta manera se podría diferenciar los meros sucesos causales de la acción humana.

Según, García Caveró (2019), “en virtud de esta concepción, se da un cambio en la estructura del injusto penal, por cuanto, la tipicidad no solo abarcaría el aspecto

objetivo del hecho, sino, también abarcaría al dolo y la culpa, como formas de la tipicidad subjetiva” (pág. 323). Siendo ello así, “el dolo se definió como el conocimiento y voluntad para realizar una conducta típica, mientras que la culpa es definida como la infracción a un deber objetivo de cuidado” (Welzel, 1964, pág. 69).

Por otro lado, “la libertad de voluntad, como estructura lógica objetiva, tuvo una implicancia esencial en la estructura de la culpabilidad como categoría dogmática en la teoría del delito, pasó a ser comprendida como la ausencia de autodeterminación” (Welzel, 1964, pág. 93). Es por ello que, en razón de esta premisa conceptual, la culpabilidad se supedita a una subjetivación, en la medida que “el dolo en su modo natural formaría parte del tipo penal como resultado lógico de la concepción finalista de la acción, quedando únicamente en sede de culpabilidad el conocimiento de la antijuricidad del hecho” (Welzel, 1969, pág. 141).

En finales del Siglo XX, la doctrina dominante comienza a dejar de lado la metodología propuesta por el finalismo, pero sin dejar de lado los rasgos esenciales de la estructura del delito, como el injusto personal, la diferenciación entre el error de tipo y prohibición, y, el dominio del hecho (Roxin, 2015, pág. 21). En la actualidad, las categorías dogmáticas de la teoría del delito se normativizan, si bien esta concepción no es novedosa, ya que, anteriormente se ha pretendido esto, lo novedoso radicaría en que la teoría del delito se adaptaría a las exigencias sociales. Para, Roxin (1972), “las categorías dogmáticas de la teoría del delito deben estar basadas en fines político criminales de prevención, en cambio, Jakobs, también se orienta por la concepción normativista, pero en función de la denominada: “la identidad normativa de la sociedad”.

Se plantea que “la dogmática penal debe estar orientada a una política criminal preventiva, es decir, que entre ambas disciplinas debe existir una interrelación que se fortalezca en la normativización de las categorías dogmáticas del delito, con la finalidad de prevenir la comisión de delitos” (Roxin, 1972, pág. 33). En ese sentido, se afirmaría que la “reformulación normativista” que se plantea, no significa sustituir los elementos del delito, sino, en una realización de su contenido, siendo clasificada de la siguiente manera: tipicidad, antijuricidad y culpabilidad.

El sistema funcionalista propugnado por JAKOBS, tiene un punto de partida común con el planteamiento de ROXIN, el cual es definir normativamente los conceptos dogmáticos. Sin embargo, la propuesta de JAKOBS de poder normativizar las categorías dogmáticas, “no está orientado a limitaciones de carácter ontológico, sino, más bien en función de la pena, es decir, una normativización de la conducta, entendida como un quebrantamiento a la norma penal” (Jakobs, Derecho Penal: Parte General, 1998, pág. 35). En este sentido, se define al delito como “una unidad que contraviene a la norma penal, debiendo ser sancionada con una pena, en aras de revocar el sentido comunicativo del delito, es decir, recobrar la vigencia de la norma penal vulnerada” (Jakobs, Derecho Penal: Parte General, 1998, pág. 39).

2.2.2. La Acción

Una vez desarrollada de manera general, la evolución que ha tenido la Teoría del delito (dogmática penal), es necesario enfocarnos sobre la acción, ya que, ésta ha sido conceptualizada de diversas maneras de acuerdo a los diversos sistemas (clásico, neoclásico, finalismo y funcionalismo), la cual ha generado discusiones jurídico penales.

Desde un enfoque finalista, Welzel (1987), define a la acción como “la conducta humana voluntaria, que consiste en realizar un movimiento en el organismo, generando un cambio en el mundo exterior, y consecuentemente la vulneración de una norma prohibitiva” (pág. 53)

En este sentido, García Caverio (2019), nos dice que:

La acción ha sido definida en dos enfoques, los cuales son: i) como la base material para la tipificación del hecho punible; ii) la acción debe estar conceptualizada necesariamente desde el enfoque del derecho penal, en base a criterios jurídico penales (pág. 352).

La acción puede ser conceptualizada, desde una concepción general como aquella categoría dogmática que otorga unidad al delito que implica la defraudación de la norma penal vigente, en cambio, en el sentido estricto, la acción se constituye como aquel elemento esencial de la teoría del delito, sin el cual no es posible dotar de

relevancia penal a una acción lesiva.

2.2.3. La Tipicidad

Dentro de la Teoría del delito, encontramos la tipicidad como categoría dogmática penal, la cual nos permite identificar aquellas conductas de relevancia penal que resultan lesivas para determinados bienes jurídicos protegidos, es decir, una conducta será relevante penalmente cuando reúna determinados elementos o presupuestos previstos en el tipo penal correspondiente. Los tipos penales se encuentra contemplados en las disposiciones legales del Código Penal, en este sentido, en la configuración de un delito, es imprescindible analizar cómo es la redacción típica del dispositivo legal, para poder identificar qué elementos o presupuestos deben concurrir para que una conducta sea considerada un delito.

Roxin (2015), nos dice que:

La doctrina le atribuye a la tipicidad determinadas funciones, las cuales son: i) Político criminal, ii) Sistemática, iii) Dogmática. La primera función se orienta en garantizar, que la tipicidad abarcaría en definir los hechos o conductas punibles o sancionables penalmente. Tratándose de la función sistemática, está orientada a determinar de qué delito se trataría, teniendo en consideración los elementos típicos concurrentes. Por último, la función dogmática está orientada a establecer lo que abarca el dolo. (pág. 100)

Por otro lado, Jakobs (1998), nos dice que:

Como categoría dogmática, la tipicidad tiene un aspecto objetivo y subjetivo. Tratándose del aspecto objetivo, se orienta a establecer la repercusión social del comportamiento por infringir su rol social que se le atribuyó normativamente, en cambio, en su aspecto subjetivo, está orientado a la relación subjetiva de la conducta del autor con la infracción de su rol social. (pág. 45)

El aspecto objetivo y subjetivo de la tipicidad, “se encuentran interrelacionados, dado que el primero está comprendido en el segundo, siendo este último que define la relevancia jurídica de la conducta” (Rojas Aguirre, 2010, pág. 249)

Por lo tanto, ambos aspectos de la tipicidad, se complementan entre sí, para poder

determinar cuándo una conducta es típica, conforme al cumplimiento de los elementos exigidos, y, por ende, se pueda imputar responsabilidad penal.

2.2.4. Imputación Objetiva. –

En la dogmática penal encontramos a la imputación objetiva, siendo actualmente una herramienta dogmática de gran utilidad en la praxis fiscal y judicial, por cuanto, permite solucionar hechos con presunta relevancia jurídica penal. En ese sentido, “la imputación objetiva permite delimitar cuando los comportamientos se encontrarían en un espacio jurídicamente aceptado” (Frisancho, 2016, pág. 24), así mismo, cuando una “conducta es socialmente reprochable” (Jakobs, 2007, pág. 238).

Según Villavicencio (2006), “es el resultado de que el tipo penal se haya normativizado, siendo entendida como una teoría universal de la conducta típicamente relevante” (pág. 321). En otros términos, la imputación objetiva es “un mecanismo normativizado orientado a restringir la responsabilidad penal, dejando de lado las posibles causas del resultado” (Jescheck & Weigend, 2003, pág. 28).

Al respecto, el profesor Almanza Altamirano (2022) indica que “la imputación objetiva exige verificar si la acción ha generado un riesgo jurídicamente prohibido, y, si dicho resultado es consecuencia de este riesgo creado” (pág. 195)

En ese sentido, García Caveró (2019), precisa que “la imputación objetiva permite establecer cuando una conducta o suceso lesivo debe ser reprochado penalmente, es decir, atribuido normativamente como injusto penal, como consecuencia del incumplimiento de un deber jurídico” (pág. 413).

Cuando desarrollamos la imputación objetiva, es necesario mencionar el “rol social”, tanto en un concepto genérico siendo entendido como “el status o posición que tiene una persona en la sociedad”. Por otro lado, desde una concepción específica, es entendida como “un sistema de status bien definidos de manera normativa, siendo ocupados por personas sustituibles o intercambiables” (Jakobs, 1996), por otro lado, desde un enfoque sociológico-jurídico, se le concibe al rol social como “un conjunto de expectativas, que a pesar de ser realizadas por los individuos, se espera que se comporte de cierta manera en razón de su posición social” (Vera & Gomez Trelles,

2002, pág. 72).

Según Frisancho (2016), “en base a los conceptos del rol social, se va desarrollando las esferas de competencia, y, virtud de ellos las expectativas sociales en virtud del rol social” (pág. 28). En ese sentido, Caro Jhon (2003)., afirma que “el rol que cada individuo desempeña en la sociedad es determinante para determinar si su accionar puede ser considerado típicamente relevante para el derecho penal” (pág. 26). En ese sentido, “el rol que desempeña toda persona en sus ámbitos de interacción (como profesor, policía, medico, taxista, entre otros) delimita su responsabilidad con sus propios actos” (Miro Llinares & Orts, 2010, pág. 19).

El “rol social” se encarga de establecer las expectativas que debemos tener para un individuo de acuerdo a su “posición social”, por ende, “tiene la virtualidad funcional de comunicar a los demás y también al propio titular del ámbito de organización qué es lo que debe o no hacer en determinada posición dentro del contexto de interacción social” (Frisancho, 2016, pág. 30).

De acuerdo a lo explicado, podemos precisar que la “posición social” desempeñada, implica un “factor normativo” con las siguientes funciones:

- i) Aspecto Formal o externo. – “permite identificar socialmente a un individuo, esto es, otorga una etiqueta, que permite diferenciar su status de los demás” (Jakobs, 1996, pág. 50). Por ello, “a pesar de no conocer a una persona, por su forma de vestir se le puede identificar su posición o rol social” (Miro Llinares & Orts, 2010, pág. 38).
- ii) Aspecto Material o interno. – “permite definir los deberes y derechos intrínsecos del rol social de cada individuo” (Frisancho, 2016), como sería un funcionario estatal que tiene el derecho de recibir una remuneración justa, pero a su vez el deber de llevar a cabo una correcta administración pública en base a sus funciones.

Otro aspecto que es necesario en la imputación objetiva es sobre “el principio de autoresponsabilidad”, ya que, de acuerdo a éste “todo individuo únicamente es responsable de sus propias acciones o actos”; es decir, “toda persona en virtud de la autodeterminación sin intervenciones externas, tiene la libertad (jurídicamente reconocida) de tomar decisiones por su propia cuenta, siendo los únicos límites: el

respeto de los derechos constitucionales y del ordenamiento jurídico (normas de mandato, prohibitivas)” (Frisancho, 2016, pág. 32).

Sobre este punto, José Frisancho (2016), nos dice que “el sistema de imputación, se basa exclusivamente en la autorresponsabilidad de la persona humana, es decir, cada individuo es responsable de sus propios actos o decisiones, mas no de los demás sucesos o acontecimientos del mundo exterior” (pág. 35).

Por lo tanto, conforme a lo descrito precedentemente, el “rol social” y “la autorresponsabilidad”, “son dos términos basados en la atribución normativista de conductas lesivas, los cuales están interrelacionados a la imputación objetiva” (Frisancho, 2016, pág. 36). Los cuales permiten que únicamente se podrá imputar a una persona un resultado lesivo, si es que ha incumplido sus deberes intrínsecos a su “rol social”.

Mediante esta teoría se puede imputar objetivamente a una persona ser el autor del resultado causado, ya sea como un injusto “doloso” o “culposo”, para ello, siendo necesario determinar si la acción realizada concretamente causó el resultado lesivo y que se cumplan las exigencias típicas requeridas para la configuración del delito; implicando que dicha acción o conducta supere el marco del riesgo jurídicamente permitido, convirtiéndose en un riesgo jurídicamente prohibido (riesgo penalmente relevante). En ese sentido, se llegará a determinar que una persona actuó conforme a su rol social, esto es, se ha limitado a cumplir sus deberes (general o especial) en relación a su ámbito de competencia, entonces, “es irrelevante pretender indagar el ámbito subjetivo, de quien realizó el comportamiento” (Jakobs, 1997, pág. 302).

2.2.4.1. Criterios Dogmáticos de la Imputación Objetiva. –

Los criterios dogmáticos que son utilizados o aplicados en la imputación objetiva, son los propuestos por los juristas alemanes: “Claus Roxin” y “Günther Jakobs”, siendo necesario precisarlos.

A. Los Criterios de Imputación de Roxin

Conforme a los postulados doctrinarios de Roxin, “en los delitos dolosos de resultados, la imputación se efectúa en dos fases: primero, se realizará un análisis

de la relación de causalidad o nexo causal, y luego, un análisis de los presupuestos objetivo de la imputación” (Rodas Vera, 2006, pág. 112).

De acuerdo a la imputación objetiva, un resultado lesivo será atribuible a una persona cuando “ese comportamiento haya generado un riesgo prohibido para el objeto de acción, entonces, el resultado se justifica en la creación del riesgo, encontrándose en el alcance de la norma penal” (Cancio Mela, 2004, pág. 52).

Teniéndose en cuenta que son varias las ideas y pensamientos de Roxin sobre la imputación objetiva, solo me enfocaré en precisar de manera general los criterios que el autor elabora.

A.1. Nexos de Causalidad

Al tratar este presupuesto de la imputación objetiva, debemos abarcar la “causalidad natural”, que significa la relación causal entre “acción y resultado lesivo”. Sobre este aspecto, Claudia López (2005), precisa que:

Cuando se altera o varía el mundo externo, se requiere una relación causal entre la acción y el resultado lesivo, ya que, es necesario se explique en base a la ley natural, cómo es que una acción humana a dado origen a un suceso causal. (pág. 142)

A.2. Creación de un riesgo no permitido

Consiste en que la acción creada genera un “riesgo jurídico desaprobado”, que abarca como un elemento común para todos los delitos (ya sean, comisivos, omisivos, dolosos y culposos,). En ese sentido, la acción que ha originado un peligro no permitido debe constituir un riesgo “típicamente relevante”, es decir, “no debe estar comprendido dentro del ámbito del riesgo permitido (socialmente adecuado), de lo contrario se excluiría la imputación” (Villavicencio Terreros, 2007, pág. 257).

Roxin considera que constantemente estamos expuestos a una serie de riesgos, esto se debe porque vivimos en una sociedad moderna tecnológica, la cual implica la realización necesaria de actividades como el tráfico rodado, las industrias, deportes, entre otros, para que la sociedad pueda funcionar con normalidad. Por lo

tanto, es normal que existan riesgos en las diversas actividades que desarrolla el hombre, sin embargo, estos riesgos son permitidos (aceptados), ya que, son necesarios para el funcionamiento de una sociedad moderna (utilidad social). No obstante, existen riesgos que al ser permitidos deben ser desarrollados conforme a los lineamientos jurídicos (normas, reglamentos, ley artix) o sociales (normas estándar de conducta), como es el caso del médico que realiza operaciones quirúrgicas, siendo necesario que éste cumpla determinados protocolos médicos (asepsia, esterilización de instrumentos quirúrgicos).

De acuerdo a lo propuesto por Roxin, la exclusión de la imputación objetiva se da en los siguientes supuestos: i) en caso de disminución del riesgo; ii) en caso de ausencia de creación del riesgo; iii) en los casos de riesgo permitido, iv) aumento del riesgo permitido.

El primer supuesto se produce cuando para anular o suprimir un “resultado lesivo de gran magnitud” se recurre a otro resultado lesivo de menor intensidad para el bien jurídico, es decir, menos dañoso para el bien jurídico.

En ese sentido, Roxin (2015), nos dice que “ante una situación peligrosa, donde se va generar una lesión, se genera otra situación peligrosa pero menos lesiva, entonces, no cometerá lesiones, dado que desvió el suceso causal primigenio” (pág. 365). Por ejemplo, cuando va caer una maceta en la cabeza de una persona, pero se logra desviar, cayéndole en el brazo, es decir, logrando una lesión en otra parte del cuerpo.

Lo que Roxin nos trata de decir es que, el causante no tiene la intención de causar un perjuicio contra la víctima, sino procura disminuir la intensidad de las consecuencias de la inevitable desgracia, es decir, se trata de evitar que el eventual resultado lesivo inicial no sea tan perjudicial para la víctima, por ende, produciéndose un resultado lesivo de menor grado (menos dañoso para el bien jurídico).

Mir Puig (2006), considera que son tres presupuestos a cumplirse para descartar los supuestos de disminución de riesgo, los cuales son: “i) el bien jurídico debe pertenecer a una sola persona; ii) solo debe haber una relación de riesgo; iii) no

exista la obligación de reducir o evitar el peligro”. (pág. 253).

Se debe tener en cuenta que existen riesgos en la sociedad, ya sea, como salir a caminar, ejercitarse, subir en un ascensor, etc.; siendo necesarias estas actividades para la realización de la persona, por ello, estas conductas no son punibles en su realización. En ese sentido, el aumento o disminución de un riesgo permitido es regulado por el derecho, por ende, ante la ausencia de un aumento o disminución de riesgo socialmente aceptado, no se podrá imputar a una persona un resultado lesivo.

En el tercer supuesto, como ya se ha explicado en toda sociedad moderna tecnológica están presentes los riesgos - en sus diversas actividades productivas, extractivas, industriales, turísticas -. Estos riesgos son socialmente aceptados porque son de “utilidad para la sociedad”, a pesar que crean riesgos lesivos para los bienes jurídicos.

Por último, tratándose de “aumentar el riesgo permitido”, “se origina cuando el resultado lesivo se hubiera originado a pesar de actuar de manera diligente o cuidadosa” (Velez Fernandez, 2008, pág. 03). Siendo ello así, la acción del autor no es típicamente relevante, dado que no significa un incremento del riesgo permitido.

Sobre este aspecto, Claudia López (Díaz, 2005), nos dice que:

Aquí entra en consideración los supuestos denominados “conductas alternativas conforme a derecho”, significa que a pesar de observar el “deber de cuidado”, es decir, haberse adoptado o no las medidas preventivas necesarias, se habría producido el mismo resultado lesivo. Por ejemplo: el conductor que respeta las normas de tránsito, manejando a una velocidad permitida y distancia adecuada de los demás vehículos, sin embargo, un ciclista imprudente no respetando la distancia se mete al carril del camión, ocasionándole la muerte. Se considera que el accidente se hubiera producido aun cuando “A” no hubiera mantenido la distancia lateral exigida. (pág. 162)

A.3. Riesgo en el resultado (relación de riesgo)

Cuando el sujeto crea un “riesgo prohibido o desaprobado” es necesario se compruebe la “relación de riesgo”, es decir, “el riesgo originado por el accionar del autor sea el mismo que originó el resultado lesivo” (Díaz, 2005, pág. 161). Por ende, “para efectos que el resultado lesivo sea atribuible a una persona que ha creado un riesgo desaprobado, es imperativo que exista una “relación de riesgos”, con la finalidad que “el resultado se justifique objetivamente en el riesgo prohibido” (Arquiño, 2010, págs. 33-34).

En ese sentido, en caso el resultado lesivo no se justifica en la creación del riesgo desaprobado (esto es, al creado inicialmente), entonces, el resultado producido no puede atribuírsele al autor, en su defecto, “la conducta deberá ser valorada conforme a las reglas de la tentativa en el caso de los delitos dolosos, o incluso en algunos eventos quedará impune al tratarse de un delito imprudente” (Díaz, 2005, pág. 161). Por ende, es necesario corroborarse la existencia de una “relación de riesgo”, y no solo una “relación de causalidad”, de lo contrario no podría efectuarse un juicio de imputación.

Sobre este punto, Roxin (2015), plantea como ejemplo “cuando una persona llega a un hospital por un envenenamiento vitamínico, pero fallece por una fuerte infección, En este caso, el resultado lesivo (muerte) no se justifica con el riesgo prohibido creado” (pág. 374).

Otros ejemplos, podríamos decir: i) “A” ocasiona una lesión leve a “B”, pero cuando éste se dirige a la farmacia a comprar medicamentos (analgésicos y desinflamatorios), un automóvil lo atropella, y muere; ii) “A” le dispara a “B”, causándole una herida grave, produciéndole una hemorragia, siendo necesario una transfusión de sangre, sin embargo, “B” se niega, porque son contrarios a sus pensamientos o creencias religiosas. En estos casos, como es de manifiesto, la creación del peligro, no se justifica en el resultado, sino en la “relación de riesgo”.

A.4. Fin de protección de la norma

Permite solucionar situaciones donde a pesar de crear un riesgo prohibido, y generando un resultado lesivo, no se puede imputar esta conducta lesiva debido a

que “no es el que se pretende evitar con la norma penal” (Velez Fernandez, 2008, pág. 03). Por ejemplo, “X” al enterarse que su hija ha fallecido como consecuencia de un accidente de tránsito, le produce un infarto fulminante, ocasionándole de manera instantánea la muerte. tratándose de este ejemplo, para saber si el riesgo creado originó el resultado lesivo (en el presente caso, la muerte de X), debe efectuarse un análisis de la “norma de cuidado” quebrantada (incumplido) y preguntar su finalidad. Siendo así, el autor responderá por el delito de homicidio culposo respecto a la hija de “X”, mas no respondería penalmente por la muerte de “X”.

Debe tenerse en cuenta que este criterio dogmático, se aplica generalmente para los “daños sobrevenidos posteriormente”, es decir, “cuando se origina un daño posterior, específicamente, en casos de acciones de salvamento arriesgados” (Rodas Vera, 2006, pág. 113).

B. Los Criterios de Imputación de Jakobs

Actualmente esta teoría se ha convertido en esencial para la solución de casos prácticos, identificando a las conductas que merecen un reproche penal, y descartando a las irrelevantes” (Velez Fernandez, 2008, pág. 03).

Jakobs y Cancio (2000), nos dicen que:

La Teoría de la imputación objetiva se divide en dos niveles: a) La calificación del comportamiento como típico (imputación objetiva del comportamiento); b) La Constatación – en el ámbito de los delitos de resultado – de que el resultado producido queda explicado precisamente por el comportamiento objetivamente imputable (pág. 23).

Jakobs (2000), propone cuatro instituciones dogmáticas para poder realizarse el juicio de tipicidad, las cuales son: i) el riesgo permitido, ii) principio de confianza, iii) prohibición de regreso, iv) actuación a riesgo propio de la víctima (competencia de la víctima).

B.1. Riesgo Permitido. –

Cuando se habla de riesgo permitido, se debe tener en cuenta que todos los seres

humanos vivimos constantemente en una interacción social con los demás, por ende, estamos expuestos a una serie de riesgos propios de una sociedad moderna y tecnológica. En ese sentido, Villavicencio T. (2007), precisa que “en toda sociedad existen riesgos, pero que son permitidos socialmente, en razón que son necesarios para la vida cotidiana, es por ello que, no todo riesgo significa imputación penal” (pág. 257).

Frisancho (2016), nos dice que “el riesgo permitido en la moderna imputación objetiva, se ha convertido en una institución que permite exonerar de responsabilidad, a pesar de causar una lesión al bien jurídico tutelado, o, en todo caso filtrar las conductas típicas”. (pág. 49)

Por lo tanto, la sociedad actual es una sociedad de riesgos, “esto se debe a los desarrollos tecnológicos y a la avanzada industrialización de las actividades humanas” (Frisancho, 2016, pág. 51). Sin embargo, las propias actividades rutinarias o cotidianas generan riesgos para los ciudadanos, como: i) cruzar una calle y no percatarse que un desagüe no tiene tapa, y lesionarse por la caída; ii) pasar cerca de una construcción, pudiendo lesionarse con algún material de construcción mal ubicado, e incluso los que trabajan en la construcción pueden sufrir graves lesiones; iii) cruzar alguna avenida y ser atropellado por algún conductor imprudente; iv) jugar fútbol y recibir un golpe (leve o grave) en alguna parte del cuerpo, generando una lesión leve o grave, entre otros.

Es interesante precisar que “toda sociedad, en la medida que va evolucionando, comienza a reconocer y aceptar los riesgos que implican las actividades que son de utilidad en la vida diaria” (Frisancho, 2016, pág. 50). Es decir, la sociedad reconoce la existencia de estos riesgos, pero los tolera, debido a que son necesarios para el desarrollo cotidiano de sus vidas.

Para Preus (1974), los casos que abarcaría el riesgo permitido, serían: i) En acciones de utilidad social; ii) En supuestos de imprevisibilidad; iii) En las acciones arriesgadas de salvamento; iv) Por consentimiento propio de la acción y peligro. El primero, están comprendido los que facilitan las actividades diarias o rutinarias en la sociedad, como el tráfico vehicular, aéreo, ferroviario, marítimo,

entre otros. Tratándose del segundo, están aquellos casos como “cuando una persona decide por riesgo propio querer viajar en un tranvía o avión”, entonces, no generándose un riesgo típico. En el caso del tercero, se trataría cuando por querer salvar a una persona del ataque de un animal salvaje (por ejemplo, un oso) se le dispara a este, sin embargo, la bala rebota y le cae a la persona, muriendo ésta, otro caso, sería el padre desesperado por salvar a sus pequeños hijos de un incendio se tira por la ventana. Por último, el del consentimiento propio, existe cierta aceptación doctrinaria para tratarlo como una causa de justificación, algunos lo consideran que es parte del riesgo permitido; los supuestos que abarcarían, serían los “deportes de alto riesgo” como el futbol, boxeo, atletismo, entre otros, por cuanto, en la sociedad no es considerado inadecuado una lesión como consecuencia de un partido de futbol, beisbol, rugby o de básquet, a pesar que se haya realizado de manera intencional y/o se infrinja el reglamento del juego.

Por otro lado, Caro Jhon (2014), nos dice que:

Los estándares o criterios que sirven para delinear los contornos del riesgo permitido y diferenciarlo con el riesgo penalmente relevante (riesgo prohibido), son los siguientes: i) El Código Penal (como corpus normativo, establece las infracciones a determinados comportamientos reprochables); ii) Las normas especiales (se recurre a las normas en materia ambiental, tributaria, entre otros); iii) Las normas de la “lex artis” (reglas que orientan las actividades profesionales como manuales, reglamentos, entre otros); iv) Las normas de estándar de conducta (son propias de las actividades rutinarias, propio de la realización de un oficio o actividad diaria, como un albañil, gasfitero, taxista, entre otros)

B.2. Principio de confianza. –

El ser humano como ser social tiene una orientación a interrelacionarse con los demás, con un mínimo de confianza en que los demás actuarán conforme a sus deberes impuestos por ley. En ese sentido, cuando “las personas se relacionan socialmente, el cual significa que, una interrelación de comportamientos entre sí, estos no pueden ser susceptibles de un “control social” constante, de lo contrario

se imposibilitaría una división de trabajo” (Jakobs, 1996, pág. 29).

En ese sentido, podemos decir que cada persona responde solo por sus acciones mas no la de terceros, esto es, las que se encuentren bajo el “ámbito de su competencia”, ya que, el “rol del ciudadano no implica controlar la conducta de los demás o terceros, que puedan originar riesgos a la comunidad” (Díaz, 2005, pág. 155). Debe tenerse en cuenta que el “principio de confianza” tiene su fundamento en el “principio de autorresponsabilidad” (cada uno responde por sus propios actos).

Este criterio normativo, complementa “el riesgo permitido”, entendiéndose que las premisas o afirmaciones mencionadas constituyen una simplificación de la imputación objetiva.

Existen varios postulados en cuanto al fundamento del principio de confianza, siendo los más relevantes:

- a) El primer postulado, afirma que “se justifica en la necesidad de garantizar la finalidad de la norma penal” (Alcocer Huaranga, 2015, pág. 32). Sobre este punto, Maraver (2011), indica que: “se debe confiar en que los demás individuos actuarán correctamente, de lo contrario carecen de sentido las normas jurídicas, por cuanto, éstas tienen como fin orientar las conductas de la sociedad” (pág. 40).
- b) Tratándose del segundo postulado, “se recurre a una ponderación de los intereses” (Alcocer Huaranga, 2015, pág. 32). Sobre este punto, Maraver (2011), afirma que “algunos únicamente se están delimitando en considerar al principio de confianza como necesario para la realización y/o desarrollo de ciertas actividades, implicando una división de trabajo, como sucede en la praxis médica, actividades empresariales e industriales, entre otros” (pág. 40).
- c) El último postulado, se justifica en la denominada “autorresponsabilidad”. En ese sentido, “toda persona debe actuar conforme a sus deberes inherentes a su rol, sin preocuparse por el comportamiento de los demás” (Nieves, 2013, pág. 113).

Por su lado, Claudia López (2005), sostiene que “este principio actualmente se viene utilizando en estos ámbitos: tráfico vehicular, trabajos en equipos, como solución en los casos donde se posibilitó la realización de un delito doloso por un tercero, y, en la problemática de la realización de riesgos” (pág. 155).

- a) Tratándose del primer ámbito, toda persona que conduce una unidad vehicular se encuentra supeditada al cumplimiento de las “reglas de tráfico”, siendo ello así, tiene la confianza de que los demás actuarán conforme las reglas de tránsito y normas de transporte vehicular.
- b) El segundo ámbito, se refiere a que toda persona actuará conforme a sus deberes propios de su “rol social”, siempre y cuando, no se le imponga el deber de supervisar y controlar las acciones de los demás colaboradores, salvo que dicha exigencia sea un deber inherente a su “rol social”.
- c) El tercer ámbito, ocurre cuando una persona en el ejercicio de su “rol social”, esto es, “actuando conforme a sus deberes” ha permitido la realización de un hecho ilícito doloso, como sería un vendedor que ha vendido un juego de herramientas, sin saber que éstas serían utilizadas para ingresar a una casa y hurtar los objetos de ésta.
- d) Por último, en los problemas de realización de riesgos, se debe ejemplificar para comprender la utilidad del principio de confianza en estos supuestos, como sería cuando “B” le dispara a “A” siendo trasladado al hospital, y en vez que el médico extraiga la bala lo opera de la apendicitis, dando como resultado la muerte de “A”. En este caso, se espera que el medico haya actuado conforme a la “lex artis” (pág. 155).

Sobre el último supuesto planteado, considero que existía una confianza respecto a que “el médico en cumplimiento de su “rol social”, debió actuar de acuerdo a la “lex artis”, esto es, conforme a las exigencias técnicas y normativas que implica ser un profesional en ejercicio.

Actualmente la jurisprudencia peruana viene aplicando en varios fallos casatorios “el principio de confianza” para poder excluir de responsabilidad penal a los condenados.

Claudia López (2005), afirma que:

La aplicación del principio de confianza tiene excepciones: i) Cuando surgen circunstancias especiales, se puede inferir que el otro participante en el tráfico no va cumplir con los deberes que emana de su rol; ii) Como el principio de confianza se basa en la auto responsabilidad, no se puede esperar de determinadas personas una conducta ajustada al rol signado (niños, adultos, ebrios); iii) Cuando el “deber de cuidado” de una persona consiste precisamente en la vigilancia y control de otras que se encuentra bajo su dependencia (por ejemplo, el médico internista tiene vigilancia respecto al médico que hace la especialización). (pág. 156)

Por lo tanto, cada persona solo responderá por sus propias acciones o actos que recaen en su “ámbito de competencia” (deber general o especial), ya que no forma parte del “rol del ciudadano” controlar y supervisar los probables riesgos a suscitarse por las acciones de los demás o terceros. En ese sentido, “el principio de confianza funciona como un criterio dogmático para excluir la imputación objetiva del resultado”.

B.3. Prohibición de Regreso. -

Según, Frisancho (2016), “esta institución dogmática ha tenido una notable evolución en el ámbito de la teoría de la imputación” (pág. 73). En ese mismo sentido, Villavicencio (2007), precisa que “actualmente se ha estatuido como un criterio delimitador de la imputación, por cuanto, una conducta estereotipada, neutral y cotidiana no puede constituir un tipo de participación o intervención en la realización de un hecho ilícito doloso cometido por un tercero” (pág. 261), es decir, este tipo de conductas basadas en el “rol social” es irrelevante para el derecho penal.

En ese sentido, no se puede responsabilizar penalmente a una persona por los “actos ilícitos dolosos” cometidos por un tercero, debido a su aportación en el ejercicio de su “rol social”; ya que, esto implicaría “una grave limitación a las esferas de libertad de los ciudadanos, impidiendo un libre desarrollo como personas y una adecuada convivencia en sociedad” (Frisancho, 2016, pág. 74).

Sobre estos aspectos, Jakobs (1996), señala que:

La prohibición de regreso se basa en la idea que no se puede hacer responsable a quien realiza una aportación que en si misma cotidiana y socialmente inofensiva, y que solo por la puesta de marcha de planes de terceros puede adquirir el sentido de un curso dañoso (pág. 24).

La Corte Suprema viene aplicando esta institución en determinados casos denominados como “el caso del taxista” (Sentencia del Expediente N° 4166-1999-Lima, emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema), y, de la “embarcación pesquera” (Sentencia del Expediente N° 1645-2018-Santa, emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema). Siendo lo resaltante de estos casos, que se absuelve al acusado de los hechos imputados, debido a que actuó conforme a su rol social, esto es, su contribución social es neutral, cotidiana o estandarizada, ya que, actuó conforme a su “status” o “posición social” (ya sea como taxista, o como patrón de embarcación).

Frisancho (2016), sostiene que:

La aplicación de este criterio liberador de responsabilidad, tiene ciertas limitaciones, las cuales son:

- a) De quien desvía su actuación de cualquier modo, esto es, adaptando su “conducta inicialmente inocua” al contexto delictivo creado por el autor, para permitir la realización efectiva del hecho ilícito.
- b) En el caso de un “deber de garante”, se exige al garante evitar posibles afectaciones o daños al bien jurídico tutelado; siendo ello así, en caso se incumpla las mismas, su conducta es “reprochable penalmente” en razón de su “deber de garante”.

B.4. Actuación a riesgo propio de la víctima, o competencia de la víctima

Cuando se trata la “auto puesta en peligro” o “ámbito de competencia de la víctima”, el comportamiento de la víctima guarda relevante importancia, por cuanto, su propio actuar a dado lugar al inicio de un “suceso causal”, y consecuentemente un resultado lesivo a su propio bien jurídico tutelado. Siendo

ello así, Fernández (2008), indica que “mediante este criterio de imputación objetiva se está introduciendo elementos valorativos, orientados a establecer los límites de la libertad de actuación, esto es, los ámbitos de responsabilidad” (pág. 4)

En ese sentido, Alcocer Huarango (2015), nos dice que:

La imputación de la víctima tiene lugar cuando la aparente víctima ha infringido determinadas “reglas de auto protección”, erigiéndose sobre el principio de autorresponsabilidad, es decir, cada uno es responsable de sus acciones o actos. Por lo tanto, en virtud de esta institución, se excluye de responsabilidad objetiva, cuando el riesgo prohibido ha sido creado por la propia víctima. (pág. 38)

De acuerdo a lo descrito, podemos decir que: “si es la propia víctima quien con su accionar contribuye a la generación de un riesgo típico, entonces, la imputación recaerá sobre su ámbito de competencia, es decir, será responsable del resultado lesivo que se produzca”.

2.2.5. La Imputación subjetiva. –

En el presente acápite de este trabajo de investigación, solo trataré sobre el dolo (definición, criterios de imputación), mas no la culpa, toda vez que por doctrina mayoritaria se ha establecido que “la receptación es un delito de carácter doloso” mas no culposo, postura asumida también en el presente trabajo de investigación, haciendo a su vez una interpretación armónica con lo normado en el artículo doce del código penal, el cual prescribe en su segundo párrafo que “el agente de infracción culposa es punible en los casos expresamente establecidos por ley”, es decir, si en el tipo penal no se advierte la modalidad culposa que despliega el agente (Por ej. El que, por culpa, ...), entonces la conducta, se entiende, sería de naturaleza dolosa.

En la dogmática jurídica penal, se plantean dos posiciones para fundamentar una imputación subjetiva, las cuales son: la primera, una concepción psicologista, y, la segunda, una concepción normativista.

Sobre este punto, Caro Jhon (2012), nos dice que:

Existen dos grupos que sustentan la imputación subjetiva, los cuales son los postulados de las “teorías psicologicistas” y “teorías normativistas”. Los primeros se apoyan en realizar un razonamiento en base a una concepción naturalística de la realidad, donde la imputación subjetiva se configurará mediante la comprobación de la “psique del actuante” y establecer la existencia de “representaciones mentales”. Tratándose de los normativistas, se basa en la premisa que al derecho penal solo le interesa “el resultado de una atribución de sentido normativo” a un aspecto del conocimiento humano. (pág. 24)

2.2.5.1. Concepción psicologicista

Dentro de las teorías psicologicistas se encuentra la “teoría de la voluntad” y la “teoría del conocimiento”. La primera, sostiene que la voluntad como elemento subjetivo en el resultado lesivo, permitiendo diferenciar “dolo” y “culpa”. En ese sentido, “el dolo es el conocimiento del hecho más la voluntad respecto del resultado, mientras que culpa sería el conocimiento del hecho, pero sin voluntad de producir el resultado” (García Caveró, 2019, pág. 500). La segunda, argumenta que la diferencia entre dolo y culpa, radicaría en el “conocimiento”, sin embargo, esta concepción teórica ha sido criticada por extender en demasía los alcances del dolo, llegando al extremo de sacar en el ámbito de la culpa a la “culpa consciente”, por ello, se plantea como criterio delimitador de las conductas dolosas a la “teoría de la probabilidad”, “la cual exige no solo que el autor se represente el resultado, sino que exista un grado relevante de probabilidad de su producción” (Roxin, 2015, pág. 42); así mismo, elimina la clasificación del dolo.

2.2.5.1.2. Dolo. –

Actualmente el ordenamiento jurídico peruano, considera que el dolo es tanto conocimiento como voluntad, y ante la falta de una de ellas, no es posible imputar subjetivamente el resultado lesivo al autor. Es decir, tiene una concepción psicologicista del dolo. Al respecto, autores como Amaya, Sanchez Tómas & Alcaecer (2007), “consideran al dolo como el conocimiento y voluntad en ejecutar los elementos típicos de un injusto penal, en este sentido, en el actual sistema del delito, el dolo forma parte de la tipicidad del delito, y,

ya no de la culpabilidad” (pág. 144).

3.2.5.1.2. Clases de Dolo. –

Considero necesario una distinción de tipos de dolo, debido a que, en la propia estructura del delito de receptación, en el aspecto subjetivo encontramos al dolo directo (conocer la procedencia ilícita del bien) y dolo eventual (deber presumir la procedencia ilícita del bien) que darían lugar a su consumación.

A. Dolo directo. -

Para Jescheck & Weigend (2003), “en este tipo de dolo, el autor tiene como finalidad poder obtener un resultado lesivo típico” (pág. 403). Por otro lado, Bacigalupo (1996), indica que “el autor se plantea obtener un resultado como objetivo de su acción, teniendo la seguridad que el resultado representado llegará a producirse como consecuencia de la materialización de su accionar” (pág. 128). En ese sentido, Mir Puig (2006), nos dice que “en el dolo directo, el autor tiene como finalidad la realización de un delito” (pág. 261).

A.1. Dolo directo en el delito de receptación. -

El dolo en la receptación, se evidencia cuando el agente del delito (receptador) conoce de manera directa (el ladrón le informa que el bien es robado o hurtado, el comprador observa el momento en que el bien es robado o hurtado, entre otros casos) o de manera indirecta (al individuo le comentan que el bien que pretende adquirir es robado o hurtado) el origen delictuoso del bien adquirido o recibido, bajo cualquier forma contractual, o no contractual.

Salinas S. (2015), afirma que:

En el delito de receptación, el agente tiene conocimiento del modo cómo se perfeccionó el delito anterior, ya sea, porque fue testigo presencial de los hechos o porque el mismo agente del delito anterior o un tercero se lo contó. Este conocimiento se traduce en el hecho de que el agente incluso no puede conocer los detalles del delito anterior, pero por especiales circunstancias que rodean al suceso, cae en la cuenta o llega a concluir que el bien mueble proviene de un delito. (pág. 425)

B. Dolo Eventual. -

Este tipo de dolo, consiste “cuando el autor prevé como posible el resultado típico y se conforma con él” (Villanueva, 2004, pág. 117), es decir, “el autor considera seriamente como posible la realización del tipo legal y se conforma con ella” (Jescheck & Weigend, 2003, pág. 405).

De la Mata, Miguel Sánchez, entre otros (2007), sostienen que:

El dolo eventual se caracteriza porque al autor se le presenta la posibilidad – la eventualidad – de que el resultado se produzca, y aun así actúa. Con esta definición pueden trazarse claramente las diferencias con el dolo directo, que radica en una mera cuestión de grado de conocimientos: mientras en el dolo directo el autor se representa la producción del resultado con práctica seguridad (con su actuar el resultado se producirá necesariamente), en el dolo eventual se representa la producción del resultado como posible, o probable (el actuar no genera seguridad para la producción del resultado lesivo), sin alcanzar el grado de seguridad que define a la modalidad anterior (dolo directo) (pág. 149).

Al respecto, Bacigalupo (1996), nos dice que:

En el dolo eventual, el autor se representa la realización del tipo como posible. Ejemplo: el autor piensa que es posible que la mujer con la que va a yacer tiene menos de doce años, es decir, que yaciendo con ella realizaría el supuesto de hecho del tipo de violación (hecho que se designa en el código como el acceso carnal abusivo con menor de catorce años) (pág. 128).

Los autores coinciden que la conceptualización del “dolo eventual” - descrito precedentemente – exige no solo una representación mental de la realización de un hecho típico para poder diferenciarla de la culpa consciente o con representación, por ello, se han desarrollado teorías como: i) Consentimiento o aprobación, ii) Probabilidad o representación, iii) Asunción o ecléctica.

a) **T. del consentimiento o de la aprobación.-** sostiene que “el autor este

decidido de materializar su representación de la realización de un hecho típico, y, que esta representación sea insuficiente para corroborar la decisión” (Bacigalupo, 1996, pág. 129), es decir, no solo debe haber una representación del hecho típico a realizar, sino también debe existir una decisión interna (positiva) de realización de la misma.

Al respecto, Mir Puig (2006), nos dice que:

Para esta teoría, se diferenciará el “dolo eventual” de la culpa consciente”, cuando el autor apruebe o acepte la probabilidad del resultado típico. El cual se expresa en esta idea, acudiendo a un juicio hipotético: si el autor hubiera podido anticiparse a los acontecimientos y hubiera sabido que su conducta había de producir el resultado típico ¿la habría realizado igual? Si la respuesta es afirmativa, existe dolo eventual. Por el contrario, hay culpa consiente si el autor solo lleva a cabo su actividad abrazándose en la posibilidad de que no se produzca el delito, y diciéndose: “si yo supiese que ha de tener lugar el resultado delictivo, dejaría enseguida de actuar”.

- b) **T. de la probabilidad o representación.-** De acuerdo a esta teoría, “existe dolo eventual cuando se represente la probabilidad de realizar un hecho típico como posible, es decir, con un alto grado de posibilidades en su realización” (Bacigalupo, 1996, pág. 129).

De la Mata, Sánchez, entre otros (2007), sostienen que:

Esta teoría se desliga del elemento volitivo, y, se basa en que el autor se representa la realización de un “resultado típico” como probable o posible. Esto es, lo esencial es “conocer plenamente la peligrosidad de la acción”; pero, en caso se represente un peligro de menor grado o intensidad, y dando lugar un “resultado típico” poco posible, entonces, se está configurando una “culpa consciente”. (pág. 151)

En ese sentido, Plasencia Villanueva (2004), nos dice que:

De acuerdo a esta teoría, se está ante un “dolo eventual” cuando se

considere como posible la realización de un resultado típico. Sin embargo, es una “culpa consciente” cuando se llegue a representar un “resultado típico” poco posible. Lo resaltante de esta teoría es la prescindencia del elemento volitivo, para diferenciar la “culpa consciente” del “dolo eventual”. (pág. 118)

- c) **T. de la asunción o ecléctica.-** Esta teoría es la menos cuestionada a diferencia de las otras, ya que, se considerará la existencia de un “dolo eventual” cuando “el autor es consciente de la alta posibilidad de que su accionar representado ocasionaría una lesión al bien jurídico, y, a pesar de ello la realiza” (Bacigalupo, 1996, pág. 129).

Mir Puig (2006), nos dice que:

Ante las dificultades presentadas por las teorías de consentimiento y de representación, surge en la doctrina alemana una “postura ecléctica”, que se fundamenta en que “el autor es consciente de la peligrosidad de su accionar que se está representado”, dando lugar a un resultado lesivo al bien jurídico. En ese sentido, a pesar que el autor es consciente de las consecuencias lesivas de su accionar, el mismo “se conforma o acepta” el resultado posiblemente a producirse. Sin embargo, cuando se actuó confiadamente de que el accionar peligroso, no podría generar un resultado lesivo, pero este se produce, se estará ante un caso de “culpa consciente”. (pág. 265)

B.1. Dolo eventual en el delito de receptación. -

Tratándose del “dolo eventual” en la receptación, se produce cuando el autor tiene la posibilidad de representarse que su acción de adquirir o recibir un bien bajo cualquier forma contractual o no contractual (compraventa, donación, prenda), podría dar lugar a la comisión de un ilícito penal, ya que, debido a las “especiales circunstancias” que circunscriben el hecho, permiten presumir o sospechar que el bien es de procedencia ilícita (objeto de un delito precedente), sin embargo a pesar de conocer esta situación, procede a ejecutar su conducta. En este sentido, a pesar que el autor tuvo la “posibilidad de representarse” que

su actuar podría ocasionar un resultado típico o lesivo (receptar un bien de procedencia delictuosa, por ende, quebrantar norma penal), éste acepta (consentimiento interno) la producción de este resultado típico, es decir, a pesar que el agente tenía la posibilidad de anticiparse al resultado típico (receptar), ya que, tenía conocimiento de la peligrosidad de su actuar, éste igualmente lo comete.

Salinas S. (2015), nos dice que:

La segunda circunstancia en el delito de receptación se configura cuando el agente no cae en cuenta de que el bien proviene de un delito precedente, pero las especiales circunstancias que rodean el hecho **puede presumir, sospechar, suponer, deducir o conjeturar que el bien es objeto de un delito anterior**. Ocurre, por ejemplo, cuando el vendedor pretextando dificultades económicas o remate, ofrece el bien inmueble a un precio menor del que cuesta en el mercado, adquiriendo el bien el comprador sin presumir que el bien provenía de un delito, pero pudo o estaba en la posibilidad de presumir debido al menor precio que se ofertó el bien. Aquí el agente no cayó en la cuenta de que el bien tenía origen delictuoso, pero **pudo presumir tal acontecimiento por las mismas circunstancias que rodearon al suceso** (pág. 425).

2.2.5.2. Concepción Normativista. –

La concepción normativa se fundamenta en que los “datos psíquicos” son irrelevantes para el ámbito del derecho penal. En ese sentido, en la actualidad comienza a ganar terreno la perspectiva normativista, partiendo de la idea que lo subjetivo no se verifica, sino solo se imputa (García Caveró, 2019, pág. 503), esto se debe a que es complicado “probar un hecho psíquico”, por ende, generando dificultades en la praxis judicial. Siendo ello así, una concepción normativista, sería la solución de estos problemas (calificación e interpretación), ya que, estaría orientada a determinar la “relevancia jurídico penal” de lo subjetivo, desde una visión que se inicia en lo externo y luego a lo interno; donde lo externo se conforma a través del “significado social perturbador de la conducta específica”, en cambio,

lo interno con el “sentido normativo” que se le concede al conocimiento (Caro Jhon J. A., 2012, pág. 25). A diferencia de las teorías psicologicistas, no se pretende indagar o interpretar la conciencia del autor, sino atribuir un “significado penalmente relevante”, por ello, primero se verificará si la conducta desplegada por el autor se constituye como una “conducta socialmente perturbadora”, y, luego se analizará, si la conducta ha sido dolosa o culposa para efectos de imputación.

En la concepción normativista, encontramos la Teoría de la Evitabilidad individual y la Teoría de la Probabilidad.

La Teoría de la evitabilidad individual, constituye “el presupuesto mínimo para que pueda dar lugar la imputación jurídico-penal” (Jakobs, 2007, pág. 34). A esta teoría se le atribuye el siguiente significado: “la conducta debe haberle sido evitable al autor concreto” (Cordoba, 2015), es decir, no se puede imputar a una persona, aquellos sucesos imposibles de evitarlos. Es necesario precisar que la evitabilidad individual tiene como punto de partida que “*a nadie se le puede exigir más de lo que puede rendir*” (“*ultra posse nemo obligatur*”), ya sea, porque el autor carece de las capacidades físicas necesarias para evitar el resultado lesivo, o la carencia de capacidades intelectuales que le permita reconocer la peligrosidad de su conducta.

García Caveró (2019), manifiesta que “una imputación subjetiva que se fundamenta en la evitabilidad individual, no es factor determinante el elemento volitivo, ya que, todas las personas tienen la capacidad racional suficiente para evitar las consecuencias de su actuar, que constituyen un delito” (pág. 504).

Por otro lado, la teoría de la probabilidad ha sido defendida tanto por causalistas como por finalistas y teleológicos normativistas, cumpliendo además un papel muy importante en la jurisprudencia (Pérez Barbera, 2011, pág. 203). Si la evitabilidad individual “como fundamento de imputación subjetiva está presente tanto en el dolo como en la culpa, entonces, resulta lógico preguntarnos, cuál sería el elemento para diferenciar estas modalidades subjetivas de imputación” (Caro Jhon J. A., 2012, pág. 10).

2.2.5.2.1. Dolo según la concepción normativista

Desde una concepción normativista, el dolo adquiere una nueva conceptualización, ya que no está orientada a “evitar una lesión al bien jurídico protegido” (desde un punto subjetivista), sino a “recobrar la vigencia de la norma defraudada” por la acción - penalmente relevante – del autor. En ese sentido, el dolo “está constituido por una imputación a nivel cognoscitivo, permitiendo al autor poder identificar que su accionar comunica una abierta discusión a la vigencia de la norma penal” (García Caveró, 2019, pág. 507), por ello, para seguir manteniéndose fiel al derecho (respetar las normas penales), deberá desistirse o interrumpir dicho emprendimiento.

Gunter Jakobs (1998), nos precisa que:

“(…) el dolo estará conformada únicamente por el conocimiento, es decir, para acreditar su existencia solo se necesitará imputar el conocimiento necesario, con la finalidad que acepte los riesgos comprendidos por su conducta, y las consecuencias lesivas a producirse, la cual constituye una defraudación de las expectativas sociales para una convivencia pacífica en la sociedad” (num. marg. 8).

García Caveró (2019), sostiene que: “desde una concepción normativista, el dolo se basa únicamente en el conocimiento, donde el autor reconoce plenamente que su actuación va defraudar la norma penal, es decir, tiene conocimiento del carácter defraudatorio de su actuación” (pág. 510).

En este contexto de pensamientos dogmáticos, el autor al conocer la “lesividad o peligrosidad” de su conducta, igualmente la ejecuta o realiza, generando un quebrantamiento de la norma penal, la cual está condicionada a las expectativas sociales que se tienen del autor respecto a su deber como “ciudadano” (deber general) o por su “status cualificado” (deber especial).

Caro Jhon (2006), nos dice que:

“El Contexto Social de la acción define de este modo la atribución de sentido normativo al conocimiento, porque en él se concreta el tipo de deber cuya observancia compete a la persona al momento de actuar. Conceptos como evitabilidad individual, probabilidad, etc., sólo tienen

sentido normativo relevante para el derecho penal, o constituyen la base para atribuir un conocimiento a título doloso o culposo, siempre y cuando formen parte de lo que el actuante debía evitar en el contexto concreto de su acción. Por eso es necesario que el deber jurídico este antes preconfigurado porque solo con la existencia del “deber del autor” dispondrá de ese modo en su contexto social concreto la información acerca de lo que debe saber o debe evitar”. (pág. 14)

Por ello, únicamente no basta que el autor tenga conocimiento de la peligrosidad de actuación, sino que en virtud de su rol social (deber general o especial) este obligado a desistirse de actuar o impedir la defraudación de la norma penal. Por ejemplo, el funcionario público que tiene como obligación cuidar y mantener el buen estado de alimentos de primera necesidad, los cuales están destinados a pobladores de asentamientos humanos, éste omite su deber, por ende, generando una intoxicación a gran escala a los pobladores. En este caso, no se analizará la imputación objetiva, ya que, se determinó la responsabilidad objetiva del funcionario, entonces, se procede a verificar la imputación subjetiva, siendo necesario primero, verificar si el autor conocía la dañosidad de su actuación omisiva o negligente, siendo en el presente caso, que en virtud de su status de funcionario público supervisor (rol social especial), si es consciente de la dañosidad de su accionar, generando una defraudación de la norma, es decir, en virtud de su contexto social de su acción (deber especial) como funcionario público supervisor de alimentos de primera necesidad, no puede alegar desconocimiento o ignorancia.

De acuerdo a estos postulados, se comienza abandonar progresivamente una concepción subjetivista que: el dolo es “conocimiento y voluntad”; adoptándose el pensamiento que “el dolo se concibe solo como conocimiento de la realización de un comportamiento típico objetivo” (Ragues Valles, 1999, pág. 13).

2.2.5.2.2. Ausencia de dolo

A. Error de Tipo. -

Es entendida como “el total desconocimiento o ignorancia de uno, algunos o todos los elementos típicos del delito” (Amaya, Sanchez Tomás, & Alcaecer Guirao, 2007, pág. 165). En otras palabras, “el autor al desconocer que su acción (conducta o actuar) daría lugar a los elementos típicos requeridos, entonces, la parte relativa al conocimiento no se concretizaría, y, consecuentemente se excluiría el dolo” (Villanueva, 2004, pág. 120).

Para García Caverio (2019), “es la negación de los elementos de la tipicidad subjetiva, ya que, se tiene desconocimiento de que la actuación realizada contraviene objetivamente la norma penal garantizada” (pág. 513). Por otro lado, Amaya, Sanchez Tomás, & Alcaecer Guirao (2007), nos dicen que “es la falsa o errónea percepción de algún elemento objetivo o normativo de la conducta típica, es decir, es el desconocimiento o ignorancia de alguna circunstancia en la que el autor efectuó su actuación típica” (pág. 165).

Al respecto, Mir Puig (2008), precisa que “el error de tipo supone el desconocimiento de algún elemento del tipo penal, en cambio, el error de prohibición, se desconoce que la realización de una actuación está prohibida para la norma penal” (pág. 268).

Cuando tratamos del “error de tipo”, se debe diferenciar entre el “error invencible” y el “error vencible”. Al respecto, Mir Puig (2008), manifiesta que “será invencible cuando es inevitable el resultado, a pesar de actuarse diligentemente, en cambio, será vencible, cuando se puede evitar, siempre y cuando se hubiera actuado diligentemente (observado el deber de cuidado)” (pág. 270). La omisión o inobservancia al “deber de cuidado”, constituirá una imprudencia o negligencia.

Al respecto, Díaz Aranda (2014), nos dice que: “el error invencible es cuando a pesar de actuar diligentemente o con el mayor cuidado posible, de todas maneras, se hubiera incurrido en error. En este tipo de error, se excluye el elemento subjetivo, esto es, tanto el dolo como culpa” (pág. 125).

Santiago Mir Puig (2008), sostiene que:

Tratándose del error vencible se evitaría en caso se haya actuado

diligentemente o con el mayor cuidado posible. Donde, este tipo de error únicamente excluirá al dolo, mas no la culpa, dando lugar a que algunas conductas no sean punibles, ya que la mayoría de los tipos penales son dolosos. (pág. 270)

Los tipos legales, están constituidos por elementos descriptivos y normativos, de acuerdo a la redacción del tipo penal. Los primeros, “son fácilmente perceptibles por los sentidos, en cambio, los normativos implican una comprensión mental para comprenderlos” (Roxin, 2015, pág. 460). Es necesario precisar que, “para comprender los elementos normativos se necesita de un cierto nivel de entendimiento cultural y/o jurídico” (Díaz Aranda, 2014, pág. 124)

En ese mismo sentido, Mata Amaya, Sánchez Tomas y Alcácer Guiraro (2007), nos dicen que:

Los elementos descriptivos son fácilmente aprehensibles con los sentidos humanos, es por ello que, se refieren a las cosas u objetos del mundo exterior, así como, hechos o circunstancias de la realidad. En cambio, los elementos normativos, exigen cierta comprensión jurídica, cultural y/o social. (pág. 167)

Por lo tanto, los elementos descriptivos “son aquellos que son aprehendidos directamente por los sentidos, en cambio, los elementos normativos exigen ciertos conocimientos jurídicos, sociales o culturales”. Es necesario precisar que, solo basta que el autor conozca el significado social de los “elementos normativos”, mas no su connotación jurídica, es decir, que el sujeto pueda comprender su significado cotidiano y usual. Por ejemplo, tratándose del documento, solo basta que entienda que un contrato es un instrumento jurídico para que se cumpla lo acordado entre los celebrantes.

Un ejemplo de “error sobre los elementos descriptivos”, sería cuando un sujeto dispara a una persona, sin embargo, termina matando a otro individuo que estaba a su lado. En este supuesto, el elemento descriptivo es matar, en ese sentido, el error radicaría en el hecho de haber disparado y matado a otro

individuo, es decir, distinto a la intención criminal.

Un ejemplo de “error sobre los elementos normativos”, sería cuando una persona después de haber cenado se para para retirarse y previamente a ello se dirige a agarrar su abrigo del perchero, sin embargo, este se confunde de abrigo y se lo lleva. Este ejemplo es claro para ilustrar el error de los elementos de la “ajeneidad de la cosa”, ya que, faltaría el conocimiento, así como, voluntad, para tipificar el acto como un delito de hurto, es decir, la “ajeneidad” como elemento normativo en la configuración del delito, está supeditado a las maneras de adquisición del bien.

A.1. El error de tipo en el delito de receptación

Se presentaría cuando un sujeto compra un bien de procedencia delictuosa (delito precedente), creyendo que el vendedor era el titular o propietario, ya que, éste le había otorgado la documentación correspondiente (boleta o factura) para acreditar la venta del bien y transferencia de propiedad. En este supuesto, se podría sostener que el adquirente actuó erradamente, debido a que desconoce la “ajeneidad de la cosa” (como elemento normativo del tipo penal), ya que, asumió que la cosa era de titularidad del vendedor y lo estaba adquiriendo de manera lícita o formal (conforme a la documentación otorgada). Siendo ello así, a pesar que los hechos descritos podrían tipificarse como un delito de receptación, por cuanto, se adquirió un bien de procedencia delictuosa (hurto, robo, apropiación ilícita), en virtud, del desconocimiento de la “ajeneidad de la cosa”, se descartaría el dolo, y consecuentemente se le exonera de responsabilidad.

2.2.6. El deber de presumir la procedencia ilícita del bien como elemento subjetivo necesario para la configuración del delito de receptación.

Como ciudadanos nos encontramos gobernados por normas (permisivas, prohibitivas o de mandato), las cuales imponen determinados “deberes” que deben ser cumplidos, con la finalidad de convivir socialmente de manera pacífica, sin vulnerar los derechos de los demás, es decir, mediante las normas se pretende regular o dirigir conductas, mandatos y obligaciones cuyo incumplimiento está condicionado a una sanción. En ese

sentido, las “normas penales” imponen determinados deberes (hacer: ayudar a una persona en situación de peligro, o no hacer: no matar, no robar) que deben ser cumplidos bajo apercibimiento de ser sancionados penalmente.

En ese sentido, existen normas que establecen determinados deberes (generales o especiales), como es el caso del “mandato legal” establecido en el artículo ciento noventa y cuatro del Código Penal, consistente en: **“deber de presumir que el bien provenía de un delito”**. En este dispositivo legal, se exige el “deber de presumir la procedencia ilícita del bien”, al momento de adquirir, recibir en donación o en prenda, guardar, esconder, vender o ayudar a negociar dicho bien.

Al respecto, Roy Freyre (1986), manifiesta que:

El “deber de presumir” no debe ser interpretado como un probable “cálculo mental” del autor, que se encuentra sometido a cierto cuidado o prudencia exigido por las circunstancias, sino, dar por hecho que el autor “presumió” o “no presumió” que la cosa es de procedencia ilícita, sin embargo, a pesar de ello la “adquirió” o “recibió”, generando con ello un actuar encubridor de un ilícito previo. En ese sentido, el juez debe preguntarse o cuestionarse si el autor “presumió o no presumió”, y, si la respuesta es afirmativa (“presumió”), es porque las circunstancias evidencian la acción dolosa, por el contrario, de ser la respuesta negativa, se exonera de responsabilidad penal por ausencia de dolo y falta de previsión legal de la forma negligente (pág. 143-145).

Desde mi perspectiva, dar cumplimiento con el “deber de presumir la procedencia ilícita del bien” en el delito de receptación, podría ser interpretado desde una concepción psicologicista o normativista.

En ese sentido, **desde una concepción psicologicista**, el sujeto debió representarse mentalmente que su acción (adquirir o recibir), podría dar lugar a la comisión de un ilícito penal (receptación), ya que, concurren determinadas circunstancias (se realiza en un lugar de dudosa reputación, el precio es exiguo a diferencia del precio comercial en el mercado, el vendedor no entrega comprobantes de pago, entre otros), que permiten “presumir” o “sospechar” que el bien es de procedencia delictuosa (objeto de un delito precedente), sin embargo a pesar de conocer esta situación, procede a ejecutar

su conducta (adquirir, recibir, guardar, esconder, vender o ayudar el bien del procedencia ilícita) de manera consciente y voluntaria. Por ello, se debe entender que el “deber de presumir” es una exigencia del tipo penal como hecho psicológico que “el autor ha debido presumir o haber presumido”- al tener pleno conocimiento de las circunstancias - que el bien es de procedencia ilícita.

Así mismo, se puede decir que, a pesar que el autor advirtió una gran probabilidad de que su accionar produjese un resultado típico o lesivo (receptar un bien de procedencia delictuosa, por ende, se afecta el bien jurídico de propiedad), debido a las circunstancias en que se va desarrollar su acción o actuar (adquirir, recibir, guardar, esconder, vender o ayudar a negociar la venta del bien de procedencia delictuosa), éste acepta (consentimiento interno) la producción de este resultado típico, es decir, a pesar que el agente tenía la posibilidad de anticiparse o no producir el resultado típico (receptar), ya que, tenía conocimiento de la lesividad o peligrosidad de su actuar, este igualmente lo comete.

Desde una concepción normativista, el sujeto en razón de su rol social como ciudadano – fiel o respetuoso de la norma penal -, al tener conocimiento de las circunstancias en que se pretende adquirir, recibir en donación o en prenda, guardar, esconder, vender o ayudar a negociar un bien, son sospechosas o poco confiables (se realiza en un lugar de dudosa reputación, el precio es exiguo a diferencia del precio comercial en el mercado, el vendedor no entrega comprobantes de pago, entre otros), automáticamente debió inferir - a partir de los hechos conocidos - que el bien que pretende adquirir, recibir en donación o en prenda, guardar, esconder, vender, es de procedencia delictuosa. Por lo tanto, las expectativas sociales que se tienen del autor como ciudadano respetuoso de la norma son incumplidas, generando un quebrantamiento a la norma penal.

En ese mismo sentido, el incumplimiento del “deber de presumir” la procedencia ilícita del bien, está condicionada al “contexto social en que se va desarrollar la actuación del autor”, es decir, en qué circunstancias el autor va a tener que adquirir, recibir en donación o en prenda, guardar, esconder, vender o ayudar a negociar un bien de procedencia delictuosa. Por ejemplo, “A” se dirige a una tienda con la finalidad de

comprar un “celular”, y una vez terminada la transferencia del bien (compra del bien y entrega de la boleta o factura), es interceptado por unos policías manifestándole que el celular es robado (conforme a la descripción de la víctima), por ende, privándosele de la posesión del celular, y dirigido a la comisaría. En este caso, “A” realiza aparentemente una compra dentro del marco de la legalidad, digo esto así, ya que el vendedor le entrega a “A” un comprobante de pago, el cual acredita su legítima propiedad, sin embargo, el bien es de procedencia delictuosa, en ese sentido, el contexto social se manifiesta en que, “A” confiaba en que la adquisición realizada (compra del celular) es legítima y legal, ya que está acudiendo a una tienda confiable (cuenta con los permisos de funcionamiento necesarios) y se le entrega un comprobante de pago que acredita la titularidad del bien comprado, cumpliendo así con las formalidades de la venta. Por lo tanto, en este caso, dado el contexto o circunstancias en que se efectuó la acción (adquisición), no se le puede exigir a “A” el deber de presumir la procedencia delictuosa del bien, o en todo caso no se le puede imputar que ha incumplido el “deber de presumir” la procedencia delictuosa del bien.

De acuerdo a lo precisado, el “incumplimiento del deber de presumir la procedencia delictuosa del bien” como “elemento subjetivo” en la configuración del delito de receptación, sería “el conocimiento concreto que debía tener o suponer en el contexto social de su acción”, es decir, el autor conociendo las circunstancias en que pretende o quiere “adquirir”, “recibir” – “en donación o en prenda” - o “guardar”, “esconder”, “vender” o “ayudar a negociar un bien”, son sospechosas o poco confiables, por ejemplo, se realiza en un lugar de dudosa reputación, el precio es exiguuo a diferencia del precio comercial en el mercado, el vendedor no entrega comprobantes de pago, entre otros; automáticamente debe inferir - a partir de los hechos conocidos - que el bien es de procedencia delictuosa.

2.2.7. Análisis práctico sobre el incumplimiento del deber de presumir la procedencia ilícita del bien en la configuración del delito de receptación en relación con la imputación objetiva.

En virtud de lo desarrollado precedentemente, es necesario para el presente trabajo de investigación realizar un análisis práctico sobre el incumplimiento del deber de

presumir la procedencia ilícita del bien en la configuración del delito de receptación en relación a determinadas categorías de la imputación objetiva y subjetiva (dolo), considerando adecuado hacerlo desde el punto de vista normativista.

Aunado a ello, las circunstancias que concurran en cada caso en concreto deberán ser valorados de manera conjunta y no por separado.

2.2.7.1. En virtud de la aplicación del “principio de confianza”, ¿Se podría exonerar de responsabilidad penal cuando se ha incumplido el deber de presumir la procedencia ilícita al momento de adquirir, recibir - en donación o en prenda - o guardar un bien, como lo exige el tipo penal de receptación para su configuración?

Como ya se ha precisado precedentemente, las personas constantemente tienden a interrelacionarse e interactuar entre ellas mismas, confiando en que los demás actuarán conforme a sus deberes exigidos por el ordenamiento jurídico, por ello se dice, que para interactuar se basan en un “mínimo de confianza”. Cada persona en virtud de su “rol social” como ciudadano o por su “status cualificado”, tiene que cumplir determinados deberes (generales o especiales). En ese sentido, cada persona responde por los actos propios de su “rol social”, por ello, cada individuo no se preocupa de controlar los posibles riesgos que puedan producir los demás.

El principio de confianza, está basado en que la persona confía en que los demás actuarán conforme a la norma de cuidado (deberes de cuidado); esto es, el ciudadano racional confía en que los demás se comporten conforme al ordenamiento jurídico, así como él. Por ello, en el principio de confianza se habla de “expectativas sociales”, las cuales son esperadas por los demás en virtud del rol social que se desempeña (taxista, albañil, profesor, policía, médico, juez, etc.).

Por lo tanto, si no se confiara en el accionar de los demás, las normas (prohibitivas, permisivas, mandato) que rigen en una sociedad civilizada, carecerían de significado, ya que, “su función principal es orientar o modular la conducta de las personas haciendo predecible la conducta de los terceros” (Maraver Gomez, 2011, pág. 40). Se espera que las demás personas actúen conforme a los lineamientos

jurídicos dispuestos por las normas vigentes, es decir, que actúen de acuerdo a lo jurídicamente permitido, sin vulnerar la norma vigente.

Para poder responder esta interrogante de manera práctica es necesario formular los siguientes casos:

- a) “A” compra un televisor a “B”, de manera consensual, sin que exista de por medio un comprobante de pago que acredite la titularidad o propiedad del bien. Posteriormente es intervenido por efectivos policiales, manifestándole que posee un bien robado.

En este caso, se podría sostener que “A” compró el televisor confiando que “B” es el titular, es decir, confiando que “B” está actuando conforme al ordenamiento jurídico. Sin embargo, la excepcionalidad radicaría por la presencia de “circunstancias especiales”, como es el caso de no entregarse o solicitarse un documento idóneo que permita verificar o acreditar (como sería un comprobante de pago) la transferencia o titularidad del bien (venta lícita), entonces, no se puede esperar que el otro vaya a cumplir conforme a los deberes (generales: respetar la norma) que emana de su rol como ciudadano fiel al ordenamiento jurídico. Por lo tanto, no se podría exonerar de responsabilidad penal a “A”, por cuanto al conocer la existencia de circunstancias que hacen sospechar o dudar la veracidad lícita del bien, “debió presumir” que la procedencia del televisor es delictuosa.

- b) “A” compra un celular en una pequeña tienda de la “Feria Balta”, por ello, se le entrega un comprobante de pago (boleta o factura). Sin embargo, el celular adquirido es robado, así mismo, el comprobante de pago es falso (el RUC no corresponde a la razón social, denominación o nombre del emisor), esto es, los datos consignados por el vendedor (emisor) en la boleta de venta son falsos (no existente en el Registro Único de Contribuyentes).

De acuerdo al caso planteado. sí sería viable la aplicación del “principio de confianza”, en el aspecto que “A” confía en que “B” en su “rol social de vendedor” le ha vendido un celular de procedencia lícita, ya que lo adquiere de una tienda formal (presumiendo que posee los permisos de funcionamiento

necesarios), por ello, se le entrega un comprobante de pago, a pesar que este sea falso. Es decir, las expectativas sociales que se tiene de “B” en virtud de su “rol social de vendedor”, es que actuará conforme al ordenamiento jurídico (norma penal), no obstante, fueron defraudadas dichas expectativas.

- c) “A” y “B” son trabajadores de una pequeña tienda dedicada a la venta de celulares, cuyas labores son exclusivamente la venta de estos. Un día de labores se les requiere la documentación necesaria que acredite la propiedad de los celulares, siendo la sorpresa que solo el 70% de estos cuenta con la documentación correspondiente, y el resto figuran como hurtados y robados. Alegando que ellos solo se dedican a venderlos en la misma tienda, siendo el dueño el responsable de haberlos adquirido.

En el presente supuesto, sí sería viable la aplicación del “principio de confianza”, en cuanto “A” y “B” en su “rol de vendedores” únicamente se limitan a la venta de celulares; siendo el responsable de la adquisición de los celulares el dueño o el administrador, recayendo sobre éstos la responsabilidad de haber adquirido celulares hurtados y robados. Esto responde, al hecho que “A” y “B”, no tienen la obligación de averiguar si el dueño o administrador cumple las formalidades exigidas para la venta de celulares, ya que cada persona es responsable de sus acciones comprendidas en el “ámbito de su competencia”, el cual demanda el cumplimiento de ciertos “deberes” (deber general o especial), ya que no forma parte del “rol del ciudadano” supervisar o controlar las acciones o conductas de los demás, o de terceros, que puedan originar una lesión a los “bienes jurídicos tutelados”.

- d) “A” es el asistente de “B”, cuya función es realizar labores de apoyo o asistencia. Un día de labores, “B” le solicita a “A” que reciba una laptop de tal persona en un determinado lugar, y que posteriormente se la entregue a él. Una vez que “A” recibe la laptop conforme a lo ordenado, antes de llegar a su centro de trabajo para entregársela a “B”, es intervenido por personal policial, manifestándole que dicha laptop es hurtada.

En este caso, no se le puede atribuir responsabilidad penal a “A”, por cuanto se

“límite a desempeñar su rol de asistente”, cumpliendo lo ordenado por “B”. Por lo tanto, la conducta de “A” no debe ser reprochada penalmente, por cuanto, la condición de asistente, no implica que tenga la “capacidad de suponer” que lo recibido es de procedencia delictuosa.

2.2.7.2. En virtud de la aplicación de la prohibición de regreso, ¿Se podría exonerar de responsabilidad penal cuando se ha incumplido el deber de presumir la procedencia ilícita del bien al momento de adquirir, recibir - en donación o en prenda - o guardar dicho bien, como lo exige el tipo penal de receptación para su configuración?

Para poder responder esta interrogante es necesario formular la siguiente casuística:

- a) “A” es el encargado de supervisar una playa de estacionamiento, cuya labor es registrar las unidades vehiculares que ingresan y salen del aparcamiento. Un día de semana, llega a la playa de estacionamiento “B” en una unidad motorizada (moto lineal) con la finalidad de aparcar por un tiempo determinado, sin embargo, esta unidad vehicular motorizada era robada. Posteriormente, ingresan efectivos policiales y lo detienen a “A” por haber ocultado un vehículo motorizado robado. Es decir, se le imputa a “A” el delito de receptación agravada.

De acuerdo a lo descrito en el ejemplo, se puede afirmar que: ¿“A” en cumplimiento de su deber como encargado de la playa de estacionamiento, solo se limitó a registrar la unidad motorizada, desconociendo que era robada, y que su actuar fue utilizado para fines delictivos (guardar el bien robado)? En virtud de la prohibición de regreso, podemos sostener que: “La actuación de “A” es socialmente cotidiana, neutral o inocua en el ejercicio de su “rol como supervisor” de una playa de estacionamiento, ya que, éste no puede cuestionar o indagar qué unidades vehiculares son de procedencia delictuosa o fueron utilizadas para fines delictivos, sino únicamente en virtud de su “rol como supervisor” debe registrar y guardar las unidades vehiculares que ingresen a la playa de estacionamiento”. Por lo tanto, a pesar que se haya utilizado la

conducta de “A” para guardar una moto robada, éste no responderá penalmente, porque su “conducta es neutral o cotidiana carente de sentido delictivo”, a pesar que “B” haya utilizado esta conducta en su beneficio otorgándole sentido delictivo.

CAPITULO III: MARCO METODOLOGICO

3.1. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACION

3.1.1. De acuerdo al fin

La presente investigación es básica, en razón que se orientó a un “fin teórico”, por cuanto, al obtener la suficiente información teórica, se contribuirá a la comunidad jurídica penal determinados “criterios jurídicos – dogmáticos”, los cuales deben ser aplicados por los fiscales del Distrito Fiscal de Lambayeque para que realicen una correcta imputación penal en sus requerimientos acusatorios, respecto al deber de presumir la procedencia ilícita del bien como elemento subjetivo necesario para la configuración del tipo penal de receptación.

3.1.2. De acuerdo al diseño de la investigación

La investigación realizada es de diseño “descriptiva-explicativa”, ya que, primero se describió desde un aspecto teórico y doctrinario el delito de receptación, conforme a lo tipificado en la norma penal, para luego analizar cuáles fueron los criterios jurídicos - dogmáticos que utilizaron los fiscales del Distrito Fiscal de Lambayeque desde enero del 2019 hasta diciembre del 2020, para fundamentar coherentemente la imputación penal en su requerimiento acusatorio sobre el “deber de presumir la procedencia ilícita del bien” como elemento subjetivo necesario para la configuración del tipo penal de receptación; asimismo, se verificó si la calificación jurídica que realizaron los fiscales en sus requerimientos acusatorios es conforme a determinados lineamientos jurídicos dogmáticos de la “teoría del delito”, específicamente, la tipicidad e imputación penal. Teniendo en cuenta, además, los argumentos esgrimidos en las disposiciones de Archivo.

La investigación realizada es cualitativa, ya que, se abordó una problemática social con la finalidad de saber cuáles fueron los criterios jurídicos – dogmáticos que utilizaron los fiscales del Distrito Fiscal de Lambayeque desde enero del 2019 hasta diciembre del 2020, para fundamentar coherentemente la imputación penal en su requerimiento acusatorio sobre el “deber de presumir la procedencia ilícita del bien” como elemento subjetivo necesario para la configuración del tipo penal de receptación.

3.2. POBLACION Y MUESTRA

3.2.1. Población

Está conformada por las decisiones fiscales (tanto disposiciones como requerimientos) calificando el delito de receptación, en el periodo del año 2019 (809 casos ingresados) y el año 2020 (736 casos ingresados), las cuales hacen un total de 1545 casos tramitados por el Distrito Fiscal de Lambayeque (información brindada por el Área de indicadores del DF Lambayeque). Así mismo, se tomó como población de estudio, la opinión legal de la comunidad jurídica chiclayana, específicamente a los estudiantes de derecho, egresados, bachilleres, y, abogados (litigantes y fiscales).

3.2.2. Muestra

Está conformada por tres (03) requerimientos acusatorios, y tres (03) disposiciones de archivo, de casos del año 2019, así como, un (01) requerimiento acusatorio, y seis (06) disposiciones de archivo, de casos del año 2020, calificando el delito de receptación (especialmente sobre el deber de presumir la procedencia delictuosa del bien), en el DF Lambayeque, haciendo un total de cuatro (04) requerimientos fiscales (acusatorios), y nueve (09) disposiciones de archivo. También, se realizó una encuesta virtual a la comunidad jurídica chiclayana (100 personas encuestados en total), específicamente a estudiantes de derecho, egresados, bachilleres, y, abogados (litigantes y fiscales).

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

3.3.1. Técnicas

En la presente investigación se utilizaron como técnicas de recolección de datos e información la revisión documental de literatura bibliográfica consistente en libros, revistas, jurisprudencia, así como, requerimientos acusatorios, disposiciones de archivo. También se utilizó la encuesta, que estuvo dirigida a los miembros de comunidad jurídica chiclayana, específicamente a estudiantes de derecho, egresados, bachilleres, y, abogados (litigantes y fiscales).

3.3.2. Instrumentos

Se utilizaron como instrumentos, la ficha de registro de datos, y, el cuestionario (consistente en once preguntas).

CAPITULO IV: ANALISIS Y RESULTADOS

4.1. Procesamiento de los datos obtenidos

Se ha obtenido ciertos datos e información útil a través de la recopilación de requerimientos acusatorios de la fiscalía provincial de Chiclayo, imputando la segunda modalidad del delito de receptación (deber de presumir la procedencia delictuosa del bien), los cuales, han sido elaborados durante enero del 2019 hasta el mes de diciembre del 2020. Así mismo, se realizó una encuesta virtual (consistente en once preguntas) a la comunidad jurídica chiclayana, siendo un total de **cien encuestados**, que comprende a estudiantes de derecho, egresados, bachilleres, y, abogados (litigantes y fiscales). Las preguntas formuladas en los cuestionarios, están orientadas a conocer la opinión legal de la comunidad jurídica chiclayana sobre aspectos de imputación en la segunda modalidad del delito de receptación (deber de presumir la procedencia delictuosa del bien); obteniéndose los siguientes resultados:

A. ¿Cuál es su grado de instrucción profesional?

De acuerdo a los que respondieron a la encuesta realizada (100 encuestados), el 37% son estudiantes de derecho (de los últimos dos años de la carrera de abogacía), el 28% son abogados (litigantes y fiscales), 18% bachilleres, y, 17% son egresados.

GRÁFICO N° 01

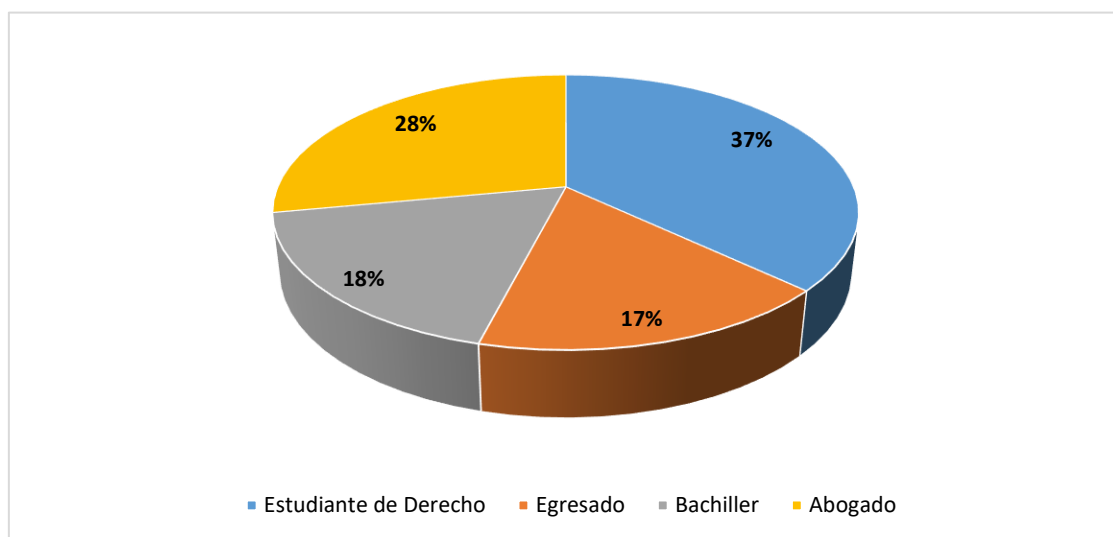
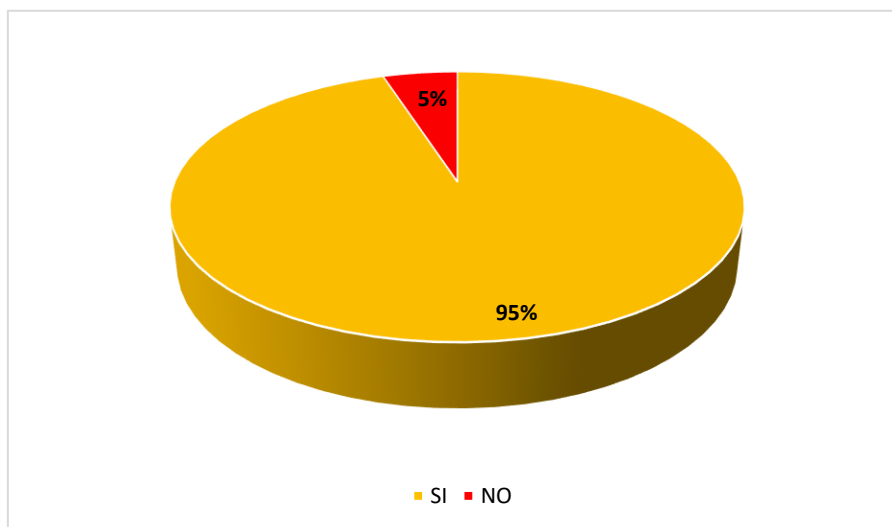


TABLA N° 01

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Valido
Estudiante de derecho	37	37%	37%
Egresado de Derecho	17	17%	17%
Bachiller en Derecho	18	18%	18%
Abogado	28	28%	28%
TOTAL	100	100%	100%

B. ¿Considera Ud. que la receptación es una actividad tan perniciosa para la sociedad, al igual que el hurto y robo?

Del 100% de los encuestados, el 95% respondió que “SI” considera a la receptación como una actividad tan perniciosa para la sociedad, al igual que el hurto y robo; en cambio, el 5% respondió que “NO” considera a la receptación como una actividad tan perniciosa para la sociedad, al igual que el hurto y robo.

GRÁFICO N° 02**TABLA N° 02**

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Valido
SI	95	95%	95%

NO	5	5%	5%
TOTAL	100	100%	100%

C. ¿Considera usted que la receptación de bienes ilícitos proviene principalmente de delitos patrimoniales, tales como el hurto, robo, estafa, apropiación ilícita, entre otros?

Del 100% de los encuestados, el 97% respondió que “SI” considera que la receptación de bienes ilícitos provenga principalmente de delitos patrimoniales, tales como el hurto, robo, estafa, apropiación ilícita, entre otros; en cambio, el 3% respondió que “NO” considera que la receptación de bienes ilícitos provenga principalmente de delitos patrimoniales.

GRÁFICO N° 03

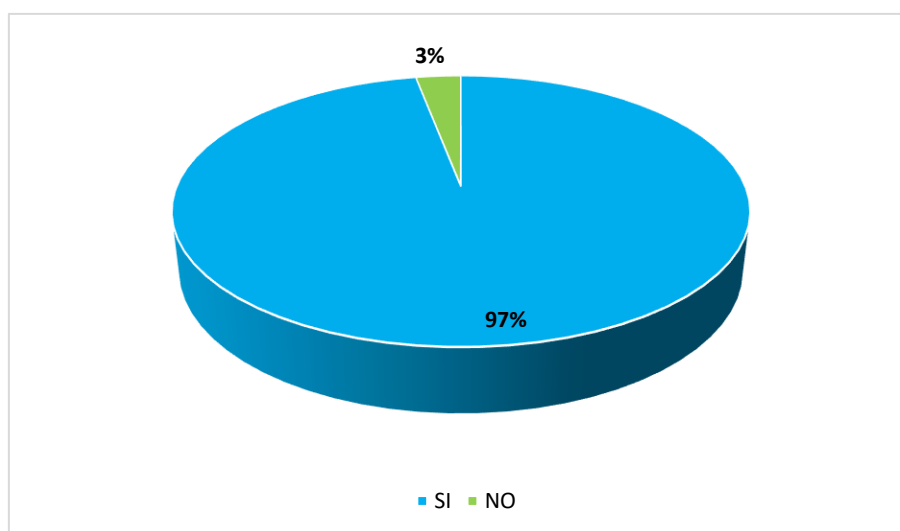


TABLA N° 03

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Valido
SI	97	97%	97%
NO	3	3%	3%
TOTAL	100	100%	100%

D. El Tipo penal de receptación, contempla dos modalidades en su realización: conocer la procedencia delictuosa del bien o presumir que provenía de un delito, en ese sentido ¿Considera que es necesario estos dos supuestos, para la

configuración del delito de receptación, establecido en el texto normativo del artículo 194 del Código Penal?

Del 100% de los encuestados, el 80% respondió que “SI” considera necesario los dos supuestos establecidos en el texto normativo del artículo 194 del Código Penal, para la configuración del delito de receptación; en cambio, el 20% respondió que “NO” considera necesario los dos supuestos establecidos en el texto normativo del artículo 194 del Código Penal.

GRÁFICO N° 04

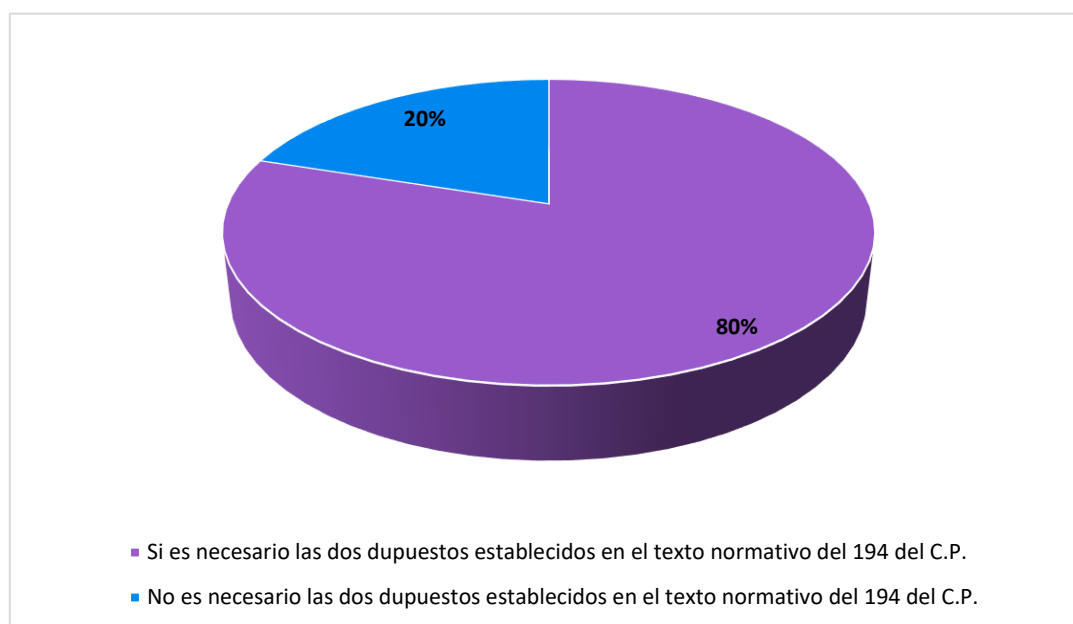


TABLA N° 04

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Valido
SI	80	80%	80%
NO	20	20%	20%
TOTAL	100	100%	100%

E. ¿Considera Ud. que el deber de presumir la procedencia delictuosa de un bien adquirido, recibido en donación o en prenda, así como, guardarlo, esconderlo, venderlo o ayudar a negociar su venta, establecido en el texto normativo del artículo 194 del Código Penal, tiene como finalidad reforzar la política criminal

de la lucha contra los delitos contra el patrimonio?

Del 100% de los encuestados, el 95% respondió que “SI” considera al “deber de presumir la procedencia delictuosa de un bien” adquirido, recibido en donación o en prenda, así como, guardarlo, esconderlo, venderlo o ayudar a negociar su venta, establecido en el texto normativo del artículo 194 del Código Penal, tiene como finalidad reforzar la política criminal de la lucha contra los delitos contra el patrimonio; en cambio, el 5% respondió que “NO” considera al “deber de presumir la procedencia delictuosa de un bien” adquirido, recibido en donación o en prenda, así como, guardarlo, esconderlo, venderlo o ayudar a negociar su venta, establecido en el texto normativo del artículo 194 del Código Penal, tiene como finalidad reforzar la política criminal de la lucha contra los delitos contra el patrimonio.

GRÁFICO N° 05

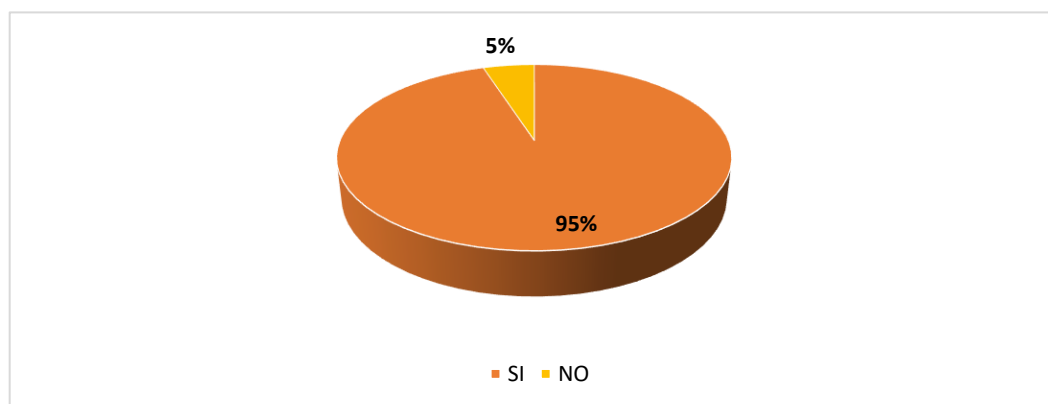


TABLA N° 05

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Valido
SI	95	95%	95%
NO	5	5%	5%
TOTAL	100	100%	100%

F. ¿Considera que el “deber de presumir la procedencia ilícita del bien” en el delito de receptación debe ser interpretado desde una concepción psicologicista o una concepción normativista? Teniéndose en cuenta lo siguiente: Desde una concepción psicologicista, el sujeto debió representarse mentalmente que su acción (adquirir o

recibir en donación o en prenda o guarda, así como esconder, vender o ayudar a negociar la venta del bien), podría dar lugar a la comisión de un ilícito penal (receptación), ya que, concurren determinadas circunstancias (se realiza en un lugar de dudosa reputación, el precio es exiguo a diferencia del precio comercial en el mercado, el vendedor no entrega comprobantes de pago, entre otros), que permiten “presumir” o “sospechar” que el bien es de procedencia delictuosa (objeto de un delito precedente), sin embargo a pesar de conocer esta situación, procede a ejecutar su conducta (adquirir, recibir, esconder, vender o ayudar el bien del procedencia ilícita) de manera consciente y voluntaria. En cambio, desde una concepción normativista, el sujeto en razón de su rol social como ciudadano – fiel o respetuoso de la norma penal -, al tener conocimiento de las circunstancias en que se pretende adquirir, recibir en donación o en prenda o guarda, esconder, vender o ayudar a negociar un bien, son sospechosas o poco confiables (se realiza en un lugar de dudosa reputación, el precio es exiguo a diferencia del precio comercial en el mercado, el vendedor no entrega comprobantes de pago, entre otros), automáticamente debió inferir - a partir de los hechos conocidos - que el bien que se pretende adquirir, recibir en donación o en prenda o guarda, esconder, vender es de procedencia delictuosa. Por lo tanto, las expectativas sociales que se tienen del autor como ciudadano respetuoso de la norma son incumplidas, generando un quebrantamiento a la norma penal.

Del 100% de los encuestados, el 36% respondió que el “deber de presumir la procedencia ilícita del bien” en el delito de receptación debe ser interpretado desde una concepción psicologicista o una concepción normativista, esto es, cualquier concepción dogmática es admisible para efectos de configurar del delito de receptación, previsto en el art. 194 del C.P.; **el 47% respondió que el “deber de presumir la procedencia ilícita del bien” en el delito de receptación debe ser interpretado desde una concepción normativista**; el 12% respondió que el “deber de presumir la procedencia ilícita del bien” en el delito de receptación debe ser interpretado desde una concepción psicologicista; y, solo el 5% de los encuestados NO OPINA, si el “deber de presumir la procedencia ilícita del bien” en el delito de receptación debe ser interpretado desde una concepción psicologicista o una concepción normativista

GRAFICO N° 06

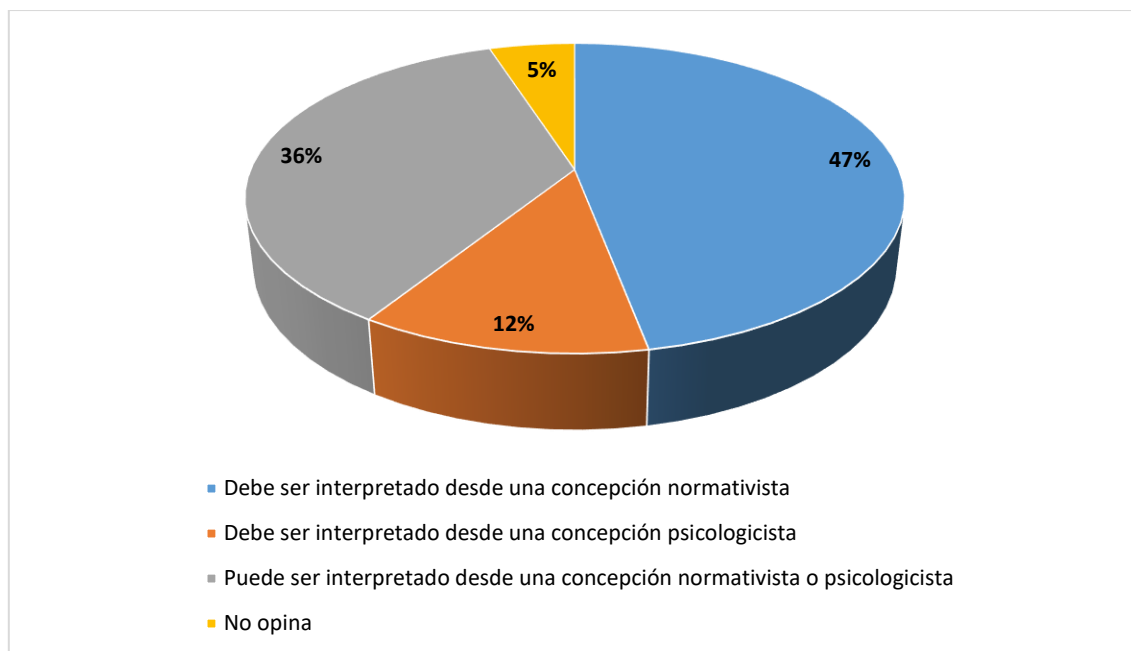


TABLA N° 06:

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Valido
Debe ser interpretado desde una concepción normativista	47	47%	47%
Debe ser interpretado desde una concepción psicologicista	12	12%	12%
Puede ser interpretado desde una concepción normativista o psicologicista	36	36%	36%
NO OPINA	5	5%	5%
TOTAL	100	100%	100%

G. ¿Considera Ud. que todo ciudadano por las circunstancias que rodean al hecho (se realiza en un lugar de dudosa reputación, el precio es exiguo a diferencia del precio comercial en el mercado, el vendedor no entrega comprobantes de pago, entre otros) al momento de adquirir, recibir en donación o en prenda un bien, así como, guardarlo, esconderlo, venderlo o ayudar a negociar su venta, debe presumir que este proviene de un delito, conforme lo establece el texto normativo

del artículo 194 del Código Penal?

Del 100% de los encuestados, el 87% respondió que de acuerdo a las circunstancias que rodean el hecho (se realiza en un lugar de dudosa reputación, el precio es exiguo a diferencia del precio comercial en el mercado, el vendedor no entrega comprobantes de pago, entre otros) “SI” se debe presumir que el bien (adquirido, recibido en donación o en prenda) pueda provenir de un ilícito penal o un delito, conforme a lo establecido en el texto normativo del artículo 194 del Código Penal; en cambio, el 13% respondió que a pesar de las circunstancias que rodean el hecho “NO” se debe presumir que el bien (ya sea adquirido, recibido en donación o en prenda, así como, guardarlo, esconderlo, venderlo o ayudar a negociar su venta) puede provenir de un delito, conforme a lo establecido en el texto normativo del artículo 194 del Código Penal.

GRAFICO N° 07

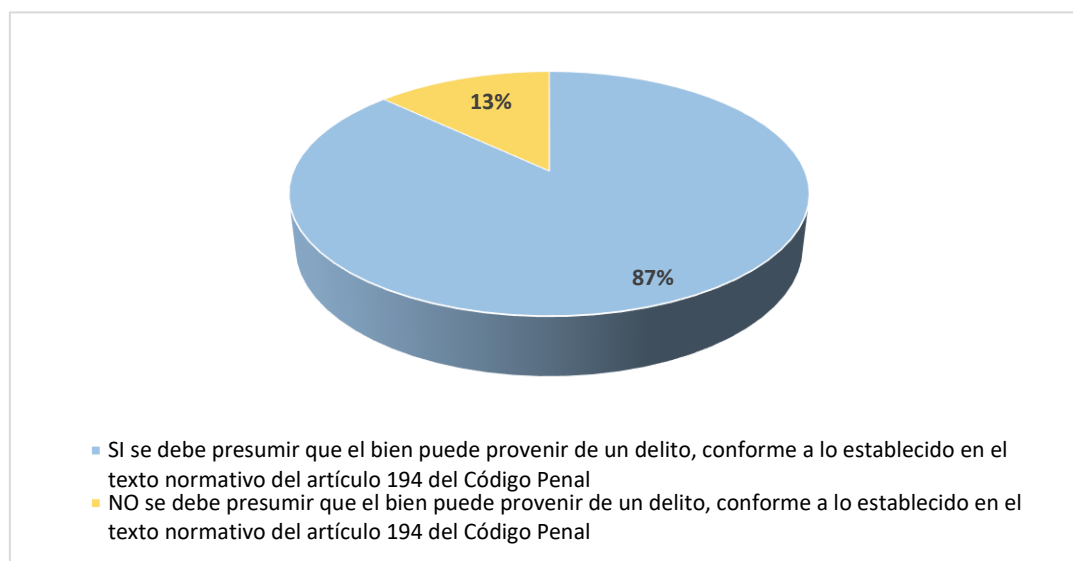


TABLA N° 07

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Valido
SI	87	87%	87%
NO	13	13%	13%
TOTAL	100	100%	100%

H. ¿Tiene conocimiento de la existencia de la página de Osiptel

<https://www.osiptel.gob.pe/sistemas/sigem.html> en donde se puede consultar si un equipo celular está registrado como sustraído, a través de la digitación del número de IMEI?

Del 100% de los encuestados, el 83% respondió que “SI” tienen conocimiento de la existencia de la página de Osiptel para consultar si un equipo celular está registrado como sustraído, a través de la digitación del número de IMEI; en cambio, el 17% respondió que “NO” tienen conocimiento de la existencia de la página de Osiptel para consultar si un equipo celular está registrado como sustraído, a través de la digitación del número de IMEI.

GRÁFICO N° 08

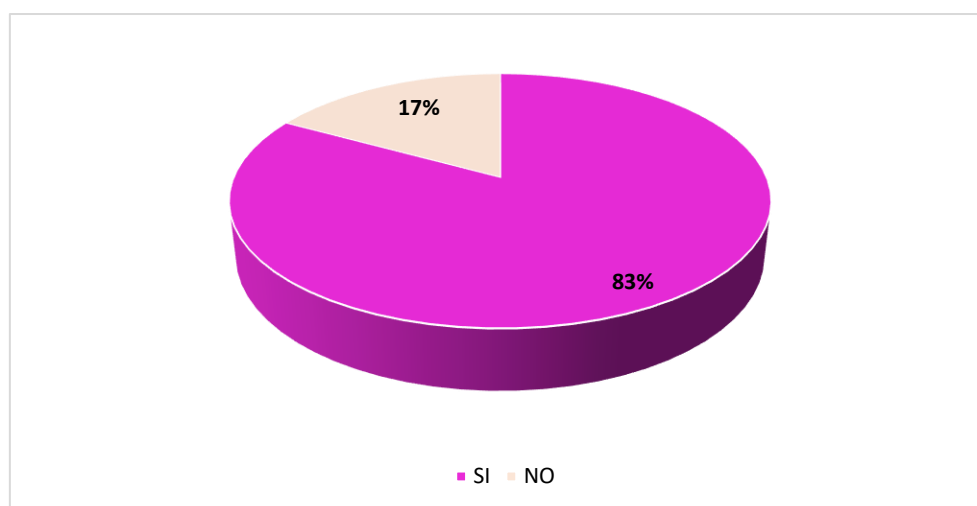


TABLA N° 08

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Valido
SI	83	83%	83%
NO	17	17%	17%
TOTAL	100	100%	100%

I. ¿Considera Ud. que todo ciudadano antes de adquirir un equipo celular en un lugar de dudosa reputación, debería verificar el IMEI en la página de Osiptel <https://www.osiptel.gob.pe/sistemas/sigem.html> a fin de tener conocimiento si figura como sustraído?

Del 100% de los encuestados, el 65% respondió que todo ciudadano al momento de adquirir un equipo celular en un lugar de dudosa reputación “SI” debería verificar el IMEI en la página de Osiptel a fin de tener conocimiento si figura como sustraído; en cambio, el 33% de los encuestados respondió que al momento de adquirir un equipo celular en un lugar de dudosa reputación va “depender del grado de instrucción del ciudadano” verificar el IMEI en la página de Osiptel a fin de tener conocimiento si figura como sustraído; y, tan solo el 2% de los encuestados “NO OPINA”.

GRAFICO N° 09

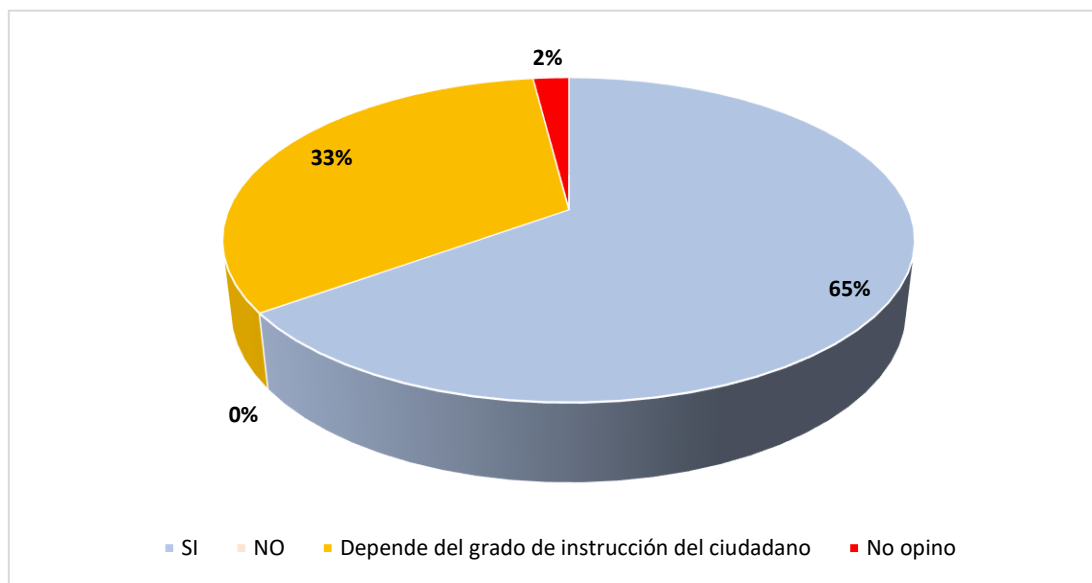


TABLA N° 09

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Valido
SI	65	65%	65%
NO	0	0%	0%
Depende del grado de instrucción	33	33%	33%
No opino	2	2%	2%
TOTAL	100	100%	100%

J. ¿Considera que, para eximir el cumplimiento del deber de presumir la procedencia delictuosa del bien, exigido en el texto normativo del artículo 194 del

Código Penal, es viable la aplicación del error de tipo? Por ejemplo: Cuando un sujeto compra un bien de procedencia delictuosa (delito precedente), creyendo que el vendedor era el titular o propietario, ya que, este le había otorgado la documentación correspondiente (boleto o factura) para acreditar la venta del bien y transferencia de propiedad.

Del 100% de los encuestados, el 87% respondió que “SI” es viable la aplicación del error de tipo para eximir el cumplimiento del deber de presumir la procedencia delictuosa del bien, exigido en el texto normativo del artículo 194 del Código Penal; en cambio, el 10% respondió que “NO” es viable la aplicación del error de tipo para eximir el cumplimiento del deber de presumir la procedencia delictuosa del bien; y, tan solo el 3% de los encuestados “NO OPINA”.

GRÁFICO N° 10

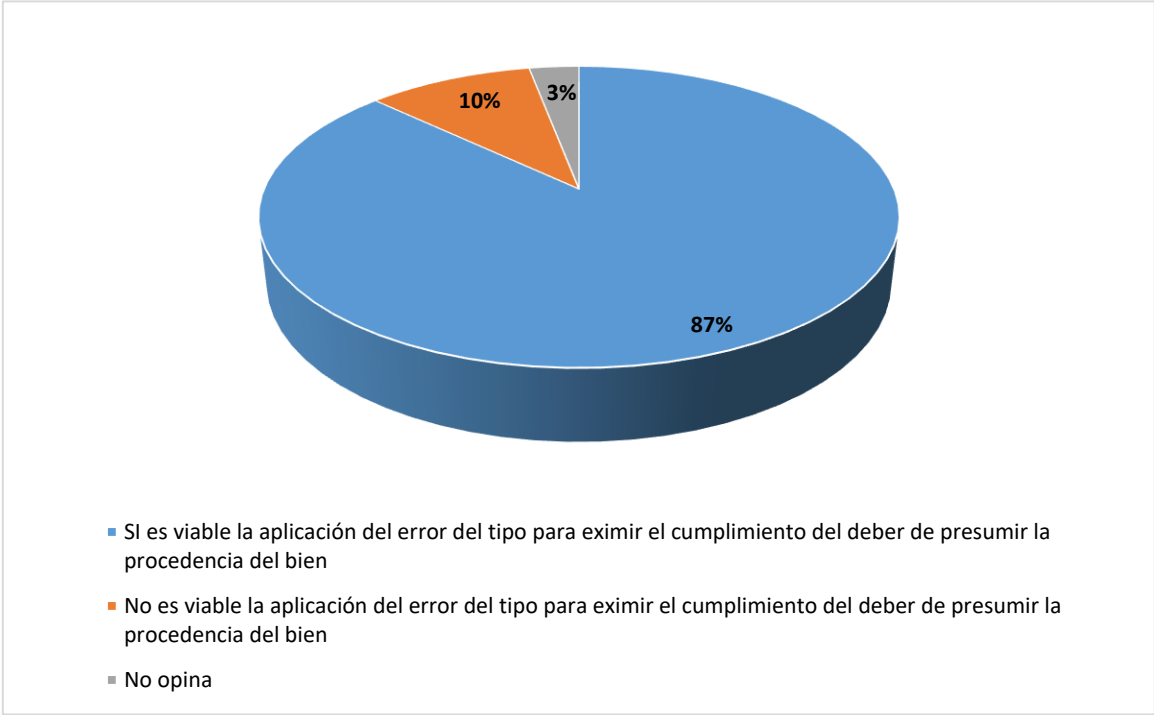


TABLA N° 10

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Valido
SI es viable la aplicación del error de tipo para eximir el cumplimiento del	87	87%	87%

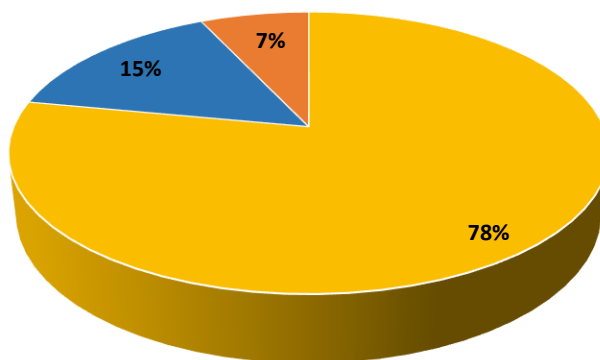
deber de presumir la procedencia delictuosa del bien			
NO es viable la aplicación del error de tipo para eximir el cumplimiento del deber de presumir la procedencia delictuosa del bien	10	10%	10%
NO OPINA	3	3%	3%
TOTAL	100	100%	100%

K. En virtud de la aplicación del principio de confianza ¿Se podría exonerar de responsabilidad penal al ciudadano que ha incumplido el deber de presumir la procedencia ilícita al momento de adquirir, recibir - en donación o en prenda o guarda - un bien, como lo exige el tipo penal de receptación para su configuración?

Por ejemplo: “A” es el asistente de “B”, cuya función es realizar labores de apoyo o asistencia. Un día de labores, “B” le solicita a “A” que reciba una laptop de tal persona en un determinado lugar, y que posteriormente se la entregue a él. Una vez que “A” recibe la laptop conforme a lo ordenado, antes de llegar a centro de trabajo para entregársela a “B”, es intervenido por personal policial, manifestándole que dicha laptop es hurtada.

Del 100% de los encuestados, el 78% respondió que “SI” se podría exonerar de responsabilidad penal al ciudadano que ha incumplido el deber de presumir la procedencia ilícita mediante la aplicación del principio de confianza; en cambio, el 15% respondió que “NO” se podría exonerar de responsabilidad penal al ciudadano que ha incumplido el deber de presumir la procedencia ilícita mediante la aplicación del principio de confianza; y, tan solo el 7% de los encuestados “NO OPINA”.

GRÁFICO N° 11



- SI se podría exonerar de responsabilidad penal al ciudadano que ha incumplido el deber de presumir la procedencia ilícita mediante la aplicación del principio de confianza
- NO se podría exonerar de responsabilidad penal al ciudadano que ha incumplido el deber de presumir la procedencia ilícita mediante la aplicación del principio de confianza
- No opina

TABLA N° 11

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Valido
SI se podría exonerar de responsabilidad penal al ciudadano que ha incumplido el deber de presumir la procedencia ilícita mediante la aplicación del principio de confianza	78	78%	78%
NO se podría exonerar de responsabilidad penal al ciudadano que ha incumplido el deber de presumir la procedencia ilícita mediante la aplicación del principio de confianza	15	15%	15%
NO OPINA	7	7%	7%
TOTAL	100	100%	100%

L. En virtud de la aplicación de la prohibición de regreso ¿Se podría exonerar de responsabilidad penal cuando se ha incumplido el deber de presumir la procedencia ilícita al momento de adquirir, recibir - en donación o en prenda o guarda - un bien, como lo exige el tipo penal de receptación para su configuración?

Por ejemplo: “A” es el encargado de supervisar una playa de estacionamiento, cuya labor es registrar las unidades vehiculares que ingresan y salen del aparcamiento. Un día de semana, llega a la playa de estacionamiento “B” en una unidad motorizada (moto lineal) con la finalidad de aparcar por un tiempo determinado, sin embargo, esta unidad vehicular motorizada era robada. Posteriormente, ingresan efectivos policiales y lo detienen a “A” por haber ocultado un vehículo motorizado robado.

Del 100% de los encuestados, el 78% respondió que “SI” se podría exonerar de responsabilidad penal al ciudadano que ha incumplido el deber de presumir la procedencia ilícita mediante la aplicación del principio de prohibición de regreso; en cambio, el 18% respondió que “NO” se podría exonerar de responsabilidad penal al ciudadano que ha incumplido el deber de presumir la procedencia ilícita mediante la aplicación del principio de prohibición de regreso; y, tan solo el 4% de los encuestados “NO OPINA”.

GRAFICO N° 12

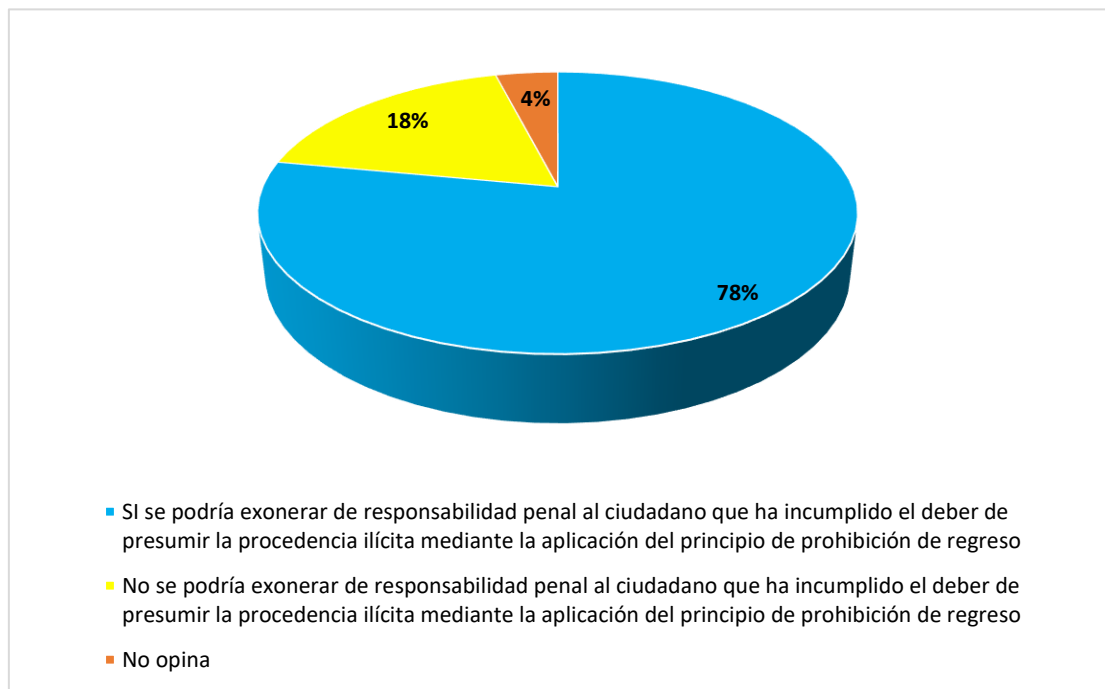


TABLA Nº 12

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Valido
SI se podría exonerar de responsabilidad penal al ciudadano que ha incumplido el deber de presumir la procedencia ilícita mediante la aplicación del principio de prohibición de regreso	78	78%	78%
NO se podría exonerar de responsabilidad penal al ciudadano que ha incumplido el deber de presumir la procedencia ilícita mediante la aplicación del principio de prohibición de regreso	18	18%	18%
NO OPINA	4	4%	4%
TOTAL	100	100%	100%

CAPITULO V: CONTRASTACION DE LA HIPÓTESIS

5.1. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

5.1.1. SOBRE EL PRIMER OBJETIVO: Analizar la estructura típica del Tipo penal de receptación previsto en el artículo 194 del Código Penal.

La estructura típica del delito de receptación, previsto en el artículo 194 del Código Penal, esta compuesto por los siguientes elementos: i) Bien jurídico protegido; ii) Tipicidad objetiva (sujeto activo, sujeto pasivo, objeto del delito, comportamiento típico); iii) Tipicidad subjetiva.

- a.** Respecto al bien jurídico protegido en la receptación, existe en la doctrina una serie de teorías orientadas a definir el bien jurídico protegido del ilícito de receptación, las cuales son: **i)** la Teoría del mantenimiento de la ilicitud, **ii)** la Teoría del aprovechamiento, y, **iii)** la Teoría contra la administración de justicia. Siendo las dos primeras orientadas a tutelar al patrimonio como bien jurídico, en cambio, la tercera, a la administración de justicia como bien jurídico.

En la Teoría del mantenimiento de la ilicitud, se sostiene que “el delito de receptación ayuda a mantener una situación antijurídica producida por un delito previo, y, por ende, se produce una nueva lesión – o se sigue manteniendo una lesión – al bien jurídico patrimonio, ya que, se está impidiendo o restringiendo la posibilidad de restituirse el bien despojado a su legítimo dueño” (Reategui Sanchez, 2015, pág. 420).

La Teoría del aprovechamiento, afirma que “el sujeto activo se está aprovechando u obteniendo un beneficio económico de una actividad ilícita previa, es decir, a través de una situación antijurídica previamente creada se obtiene una ventaja económica” (Reategui Sanchez, 2015, pág. 421).

Armaza Galdós (1999), nos dice que “esta Teoría es adoptada en un fallo judicial del expediente N° 371-1998, de la Sala Mixta de Camaná, de fecha 17 de Setiembre de 1998, argumentándose que el ilícito de receptación consiste esencialmente en aprovechar los efectos del delito antecedente, y, donde éste conserva su autonomía a pesar que el bien receptado sea el mismo que del delito antecedente” (pág. 144).

La Teoría contra la Administración de Justicia, sostiene que la receptación impide o afecta la recaudación del material probatorio sobre la comisión del delito precedente, en el sentido que “la conducta del autor (receptor) entorpece u obstaculiza el accionar de las autoridades para hacer justicia, y, consecuentemente poder restituir el bien o la cosa a su legítimo propietario (víctima del delito anterior)” (Reategui Sanchez, 2015, pág. 422). En esta teoría no se tienen en cuenta la lesión patrimonial que se produzca por el actuar del autor. A nuestro criterio diríamos que “el actuar del receptor implica mantener de manera indefinida una lesión al bien jurídico patrimonio, ya que, el legítimo propietario no puede disponer del bien”.

b. Respecto a la tipicidad objetiva, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

b.1. Según, Peña Cabrera (2019), al sujeto activo “no se le exige una condición especial, esto es, el receptor puede ser cualquiera, sin embargo, no pudo haber intervenido de ninguna manera o forma en el delito precedente, de lo contrario se estaría penalizando actos atípicos, los cuales son realizados posteriormente a la comisión de un delito” (p. 111).

b.2. En cuanto al sujeto pasivo, “es aquella persona (natural o jurídica), que en su condición de titular del bien (propietario o poseedor legítimo) es desposeído como consecuencia de un hecho punible precedente (delito anterior)” (Peña Cabrera Freyre, 2019, pág. 112).

b.3. En cuanto al aspecto objetivo de este delito, es necesario establecer la existencia de un delito precedente, ya que, mediante la consumación de un delito precedente (hurto, robo, apropiación ilícita) se obtiene un apoderamiento ilegítimo o apropiación indebida de un bien mueble ajeno, el cual posteriormente es adquirido, recibido (donación o prenda), guardado, escondido, o, vendido con pleno conocimiento de su procedencia ilícita, o, existiendo indicios suficientes para presumir la ilicitud de su procedencia.

En este sentido, autores como Armaza Galdós & Zavala Toya (1999), manifiestan que “en este delito es necesario la existencia o realización de un delito anterior” (pág. 26), por cuanto, “los bienes obtenidos deben ser de procedencia ilícita, de lo contrario la conducta es atípica” (Rojas Vargas, 2000, pág. 303).

James Reátegui (2015) , nos dice que “es necesario tener en cuenta que en los procesos penales donde se le impute a una persona el delito de receptación, debe necesariamente comprobarse la existencia de un hecho ilícito previo, a pesar que se desconozca el contexto de lo sucedido” (pág. 425).

Por ello, para la materialización del injusto penal de receptación, es necesario la remisión a un “hecho punible precedente”, entonces, debe verificarse que provenga de un ilícito ya cometido, puesto que, “si el desprendimiento patrimonial es directo del propietario, se configuraría otro delito contra el patrimonio” (Peña Cabrera Freyre, 2019, pág. 112)

Peña Cabrera (2019), afirma que “el objeto en la receptación son bienes de carácter económico que no solo provienen de ilícitos contra el patrimonio, sino también de delitos de infracción de deberes funcionales como malversación, peculado, entre otros” (pág. 118).

Desde nuestro punto de vista, no compartimos este pensamiento, ya que, la finalidad político criminal del delito de receptación está destinada a persuadir al ciudadano promedio de no comprar bienes o cosas de procedencia ilícita o de dudosa procedencia, bajo advertencia de ser sancionados penalmente, y, como consecuencia, al no existir demanda no habría oferta, por ende, los índices de criminalidad en delitos contra el patrimonio disminuirían prudencialmente.

Por lo tanto, “el objeto material en la receptación”, como elemento objetivo necesario para la configuración de este ilícito penal, debe ser un bien de procedencia ilícita, específicamente que provenga de un delito previo de naturaleza patrimonial (como robo, hurto, apropiación ilícita), esto es, estamos hablando de un “bien mueble ajeno” de estimación económica, que puede ser apoderado o sustraído por un tercer no legitimado.

De acuerdo a lo precisado, el objeto material del delito de receptación, pueden ser objetos como artefactos electrónicos (celular, laptop, televisor, entre otros), refacciones de un automóvil, así como, el papel moneda, los cheques, y diversos documentos, susceptibles de valor económico, que hayan sido robados o hurtados.

b.4. El artículo 194 del Código Penal, precisa una serie de comportamientos (adquirir, recibir, esconder, guardar, vender y negociar) para que se pueda configurar el delito de receptación.

En ese sentido, debe tenerse en cuenta las definiciones de la Real Academia Española, así como lo señalado por doctrinarios peruanos, a fin de tener una idea clara sobre los verbos rectores del delito de receptación.

Adquirir es hacer propio un derecho o cosa que a nadie pertenece o que se transmite a título lucrativo u oneroso, o por prescripción (Real Academia de la Lengua Española, 2020). En ese sentido, se obtendrá una cosa mediante un acto jurídico oneroso (compraventa, permuta, etc.), o gratuito (donación), el cual se perfecciona mediante la “traditio” (entrega).

Recibir es “tomar o hacerse cargo lo que le dan o le envían” (Real Academia de la Lengua Española, 2020).

La donación, en términos generales se entiende como la entrega gratuita de una cosa, ya sea mueble o inmueble. Siendo ello así, es definida como “la libertad que goza alguien de transmitir la cosa de su propiedad de manera gratuita a favor de otra que la acepta” (Española, Diccionario de la Lengua Española, 2020).

En ese sentido, **recibir en donación** es cuando un individuo recibe u acepta la cosa de manera gratuita a su favor.

Se configuraría esta modalidad delictiva cuando se reciba un objeto donado, conociendo su procedencia (naturaleza) delictiva del mismo.

La prenda es definida como “un contrato de derecho real de garantía, donde se otorga a favor de otra persona una cosa, a cambio de asegurar el cumplimiento de una obligación crediticia personal”.

En ese sentido, **recibir en prenda**, es cuando un sujeto acepta o recibe un bien mueble como garantía prendaria.

Se configurará este ilícito penal, “cuando el acreedor de una obligación, acepta como garantía prendaria un bien mueble, a pesar de conocer la procedencia

ilícita de la cosa” (Salinas Siccha, 2015, pág. 246)

Guardar, su significado es “poner algo donde este seguro”, “conservar o retener algo”, “preservar algo del daño que le puede sobrevenir” (Española, Diccionario de la lengua española, 2020). Desde el aspecto jurídico, es tener una cosa con el fin de protegerla o cuidarla de cualquier peligro externo, ya sea, lícitos o ilícitos, que pudiera dañarla.

Conforme a lo indicado, guardar no es un acto de transferencia de un derecho real, ni mucho menos implica un acto de disposición sobre el bien, sino, “significa la posesión provisional de una cosa, existiendo la obligación de devolverla o entregarla a su titular” (Galvez & Delgado, 2012). En ese mismo sentido, se podría decir que “guardar es equivalente a depositar una cosa, existiendo la obligación de cuidarla hasta que sea solicitada por el titular o depositante” (Freyre, 1986).

Se configuraría esta modalidad delictiva de receptación, cuando el autor conozca la procedencia ilícita del bien, y, a pesar de ello proceda a guardarlo o custodiarlo. Es necesario precisar que el bien pudo ser entregado por el mismo autor del delito antecedente o por un tercero, generando la obligación de devolverle al mismo, cuando éste se lo requiera o conforme a lo acordado (el bien sea guardado por un tiempo determinado, y luego entregado).

Esconder, es “ocultar algo o no manifestarlo” (Española, DIRAE, 2020). En ese sentido, es tomar posesión de una cosa (bien mueble) y ocultarlo de los demás.

Se configuraría esta modalidad delictiva, cuando conociendo la naturaleza ilícita del bien, lo oculta con la finalidad de que los demás no lo lleguen a encontrar u identificar.

El vender, es traspasar la propiedad de un bien poseído a alguien por el precio pactado (Española, Diccionario de la Lengua Española, 2020), esto es, implica transferir el dominio de la cosa a favor de otra persona, conforme a los términos contractuales convenidos.

Reategui Sanchez (2015), nos dice que “en el delito de receptación se obtiene un provecho, el cual puede ser compartido entre el propio receptor, así como con el autor del delito previo, es decir, significando una colaboración mutua para el aprovechamiento del ilícito penal previo” (pág. 430).

Cuando hablamos de **ayudar a negociar**, implica actuar como mediador en la realización de un acto negocial entre dos personas. Siendo ello así, se configurará esta modalidad delictiva cuando el autor interviniendo en su cualidad de mediador, incentiva o promueve que se compre un bien de procedencia ilícita. Es decir, el autor (receptor) tiene conocimiento que el bien que está ayudando a negociar o comerciar o vender es de procedencia delictuosa, así mismo, es necesario preciar que la persona que pretende adquirir o comprar el bien delictuoso, debe ser extraña a la comisión del delito precedente.

- c. Sobre la tipicidad subjetiva de este ilícito penal, es necesario que el autor tenga pleno conocimiento de la procedencia delictuosa del bien poseído, mediante los siguientes actos: “adquirir, recibir (ya sea en donación o en prenda), guardar, esconder, vender o, ayudar a vender”, o, en su defecto deber presumir su procedencia ilícita de los bienes que pretende obtener un provecho. En este sentido, el elemento subjetivo en el tipo penal de receptación está constituido por el “conocimiento cierto” o la “presunción de que el bien procede de la comisión de un delito contra el patrimonio” (delito precedente), y, la voluntad de aprovecharse de dicho bien.

Al respecto, Salinas S. (2015), nos dice que:

En cuanto al tipo subjetivo en la receptación, es indispensable que el autor tenga conocimiento de la procedencia ilícita del bien que va adquirirlo, recibirlo, o promover a su venta, o, en su defecto debía presumir su procedencia ilícita de los bienes que pretende obtener un provecho. En este sentido, el elemento subjetivo en el tipo penal de receptación está por el conocimiento pleno del proceder ilícito del bien, el cual ha sido obtenido generalmente mediante un delito contra el patrimonio (delito precedente), y, la voluntad de aprovecharse de dicho bien. (pág. 425)

En ese sentido, Prado Saldarriaga (2021) señala que “admite tanto el dolo directo (el agente conoce la procedencia delictuosa del bien mueble que recepta) como el dolo eventual (el sujeto activo por las circunstancias concurrentes debía presumir la procedencia ilícita del bien mueble).” (pág. 179)

5.1.2.SOBRE EL SEGUNDO OBJETIVO: Analizar dogmáticamente el deber de presumir la procedencia ilícita del bien en el delito de receptación conforme a los lineamientos jurídicos de la Imputación Penal

Actualmente la imputación en el actual proceso penal abarca varios aspectos (dogmáticos y procesales) a tener en cuenta, esto es, por un lado, encontramos los denominados criterios o filtros de “imputación objetiva” e “imputación subjetiva”, en cambio, por otro lado, se encuentra estatuida como un “principio procesal” (imputación necesaria). En la presente investigación, únicamente abarcaremos los denominados criterios o filtros de “imputación objetiva” e “imputación subjetiva”.

A. La Teoría de la imputación objetiva es actualmente una herramienta dogmática de gran utilidad en la praxis fiscal y judicial, por cuanto, permite solucionar hechos con presunta relevancia jurídica penal. En ese sentido, “la imputación objetiva permite delimitar cuando los comportamientos se encontrarían en un espacio jurídicamente aceptado” (Frisancho, 2016, pág. 24), así mismo, cuando una “conducta es socialmente reprochable” (Jakobs, 2007, pág. 238).

Según Villavicencio (2006), “es el resultado de que el tipo penal se haya normativizado, siendo entendida como una teoría universal de la conducta típicamente relevante” (pág. 321). En otros términos, la imputación objetiva es “un mecanismo normativizado orientado a restringir la responsabilidad penal, dejando de lado las posibles causas del resultado” (Jescheck & Weigend, 2003, pág. 28).

Al respecto, el profesor Almanza Altamirano (2022) indica que “la imputación objetiva exige verificar si la acción ha generado un riesgo jurídicamente prohibido, y, si dicho resultado es consecuencia de este riesgo creado” (pág. 195)

En ese sentido, García Caveró (2019), precisa que “la imputación objetiva permite establecer cuando una conducta o suceso lesivo debe ser reprochado penalmente, es decir, atribuido normativamente como injusto penal, como consecuencia del

incumplimiento de un deber jurídico” (pág. 413).

Cuando desarrollamos la imputación objetiva, es necesario mencionar el “rol social”, tanto en un concepto genérico siendo entendido como “el status o posición que tiene una persona en la sociedad”. Por otro lado, desde una concepción específica, es entendida como “un sistema de status bien definidos de manera normativa, siendo ocupados por personas sustituibles o intercambiables” (Jakobs, 1996), por otro lado, desde un enfoque sociológico-jurídico, se le concibe al rol social como “un conjunto de expectativas, que a pesar de ser realizadas por los individuos, se espera que se comporte de cierta manera en razón de su posición social” (Vera & Gomez Trelles, 2002, pág. 72).

Según Frisancho (2016), “en base a los conceptos del rol social, se va desarrollando las esferas de competencia, y, virtud de ellos las expectativas sociales en virtud del rol social” (pág. 28). En ese sentido, Caro Jhon (2003), afirma que “el rol que cada individuo desempeña en la sociedad es determinante para determinar si su accionar puede ser considerado típicamente relevante para el derecho penal” (pág. 26). En ese sentido, “el rol que desempeña toda persona en sus ámbitos de interacción (como profesor, policía, medico, taxista, entre otros) delimita su responsabilidad con sus propios actos” (Miro Llinares & Orts, 2010, pág. 19).

De acuerdo a lo explicado, podemos precisar que la “posición social” desempeñada, implica un “factor normativo” con las siguientes funciones:

- a) Aspecto Formal o externo. – “permite identificar socialmente a un individuo, esto es, otorga una etiqueta, que permite diferenciar su status de los demás” (Jakobs, 1996, pág. 50). Por ello, “a pesar de no conocer a una persona, por su forma de vestir se le puede identificar su posición o rol social” (Miro Llinares & Orts, 2010, pág. 38).
- b) Aspecto Material o interno. – “permite definir los deberes y derechos intrínsecos del rol social de cada individuo” (Frisancho, 2016), como sería un funcionario estatal que tiene el derecho de recibir una remuneración justa, pero a su vez el deber de llevar a cabo una correcta administración pública en base a sus funciones.

Otro aspecto que es necesario en la imputación objetiva es sobre “el principio de autoresponsabilidad”, ya que, de acuerdo a éste “todo individuo únicamente es responsable de sus propias acciones o actos”; es decir, “toda persona en virtud de la autodeterminación sin intervenciones externas, tiene la libertad (jurídicamente reconocida) de tomar decisiones por su propia cuenta, siendo los únicos límites: el respeto de los derechos constitucionales y del ordenamiento jurídico (normas de mandato, prohibitivas)” (Frisancho, 2016, pág. 32).

Mediante esta teoría se puede imputar objetivamente a una persona ser el autor del resultado causado, ya sea como un injusto “doloso” o “culposo”, para ello, siendo necesario determinar si la acción realizada concretamente causó el resultado lesivo y que se cumplan las exigencias típicas requeridas para la configuración del delito; implicando que dicha acción o conducta supere el marco del riesgo jurídicamente permitido, convirtiéndose en un riesgo jurídicamente prohibido (riesgo penalmente relevante). En ese sentido, se llegará a determinar que una persona ha actuado conforme a su rol social, esto es, se ha limitado a cumplir sus deberes (general o especial) en relación a su ámbito de competencia, entonces, “es irrelevante pretender indagar el ámbito subjetivo, de quien realizó el comportamiento” (Jakobs, 1997, pág. 302).

Los criterios dogmáticos que son utilizados o aplicados en la imputación objetiva, son los propuestos por Claus Roxin y Günther Jakobs, conforme a lo desarrollado en el marco teórico del presente trabajo de investigación.

El deber de presumir la procedencia ilícita del bien en el delito de receptación conforme a los lineamientos jurídicos de imputación objetiva, nos conllevan asumir que “todo ciudadano es responsable de sus acciones o actuaciones realizadas o que van realizar, y, conforme a las expectativas sociales que implica su rol en la sociedad, se le exige cumplir ciertas reglas y normas (mandato, prohibitivas y permisivas)”. En el caso, de un ciudadano que pretende “adquirir”, “recibir” – ya sea, como una donación o en prenda – un bien, así como, “guardarlo”, “esconderlo”, “venderlo” o “ayudar a negociar su venta”, en virtud que “todo ciudadano diligente y respetuoso en el cumplimiento de las normas”, debe tener en cuenta el “contexto

social de su actuar”, esto es, cuales son las circunstancias (lugar de la entrega, forma de pago, precio comercial del bien, persona quien ofrece el bien, entre otros) en que el ciudadano va a tener que adquirir, recibir - en donación o en prenda-, así como, guardar, esconder, vender o ayudar a negociar un bien.

Por otro lado, en virtud de la aplicación de ciertos lineamientos jurídicos dogmáticos propios de la imputación objetiva como “principio de confianza” y “prohibición de regreso”, es posible o admisible poder exonerar de responsabilidad penal al ciudadano que a pesar de haber actuado diligentemente al momento de “adquirir”, “recibir” – ya sea, como una donación o en prenda – un bien, así como, “guardarlo”, “esconderlo”, “venderlo” o “ayudar a negociar su venta”, resulta que este bien es de procedencia ilícita. Al respecto, se ha desarrollado en el presente trabajo de investigación de manera minuciosa y rigurosa la aplicación de estas instituciones dogmáticas en casos prácticos, específicamente en el acápite denominado “Análisis práctico sobre el incumplimiento del deber de presumir la procedencia ilícita del bien en la configuración del delito de receptación en relación con la imputación objetiva”; el cual, también tiene una relación con el quinto objetivo específico.

B. Lo que respecta a la imputación subjetiva solo trataré sobre el dolo (definición, criterios de imputación), mas no la culpa, esto se debe por razones propia de la investigación, habiéndose considerado como dolo eventual “el deber de presumir” la procedencia ilícita del bien, en el delito de Receptación.

En la dogmática jurídica penal, se plantean dos posiciones para fundamentar una imputación subjetiva, las cuales son: la primera, es una concepción psicologicista, y, la segunda, una concepción normativista.

B.1. Dentro de las teorías psicologicistas se encuentra la “teoría de la voluntad” y la “teoría del conocimiento”. La primera, sostiene que la voluntad como elemento subjetivo en el resultado lesivo, permite diferenciar el “dolo” y la “culpa”. En ese sentido, “el dolo es el conocimiento del hecho más la voluntad respecto del resultado, mientras que culpa sería el conocimiento del hecho, pero sin voluntad de producir el resultado” (García Caveró, 2019, pág. 500). La segunda, argumenta que la diferencia entre el dolo y la culpa, radicaría en el “conocimiento”, sin embargo, a

esta teoría se le critica por extender demasiado los alcances del dolo, llegando al extremo de sacar en el ámbito de la culpa a la “culpa consciente”, por ello, se plantea como criterio delimitador de las conductas dolosas a la teoría de la probabilidad, “la cual exige no solo que el autor se represente el resultado, sino que exista un grado relevante de probabilidad de su producción” (Roxin, 2015, pág. 42); así mismo, elimina la clasificación del dolo (directo, consecuencias necesarias y eventual).

Se debe precisar que, en el ordenamiento jurídico peruano, se considera que el dolo es tanto conocimiento como voluntad, y ante la falta de una de ellas, no es posible imputar subjetivamente el resultado lesivo al autor. Es decir, tiene una concepción psicologicista del dolo.

Considero necesario una distinción de tipos de dolo, debido a que, en la propia estructura del delito de receptación, en el aspecto subjetivo encontramos al dolo directo (conocer la procedencia ilícita del bien) y dolo eventual (deber presumir la procedencia ilícita del bien) que darían lugar a su consumación.

1) Dolo Directo. –

Para Jescheck & Weigend (2003), “en este tipo de dolo, el autor tiene como finalidad poder obtener un resultado lesivo típico” (pág. 403). Por otro lado, Bacigalupo (1996), indica que “el autor se plantea obtener un resultado como objetivo de su acción, teniendo la seguridad que el resultado representado llegará a producirse como consecuencia de la materialización de su accionar” (pág. 128). En ese sentido, Mir Puig (2006), nos dice que “en el dolo directo, el autor tiene como finalidad la realización de un delito” (pág. 261).

1.1. Dolo directo en el delito de receptación. -

El dolo en la receptación, se evidencia cuando el agente del delito (receptor) conoce de manera directa (el ladrón le informa que el bien es robado o hurtado, el comprador observa el momento en que el bien es robado o hurtado, entre otros casos) o de manera indirecta (al individuo le comentan que el bien que pretende adquirir es robado o hurtado) el origen delictuoso del bien adquirido o recibido, bajo cualquier forma contractual, o no contractual.

2) Dolo Eventual. –

Este tipo de dolo, consiste “cuando el autor prevé como posible el resultado típico y se conforma con él” (Villanueva, 2004, pág. 117), es decir, “el autor considera seriamente como posible la realización del tipo legal y se conforma con ella” (Jescheck & Weigend, 2003, pág. 405).

Los autores coinciden que el concepto de dolo eventual – descrito precedentemente - requiere algo más que la representación de la posibilidad de la realización del tipo penal para poder diferenciarla de la culpa consciente o con representación, por ello, se han desarrollado teorías como: i) Consentimiento o aprobación, ii) Probabilidad o representación, iii) Asunción o ecléctica.

i) T. del consentimiento o de la aprobación. – sostiene que “el autor esté decidido de materializar su representación de la realización de un hecho típico, y, que esta representación sea insuficiente para corroborar la decisión” (Bacigalupo, 1996, pág. 129), es decir, no solo debe haber una representación del hecho típico a realizar, sino también debe existir una decisión interna (positiva) de realización de la misma.

ii) T. de la probabilidad o de representación. - de acuerdo a esta teoría, “existe dolo eventual cuando se represente la probabilidad de realizar un hecho típico como posible, es decir, con un alto grado de posibilidades en su realización” (Bacigalupo, 1996, pág. 129).

En ese sentido, Plasencia Villanueva (2004), nos dice que:

De acuerdo a esta teoría, se está ante un “dolo eventual” cuando se considere como posible la realización de un resultado típico. Sin embargo, es una “culpa consciente” cuando se llegue a representar un “resultado típico” poco posible. Lo resaltante de esta teoría es la prescindencia del elemento volitivo, para diferenciar la “culpa consciente” del “dolo eventual”. (pág. 118)

iii) T. de la asunción o ecléctica.- esta teoría es la menos objetada o cuestionada a diferencia de las otras, ya que, se considerará la existencia de un “dolo

eventual” cuando “el autor es consciente de la alta posibilidad de que su accionar representado ocasionaría una lesión al bien jurídico, y, a pesar de ello la realiza” (Bacigalupo, 1996, pág. 129).

2.1. Dolo eventual en el delito de receptación. -

Tratándose del “dolo eventual” en la receptación, se produce cuando el autor tiene la posibilidad de representarse que su acción de adquirir o recibir bajo cualquier forma contractual o no contractual (compraventa, donación, prenda, guarda, o esconder), podría dar lugar a la comisión de un ilícito penal, ya que, debido a las “especiales circunstancias” que circunscriben el hecho, permiten presumir o sospechar que el bien es de procedencia ilícita (objeto de un delito precedente), sin embargo, a pesar de conocer esta situación, procede a ejecutar su conducta. En este sentido, a pesar que el autor tuvo la “posibilidad de representarse” que su actuar podría ocasionar un resultado típico o lesivo (receptar un bien de procedencia delictuosa, por ende, quebrantar norma penal), éste acepta (consentimiento interno) la producción de este resultado típico, es decir, a pesar que el agente tenía la posibilidad de anticiparse al resultado típico (receptar), ya que, tenía conocimiento de la peligrosidad de su actuar, este igualmente lo comete.

B.2. La concepción normativa, se fundamenta en que los “datos psíquicos” son irrelevantes para el ámbito del derecho penal. En ese sentido, “en la actualidad comienza a ganar terreno la perspectiva normativista, partiendo de la idea que lo subjetivo no se verifica, sino solo se imputa” (García Caveró, 2019, pág. 503), esto se debe a que es complicado “probar un hecho psíquico”, por ende, generando dificultades en la praxis judicial.

Siendo ello así, una concepción normativista, sería la solución de estos problemas (calificación e interpretación), ya que, estaría orientada a determinar la “relevancia jurídico penal” de lo subjetivo, desde una visión que se inicia en lo externo y luego a lo interno; donde lo externo se conforma a través del “significado social perturbador de la conducta específica”, en cambio, lo interno con el “sentido normativo” que se le concede al conocimiento (Caro Jhon J. A., 2012, pág. 25). A

diferencia de las teorías psicologicistas, no se pretende indagar o interpretar la conciencia del autor, sino atribuir un “significado penalmente relevante”, por ello, primero se verificará si la conducta desplegada por el autor se constituye como una “conducta socialmente perturbadora”, y, luego se analizará, si la conducta ha sido dolosa o culposa para efectos de imputación.

1) Dolo

Desde una concepción normativista, el dolo adquiere una nueva conceptualización, ya que no está orientada a “evitar una lesión al bien jurídico protegido” (desde un punto subjetivista), sino a “recobrar la vigencia de la norma defraudada” por la acción - penalmente relevante – del autor. En ese sentido, el dolo “está constituido por una imputación a nivel cognoscitivo, permitiendo al autor poder identificar que su accionar comunica una abierta discusión a la vigencia de la norma penal” (García Caveró, 2019, pág. 507), por ello, para seguir manteniéndose fiel al derecho (respetar las normas penales), deberá desistirse o interrumpir dicho emprendimiento.

Gunter Jakobs (1998), nos precisa que:

“(…) el dolo estará conformada únicamente por el conocimiento, es decir, para acreditar su existencia solo se necesitará imputar el conocimiento necesario, con la finalidad que acepte los riesgos comprendidos por su conducta, y las consecuencias lesivas a producirse, la cual constituye una defraudación de las expectativas sociales para una convivencia pacífica en la sociedad” (num. marg. 8).

En este contexto de pensamientos dogmáticos, el autor o sujeto activo al conocer la “lesividad o peligrosidad” de su accionar o conducta, igualmente la ejecuta o la realiza, generando un quebrantamiento de la norma penal, la cual está condicionada a las expectativas sociales que se tienen del autor respecto a su deber como “ciudadano” (deber general) o por su “status cualificado” (deber especial). En ese sentido, el conocimiento penalmente relevante, es “aquel conocimiento que se debe saber en el contexto social de la acción” (Caro Jhon J. A., 2006, pág. 10), es decir, “es el conocimiento concreto que el actuante debía

conocer en virtud del contexto social de su acción, por cuanto, en él se concreta el tipo de deber (general o especial) cuya observancia compete a la persona al momento de actuar” (Caro Jhon J. A., 2006, pág. 10).

Por ello, únicamente no basta que el autor tenga conocimiento de la peligrosidad de actuación, sino que en virtud de su rol social (deber general o especial) esté obligado a desistirse de actuar o impedir la defraudación de la norma penal. Por ejemplo, el funcionario público que tiene como obligación cuidar y mantener el buen estado de alimentos de primera necesidad, los cuales están destinados a pobladores de asentamientos humanos, éste omite su deber, por ende, generando una intoxicación a gran escala a los pobladores. En este caso, no se analizará la imputación objetiva, ya que, se determinó la responsabilidad objetiva del funcionario, entonces, se procede a verificar la imputación subjetiva, siendo necesario primero, verificar si el autor conocía la dañosidad de su actuación omisiva o negligente, siendo en el presente caso, que en virtud de su status de funcionario público supervisor (rol social especial), si es consciente de la dañosidad de su accionar, generando una defraudación de la norma, es decir, en virtud de su contexto social de su acción (deber especial) como funcionario público supervisor de alimentos de primera necesidad, no puede alegar desconocimiento o ignorancia.

De acuerdo a estos postulados, se comienza abandonar progresivamente una concepción subjetivista que: el dolo es “conocimiento y voluntad”; adoptándose el pensamiento que “el dolo se concibe solo como conocimiento de la realización de un comportamiento típico objetivo” (Ragues Valles, 1999, pág. 13).

2) Ausencia de Dolo. -

2.1. Error de Tipo. –

Es entendida como “el total desconocimiento o ignorancia de uno, algunos o todos los elementos típicos del delito” (Amaya, Sanchez Tomás, & Alcaecer Guirao, 2007, pág. 165). En otras palabras, “el autor al desconocer que su acción (conducta o actuar) daría lugar a los elementos típicos requeridos, entonces, la parte relativa al conocimiento no se concretizaría, y,

consecuentemente se excluiría el dolo” (Villanueva, 2004, pág. 120).

Para García Caveró (2019), “es la negación de los elementos de la tipicidad subjetiva, ya que, se tiene desconocimiento de que la actuación realizada contraviene objetivamente la norma penal garantizada” (pág. 513). Por otro lado, Amaya, Sanchez Tomás, & Alcaecer Guirao (2007), nos dicen que “es la falsa o errónea percepción de algún elemento objetivo o normativo de la conducta típica, es decir, es el desconocimiento o ignorancia de alguna circunstancia en la que el autor efectuó su actuación típica” (pág. 165).

Al respecto, Mir Puig (2008), precisa que “el error de tipo supone el desconocimiento de algún elemento del tipo penal, en cambio, el error de prohibición, se desconoce que la realización de una actuación está prohibida para la norma penal” (pág. 268).

Cuando tratamos del “error de tipo”, se debe diferenciar entre el “error invencible” y el “error vencible”. Al respecto, Mir Puig (2008), manifiesta que “será invencible cuando es inevitable el resultado, a pesar de actuarse diligentemente, en cambio, será vencible, cuando se puede evitar, siempre y cuando se hubiera actuado diligentemente (observado el deber de cuidado)” (pág. 270). La omisión o inobservancia al “deber de cuidado”, constituirá una imprudencia o negligencia.

2.1.1. Error de tipo en el delito de receptación

Se presentaría cuando un sujeto compra un bien de procedencia delictuosa (delito precedente), creyendo que el vendedor era el titular o propietario, ya que, éste le había otorgado la documentación correspondiente (boleta o factura) para acreditar la venta del bien y transferencia de propiedad. En este supuesto, se podría sostener que el adquiriente actuó erradamente, debido a que desconoce la “ajeneidad de la cosa” (como elemento normativo del tipo penal), ya que, asumió que la cosa era de titularidad del vendedor y lo estaba adquiriendo de manera lícita o formal (conforme a la documentación otorgada). Siendo ello así, a pesar que los hechos descritos podrían tipificarse como un delito de receptación, por cuanto, se adquirió

un bien de procedencia delictuosa (hurto, robo, apropiación ilícita), en virtud, del desconocimiento de la “ajeneidad de la cosa”, se descartaría el dolo, y consecuentemente se le exonera de responsabilidad.

5.1.3.SOBRE EL TERCER OBJETIVO: Explicar los criterios jurídicos-dogmáticos en que se fundamenta el deber de presumir la procedencia ilícita del bien como elemento subjetivo necesario para la configuración del tipo penal de receptación.

Como ciudadanos nos encontramos gobernados por normas (permisivas, prohibitivas o de mandato), las cuales imponen determinados “deberes” que deben ser cumplidos, con la finalidad de convivir socialmente de manera pacífica, sin vulnerar los derechos de los demás, es decir, mediante las normas se pretende regular o dirigir conductas, mandatos y obligaciones cuyo incumplimiento está condicionado a una sanción. En ese sentido, las “normas penales” imponen determinados deberes (hacer: ayudar a una persona en situación de peligro, o no hacer: no matar, no robar) que deben ser cumplidos bajo apercibimiento de ser sancionados penalmente.

En ese sentido, existen normas que establecen determinados deberes (generales o especiales), como es el caso del “mandato legal” establecido en el artículo ciento noventa y cuatro del Código Penal, consistente en: **“deber de presumir que el bien provenía de un delito”**. En este dispositivo legal, se exige el “deber de presumir la procedencia ilícita del bien”, al momento de adquirir, recibir en donación o en prenda, guardar, esconder, vender o ayudar a negociar dicho bien.

Al respecto, Roy Freyre (1986), manifiesta que:

El “deber de presumir” no debe ser interpretado como un probable “cálculo mental” del autor, que se encuentra sometido a cierto cuidado o prudencia exigido por las circunstancias, sino, dar por hecho que el autor “presumió” o “no presumió” que la cosa es de procedencia ilícita, sin embargo, a pesar de ello la “adquirió” o “recibió”, generando con ello un actuar encubridor de un ilícito previo. (pág. 143-145)

Desde mi punto de vista, considero que el cumplimiento del “deber de presumir la procedencia ilícita del bien” en el delito de receptación, puede ser interpretado desde una concepción psicologicista o normativista.

En ese sentido, desde una **concepción psicologicista**, el sujeto debió representarse mentalmente que su acción (adquirir, recibir en donación o prenda, guardar, esconder, vender o negociar la venta del bien), podría dar lugar a la comisión de un ilícito penal (receptación), ya que, concurren determinadas circunstancias (se realiza en un lugar de dudosa reputación, el precio es exiguo a diferencia del precio comercial en el mercado, el vendedor no entrega comprobantes de pago, entre otros), que permiten “presumir” o “sospechar” que el bien es de procedencia delictuosa (objeto de un delito precedente), sin embargo, a pesar de conocer esta situación, procede a ejecutar su conducta (adquirir, recibir, guardar, esconder, vender el bien de procedencia ilícita) de manera consciente y voluntaria. Por ello, se debe entender que el “deber de presumir” es una exigencia del tipo penal como un hecho psicológico que el autor presumió – al tener pleno conocimiento de las circunstancias - que el bien es de procedencia ilícita.

Así mismo, se puede decir que, a pesar que el autor advirtió una gran probabilidad de que su accionar produjese un resultado típico o lesivo (receptar un bien de procedencia delictuosa, por ende, se afecta el bien jurídico de propiedad), debido a las circunstancias en que se va desarrollar su acción o actuar (adquirir, recibir, esconder, vender o ayudar a negociar la venta del bien de procedencia delictuosa), éste acepta (consentimiento interno) la producción de este resultado típico, es decir, a pesar que el agente tenía la posibilidad de anticiparse o no producir el resultado típico (receptar), ya que, tenía conocimiento de la lesividad o peligrosidad de su actuar, éste igualmente lo comete.

Desde una **concepción normativista**, el sujeto en razón de su rol social como ciudadano – fiel o respetuoso de la norma penal -, al tener conocimiento de las circunstancias en que se pretende adquirir, recibir, guardar, esconder, vender o ayudar a negociar un bien, son sospechosas o poco confiables (se realiza en un lugar de dudosa reputación, el precio es exiguo a diferencia del precio comercial en el mercado, el vendedor no entrega comprobantes de pago, el transferente no tiene trabajo conocido, entre otros), automáticamente debió inferir - a partir de los hechos conocidos - que el bien que se pretende adquirir, recibir en donación o en prenda o guardar, esconder, vender es de procedencia delictuosa. Por lo tanto, las expectativas sociales que se tienen del autor como ciudadano respetuoso de la norma son incumplidas, generando un quebrantamiento a la norma penal.

En ese mismo sentido, el cumplimiento del “deber de presumir” la procedencia ilícita del bien, está condicionada al “contexto social que se va desarrollar la actuación del autor”, es decir, en qué circunstancias el autor va a tener que adquirir, recibir en donación o en prenda o guardar, esconder, vender o ayudar a negociar un bien de procedencia delictuosa. Por ejemplo, “A” se dirige a una tienda con la finalidad de comprar un “celular”, y una vez terminada la transferencia del bien (compra del bien y entrega de la boleta o factura), es interceptado por unos policías manifestándole que el celular es robado (conforme a la descripción de la víctima), por ende, privándosele de la posesión del celular, y dirigido a la comisaría. En este caso, “A” realiza aparentemente una compra dentro del marco de la legalidad, ya que el vendedor le entrega a “A” un comprobante de pago, el cual acredita su legítima propiedad, sin embargo, el bien es de procedencia delictuosa, en ese sentido, el contexto social se manifiesta que, “A” confiaba en que la adquisición realizada (compra del celular) es legítima y legal, ya que está acudiendo a una tienda confiable (cuenta con los permisos de funcionamiento necesarios) y se le entrega un comprobante de pago que acredita la titularidad del bien comprado. Por lo tanto, en este caso, dada las circunstancias en que se desarrolló la acción (adquisición) no se le puede exigir a “A” el deber de presumir la procedencia delictuosa del bien, o en todo caso no se le puede imputar que ha incumplido el “deber de presumir” la procedencia delictuosa del bien.

De acuerdo a lo precisado, el “incumplimiento del deber de presumir la procedencia delictuosa del bien” como elemento subjetivo en la configuración del delito de receptación, sería “el conocimiento concreto que debía tener o suponer en el contexto social de su acción”, es decir, el autor conociendo las circunstancias en que pretende “adquirir”, “recibir” o “guardar”, “esconder”, “vender” o “ayudar a negociar un bien”, son sospechosas o poco confiables, por ejemplo, se realiza en un lugar de dudosa reputación, el precio es exiguo a diferencia del precio comercial en el mercado, el vendedor no entrega comprobantes de pago, entre otros; automáticamente debe inferir - a partir de los hechos conocidos - que el bien es de procedencia delictuosa.

5.1.4.SOBRE EL CUARTO OBJETIVO: Analizar los criterios jurídicos - dogmáticos que utilizan los Fiscales del Distrito Fiscal de Lambayeque para fundamentar su imputación penal respecto al incumplimiento del deber de presumir la

procedencia ilícita del bien como elemento subjetivo necesario para la configuración del tipo penal de receptación.

De acuerdo a los requerimientos acusatorios recopilados y analizados, se puede apreciar que existe una correcta calificación de los hechos denunciados, en cuanto al delito de receptación. En ese sentido, en el distrito fiscal de Lambayeque los criterios jurídicos - dogmáticos para imputar el tipo penal de receptación, son verificar: i) La existencia de un delito previo, del cual no haya intervenido el investigado, ya sea, en calidad de autor o cómplice; ii) El bien encontrado en tenencia del investigado es de origen ilícito, esto es, proviene de un delito previo, al respecto, Fiscalía señala que, **es insuficiente un simple reporte de OSIPTEL como elemento de convicción para determinar la posible responsabilidad del investigado (tratándose de equipos móviles o celulares)**; iii) el investigado tiene conocimiento de la procedencia ilícita del bien, y, a pesar de conocer el origen ilícito del bien, igualmente lo adquiere, recibe, guarda, esconde, vende o ayuda a negociar su venta, la fiscalía para determinar que el propio investigado conocía que estaba adquiriendo un bien ilícito, se basa en la propia declaración testimonial del investigado, ya que, reconoce expresamente conocer la procedencia ilícita del bien, y a pesar de ello, lo adquirió, recibió, guardó, escondió, vendió o ayudó a venderlo; iv) Analiza el contexto social de los hechos denunciados, y, en virtud de ello puede deslindar responsabilidad penal mediante la aplicación de los criterios de imputación objetiva (según la perspectiva funcionalista de Jakobs), ya que, existen casos en donde el investigado ha actuado conforme a su rol social, esto es, en cumplimiento de las expectativas sociales exigidas (como un trabajador de un almacén, de una cochera, entre otros), y, a pesar ello ha contribuido con la realización de un ilícito penal (receptación), sin embargo, ante los ojos de la “imputación objetiva”, su conducta es neutral o estereotipada, no mereciendo un reproche penal, y consecuentemente una sanción penal.

Conforme a lo indicado, se precisará de manera concisa y detallada cuales son los criterios dogmáticos que se vienen aplicando en el distrito fiscal de Lambayeque, para imputar el delito de receptación:

Numero de Carpeta Fiscal	Criterios jurídicos - dogmáticos para calificar el tipo penal de receptación respecto al incumplimiento del deber de presumir la procedencia ilícita del bien
3984-2019	<p>Asimismo, se le imputa al acusado OSCAR NAUCA SALDAÑA, ser autor del delito contra el patrimonio en su figura de Receptación, toda vez que el día 11 de mayo del 2019, una vez suscitado el Hurto de las pertenencias de la agraviada Zoila Nahomi Quiroz Tarrillo, por parte de los imputados Franklin Quepuy Coronado y Vásquez Rioja Abraham; el imputado Franklin Quepuy Coronado se traslada hasta el domicilio ubicado en el PP.JJ. Fanny Abanto – Mz D Lote 30 – Chiclayo, perteneciente al acusado Oscar Nauca Saldaña, a quien le ofrece en venta el balón de gas en un precio de S/30.00 soles y pese a que el imputado Oscar Nauca Saldaña, <u>debido al bajo precio en que se vendía el balón de gas, presumía de la procedencia ilícita procede a adquirir dicho balón de gas en el interior de su taller mecánica.</u></p> <p>Asimismo, se le atribuye al acusado OSCAR NAUCA SALDAÑA, ser AUTOR del Delito Contra El Patrimonio, en su modalidad de Receptación, conducta prevista y sancionada en el Artículo 194 del Código Penal, en agravio de ZOILA NAHOMI QUIROZ TARRILLO; ya que ha realizado el evento delictivo con pleno dominio; (...).</p> <p>4.2. Asimismo, se han recabado suficientes elementos de convicción que vinculan al acusado OSCAR NAUCA SALDAÑA, por la comisión de DELITO CONTRA EL PATRIMONIO, en su figura de RECEPTACIÓN, en agravio de ZOILA NAHOMI QUIROZ TARRILLO, entre ellos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El Acta de intervención policial de fecha 11 de mayo del 2019, en la que se detalla la forma y circunstancias en que fue intervenido el acusado Franklin Quepuy Coronado (20). Asimismo, efectivos policiales se constituyeron al domicilio ubicado en la Mz. D Lote 30 – PP.JJ. Fanny Abanto de esta ciudad, entrevistándose con el ahora acusado Oscar Nauca Saldaña, el mismo que aceptó haber comprado un balón de gas al acusado también Franklin Quepuy Coronado, siendo intervenido posteriormente y conducido a la comisaría del sector para las diligencias de ley. (Fs.06) 2. El Acta de Incautación, de fecha 11 de mayo del 2019, en el cual se detalla que personal policial procede a incautar al acusado Oscar Nauca Saldaña: Un balón de gas (lleno) de color plomo de marca Progas, el cual le había sido hurtado a la agraviada Zoila Nahomi Quiroz Tarrillo el día de la fecha. (Fs. 13)

	<p>3. El Acta de Entrega de especie de fecha 11 de mayo del 2019, obrante a (Fs.15), mediante el cual se detalla que efectivos policiales le hacen entrega a la agraviada Zoila Nahomi Quiroz Tarrillo, de: Un balón de gas (lleno), de color plomo, de marca Progas, el mismo que es de su propiedad, y el cual fue hurtado el día 11 de mayo del presente año.</p> <p>4. La declaración indagatoria del acusado Oscar Nauca Saldaña, de fecha 12 de mayo del 2019, mediante la cual acepta ser el autor de los hechos objetos de imputación en agravio de Zoila Naomi Quiroz Tarrillo y que cuando el acusado Franklin Quepuy Coronado, le vende el balón de gas de propiedad de la agraviada, éste le vende a un precio por debajo de lo normal, y que suponía que tenía una procedencia ilícita o que era robado. (Fs.21-22).</p>
2050-2019	<p>3.1. Que el día 25 de febrero del 2019 a las 03:30 horas aproximadamente la agraviada BLANCA YANETH SALDAÑA LESCANO en compañía de su amigo conocido como Luis Enrique, y otros dos amigos de este último entre ellos la persona identificada como MANUEL JESÚS MUÑOS (<i>quien hasta el momento no ha sido plenamente identificado toda vez que no se encuentra registrado en la base de datos de RENIEC</i>), tras haber estado realizando labores en la Discoteca Bass de Chiclayo, empezaron a libar licor permaneciendo en dicha discoteca hasta las 05:00 horas para posteriormente pasar a retirarse del local, se despiden de Luis Enrique y luego se dirigen hasta el cuarto alquilado de la agraviada, ubicado en la Mz. R Lote 12 Urb. Los Sauces -Chiclayo. Una vez en el interior del cuarto de la agraviada, solicitan a la agraviada que la persona de MANUEL JESÚS MUÑOS se quede a dormir en el dormitorio de la agraviada toda vez que se sentía mareado; por lo que la agraviada accede y le brinda otro cuarto, el cual está destinado para su estudio fotográfico. Bajo estas circunstancias, la agraviada al despertar a las 09:00 horas se percata que MANUEL JESÚS MUÑOS había sustraído su celular marca Samsung J7 color blanco, su celular marca HTC color blanco cuya pantalla estaba rota, un celular marca Nokia color verde con teclas (en mal estado de conservación), un celular marca Verykool color blanco, además de un USB; procediendo de inmediato a ingresar a Facebook desde su computadora con la finalidad de ubicar a Luis Enrique, toda vez que esta persona fue quien los presentó.</p> <p>3.2. Posteriormente a ello, a las 11:20 horas aproximadamente, en inmediaciones de la calle Nicolas Cuglievan con Cois de Chiclayo, efectivos policiales intervienen a las personas de HENRY CHARLES SANTISTEBAN SANDOVAL y PAYNER YESMIR SALAZAR CAMPOVERDE, a quienes al realizarles el registro personal se les encontró en poder de HENRY CHARLES SANTISTEBAN SANDOVAL dentro del</p>

	<p>bolsillo derecho de su short un celular marca HTC color blanco con su respectiva batería, un USB color azul y conector USB color negro, mientras que en el bolsillo izquierdo se le encontró un celular marca Very Kool color blanco con su respectivo chip perteneciente a la agraviada, el cual había sido sustraído horas antes, así también, se le encontró en su mano derecha un celular marca Nokia color verde, manifestando el intervenido ser el propietario de dichos bienes.</p> <p>Asimismo, a PAYNER YESMIR SALAZAR CAMPOVERDE se le encontró en la cintura por sus partes íntimas un celular, marca Samsung color blanco con su respectiva batería y chip, además de un celular marca Mobile con su respectiva batería y chip, manifestando en ese momento que los celulares no eran suyos y que se dirigía a venderlos en la cachina.</p> <p>3.3. Finalmente, tras la intervención de los imputados HENRY CHARLES SANTISTEBAN SANDOAL y PAYNER YESMIR SALAZAR CAMPOVERDE, se logró comunicar con la agraviada quien al constituirse a la Comisaría reconoció plenamente los equipos celulares que fueron encontrados en posesión de los intervenidos. Asimismo, durante el desarrollo de las diligencias preliminares, previa declaración de la agraviada, se procedió a realizar la visualización de los equipos celulares marca VeryKool color blanco y Samsung J7 color blanco, apreciándose que contenía información perteneciente a la agraviada, así como fotos y contactos de sus familiares, lo cual ha corroborado que dichos celulares pertenecen a la agraviada, los mismos que le fueron sustraídos del interior de su cuarto por la persona de Manuel Jesús Muños.</p> <p>5.1.- Se les atribuye a los acusados HENRY CHARLES SANTISTEBAN SANDOVAL y PAYNER YESMIR SALAZAR CAMPOVERDE, ser AUTORES de la comisión del delito de RECEPCIÓN, en agravio de BLANCA YANETH SALDAÑA LESCANO; ya que han tenido el dominio del hecho al realizar el hecho imputado.</p> <p>5.2.- AUTOR, es el que ejecuta personal y materialmente el delito, o sea, el que tiene dominio de la acción. En el caso analizado los acusados HENRY CHARLES SANTISTEBAN SANDOVAL y PAYNER YESMIR SALAZAR CAMPOVERDE, han realizado personalmente la conducta delictiva que se les atribuye, teniendo el dominio del hecho, (...)</p>
4271-2020	<p>4.1.- El 29 de setiembre de 2020 a las 16:30 horas aproximadamente, personal policial tomó conocimiento que en el inmueble situado en la Mz E del pueblo joven Los arenales – Pimentel – Chiclayo – Lambayeque, se estaban desmantelando vehículos menores (trimotos), motivo por el cual realizaron vigilancia y advirtieron que, en el interior de la vivienda situada</p>

	<p>en el lote 28 del referido lugar, se hallaba una trimoto y un motor de vehículo junto con diversas herramientas de mecánica.</p> <p>4.2.- Ante ello, los efectivos policiales solicitaron permiso a la acusada Rosa Ángela Vásquez Neira para ingresar a su domicilio, en donde verificaron que, en el ambiente utilizado como cochera, se encontraba una trimoto de pasajero – color azul, con placa de rodaje M9-0013 (no auténtica), marca Wanxin, modelo WX125-A, motor n.º WX157FMIB9041544, serie ilegible y tanque de combustible color azul con holograma de segunda de placa de rodaje 2817-2M – y el motor n.º WX157FMIB9045774 –original, marca Wanxin, modelo 125-A –.</p> <p>4.3.- Al realizar la búsqueda en el sistema Sirdic PNP, los efectivos policiales verificaron que el tanque de combustible de la trimoto encontrado en el domicilio de la acusada Vásquez Neira, presentaba denuncia policial por hurto y recuperación.</p> <p>4.4.- Dicha denuncia fue efectuada por el agraviado José Santos Flores Clavijo el 5 de febrero de 2020, mediante la cual reportó la sustracción de su vehículo menor mototaxi – marca Wanxin, de placa de rodaje 2817-2M, color azul – el cual fue encontrado desmantelado (sin llantas, sin carpas ni tanque de gasolina) al día siguiente de su denuncia.</p> <p>4.5.- Por otro, lado, los efectivos policiales solicitaron información a la SUNARP en línea sobre el motor n.º WX157FMIB9045774 también encontrado en el lugar de los hechos y verificaron que pertenecía al vehículo menor trimoto con placa de rodaje MC-0066 y tras ingresar al sistema Esinpol PNP, dieron cuenta que el mencionado vehículo, presentaba a su vez requisitoria vigente por hurto.</p> <p>4.6.- Siendo así, se tuvo conocimiento que fue el agraviado Segundo Porfirio Atencio Salazar quien denunció la sustracción de su vehículo – marca Wanxin, con placa de rodaje MC-0066, modelo WX125A, color rojo, motor n.º WX157FMIB9045774 –, con fecha 26 de setiembre de 2020.</p> <p>4.7.- Por tales motivos, los agentes policiales trasladaron a la acusada Rosa Ángela Vásquez Neira a la dependencia policial a fin de que realice sus descargos respecto de los hechos investigados, quien indicó que un vecino dejó la trimoto, y su conviviente, el acusado Juan Alfonso Mendoza Mendo, llevó el motor tres o cuatro días antes de su intervención, este ingresó la trimoto a su domicilio, posteriormente la desmanteló, dejó el motor incautado y sacó en sacos de polietileno el chasis, las demás autopartes y accesorios del vehículo .</p>
--	---

	<p>6.1.- El delito que se imputa a los acusados Rosa Ángela Vásquez Neira y Juan Alfonso Mendoza Mendo por los hechos suscitados en agravio de Segundo Porfirio Atencio Salazar y José Santos Flores Clavijo, es el de Receptación regulado en el artículo 194.º del Código Penal con la forma agravada prevista en el numeral 1) del primer párrafo del artículo 195.º del mismo cuerpo normativo.</p> <p>6.2.- En el presente caso, la acusada <u>Rosa Ángela Vásquez Neira</u> guardó las autopartes (tanque de combustible con holograma de segunda con placa de rodaje 2817-2M y motor WX157FMIB9045774 correspondiente al vehículo trimoto con placa de rodaje MC-0066) en uno de los ambientes del interior de su domicilio que servía como cochera y en el que había diversas herramientas de mecánica; y, asimismo, el acusado <u>Juan Alfonso Mendoza Mendo</u> guardó en el domicilio compartido con su conviviente Vásquez Neira las autopartes antes referidas, dado que del acta de intervención policial (folios 7-8) por referencia de Vásquez Neira, dejó el motor en su domicilio y a su vez, ingresó la trimoto que contenía el tanque de combustible, luego la desmanteló y sacó las autopartes y accesorios en sacos de polietileno y el chasis.</p> <p>6.3.- Bienes cuya procedencia delictuosa está acreditada con el acta de denuncia verbal n.º 160 y acta de intervención policial n.º 230 en agravio de José Santos Flores Clavijo (folios 16 y 15) y del acta de denuncia verbal n.º 774 (folio 14) en agravio de Segundo Porfirio Atencio Salazar; siendo que los acusados tenían conocimiento o debían presumir que dichos bienes provenían de un delito.</p>
7370-2019	<p>3.2. Se les imputa a JULIO CESAR AGUINAGA GARCÍA Y JORGE LUIS NAQUICHE CHERO, ser Autores del delito contra el patrimonio en su figura de Receptación Agravada regulado en el artículo 194 concordante con el artículo 195 inciso 1 del Código Penal; en base a los siguientes hechos: <i>“El día 17 de octubre del 2019, luego de haberse producido la sustracción de la batería marca Forte color azul, del mototaxi de placa rodaje 4981-IM, de propiedad de MARÍA ELIZABETH GUEVARA GRANTHON, el acusado JULIO CESAR AGUINAGA GARCÍA, conocedor de la procedencia ilícita de la batería, toda vez que fue testigo del hurto, ayuda a Josué Huertas Samamé a negociarla indicando que tenía un comprador , por lo que se trasladan juntos hasta la calle José Quiñonez N° 09, Sector La Ladrillera, Pucalá y ofrecen en venta a JORGE LUIS NAQUICHE CHERO la batería hurtada por la suma de 30.00 soles”</i>.</p> <p>Ante ello, el acusado JORGE LUIS NAQUICHE CHERO, conforme lo señala en su declaración al presumir que esta batería había sido hurtada, toda vez que le ofrecieron a un precio bajo y por qué conocía que sus vendedores</p>

	<p>no manejaban mototaxi, decide adquirir la batería cancelando la suma de 30.00 soles.</p> <p>Posteriormente, al percatarse la persona de Edward Andrés Samamé Silva de la sustracción de la batería procede a denunciar el hecho ilícito iniciándose un patrullaje policial por la zona, logrando ubicar a la persona de Jorge Luis Naquiche Chero en la puerta de su domicilio, quien acepta haber adquirido de la persona de Julio César Aguinaga García y Josue Jhonatan Huertas Samamé la batería color azul, marca Forte, en regular estado de conservación por el precio de S/30.00, la cual ya la había instalado en su vehículo de placa de rodaje 2057-IM. Finalmente, se logró intervenir a la persona de Julio César Aguinaga García quien aceptó haber vendido la batería color azul, marca Forte, en regular estado de conservación, la misma que fue sustraída por Josué Jhonatan Huertas Samamé del vehículo de placa de rodaje 4981-IM.</p> <p>7. Respecto a los hechos atribuidos a los acusados JULIO CESAR AGUINAGA GARCÍA, por haber ayudado a negociar un bien de procedencia delictuosa, y a JORGE LUIS NAQUICHE CHERO, el haber adquirido un bien de procedencia delictuosa, en nuestro ordenamiento jurídico penal sustantivo se ha previsto el tipo penal de RECEPCIÓN, tipificado en el Artículo 194° del Código Penal, (...) Con la AGRAVANTE prevista en el inciso 1 del artículo 195° del mismo cuerpo normativo.</p>
--	---

Numero de Carpeta Fiscal	Criterios jurídicos - dogmáticos para calificar el tipo penal de receptación respecto al incumplimiento del deber de presumir la procedencia ilícita del bien
4129-2020	<p>SÉPTIMO: En cuanto al análisis de los actuados, se le imputaría al investigado DARIO MUÑOZ LIVAQUE la presunta comisión del delito de receptación, toda vez que habría ayudado a guardar o esconder el vehículo menor - mototaxi de placa de rodaje 6073FM, de propiedad de Juan Francisco Peralta Palomino, el cual le habría sido hurtado el día 31 de diciembre de 2020, conforme al Dictamen Pericial de Identificación Vehicular N° 17-2021, esto mientras realizaba su labor de llantero dentro de su inmueble ubicado en la calle San Martín S/N AA.HH. Cristo Vive - Chiclayo. Al respecto desde la perspectiva de la imputación objetiva a la conducta se contempla conceptos como el riesgo no permitido, el principio de confianza, la prohibición de regreso y la competencia de la víctima, que funcionan como filtros para determinar si una conducta es susceptible de ser considerada típica. <u>Para la prohibición de regreso el carácter conjunto de un comportamiento no puede imponerse de modo</u></p>

	<p><u>unilateral-arbitrario, por tanto, quien asume con otro un comportamiento que, de modo estereotipado, es inocuo, no quebranta su rol como ciudadano, este filtro excluye la imputación objetiva del comportamiento, pues la conducta de la persona inicial que es aprovechada por una segunda a un hecho delictivo, es llevada de acuerdo a su rol.</u></p> <p>OCTAVO: En ese sentido, conforme al supuesto del tipo penal de receptación, de los actuados no se verifica algún elemento periférico de carácter objetivo que acredite que el investigado DARIO MUÑOZ VAQUEZ haya tenido pleno conocimiento que el vehículo de placa de rodaje 6073FM, el cual fue encontrado dentro de su enllantadora, tenía procedencia ilícita; por el contrario, <u>la actitud del investigado, no muestra negativa alguna a la intervención policial y autorizando el ingreso a su enllantadora, hace prever que su conducta se limitó a prestar sus servicios de cochera en su local de trabajo, desconociendo la procedencia ilícita de dicho vehículo. Por lo tanto, su actuar se encuentra dentro del rol que tenía como dueño de una enllantadora sin transgredir sus límites, siendo su conducta neutra en el hecho delictivo, deviniendo en atípica la conducta atribuida al investigado; debiendo, por tanto, disponer el archivo de los actuados.</u></p>
1773-2020	<p>SEXTO: Del análisis de los actuados, se tiene que el día 12 de marzo de 2020, el investigado ANTHONY JAM PIER MIL CÓRDOVA fue intervenido portando un equipo celular marca Huawei con IMEI Físico N° 862789038335472, el cual según el sistema de OSIPTEL se encontraba reportado como sustraído el día 05 de marzo, siendo el único documento que lo incriminaría en el delito de receptación. En ese sentido, <u>no se cuenta con elemento de convicción objetivo que acredite la procedencia delictiva del bien que fuese detectado en la esfera de custodia del receptor, toda vez que para nuestro criterio OSIPTEL informa si los equipos móviles registran como perdidos, robados o recuperados en mérito a un aplicativo informático, el cual no constituye un documento idóneo o suficiente para determinar la procedencia delictiva del bien como sí lo es una denuncia sustentada en una declaración, reconocimiento médico, etc.</u> siendo por ello que <u>este Despacho Fiscal debe disponer el archivo de los actuados, al no existir manera de atribuir objetivamente responsabilidad penal</u>, dada la ausencia de elementos contundentes para formular una imputación penal de base sólida y coherente, que permita construir una “teoría del caso” para sustentar una acusación pública ante el Juez del juzgamiento.</p>
2506-2020	<p>DÉCIMO PRIMERO: En el presente caso, respecto al delito de receptación, se le imputa a ALVITES DIAZ ARTEAGA y ELZER RAMOS ADRIANZEN haber adquirido y comercializado guantes de látex de</p>

	<p>procedencia ilícita. Por lo tanto, de lo recabado en las diligencias preliminares, deberá determinarse si i) los bienes efectivamente tenían procedencia ilícita, y ii) Si los investigados tenían conocimiento o, por lo menos, presumían de la procedencia ilícita de dichos bienes. En ese sentido, conforme a lo recabado en las diligencias preliminares, señaladas en el tercer considerando, no cabe duda que los días 13 y 14 de mayo de 2020, la agraviada Mirella Luisa Cabrera Pereyra mediante engaño fue inducida y mantenida en error, y producto de ello se desprendió de su patrimonio, consistente en equipamiento de bioseguridad, entre ellas, guantes de látex de la marca Family Doctor, los mismos que fueron encontrados en posesión de los investigados, quien incluso aceptaron haberlo adquirido de manera informal, Alvites Díaz Arteaga lo habría adquirido de Elzer Ramos Adrianzen y este último de un sujeto desconocido en la puerta de su local comercial. Por lo tanto, queda claro que los bienes adquiridos y comercializados por los investigados tenían procedencia ilícita; sin embargo, dado el contexto en el que habrían ocurrido los hechos, teniendo en consideración que las actividades económicas informales imperan en nuestro país y aunado a ello que a consecuencia de la pandemia del COVID-19, la informalidad laboral y económica representaba el 90% de sus trabajadores, lo cual significó que muchos de los trabajadores tengan que realizar sus compras y ventas fuera de sus locales sin la emisión de un comprobante de pago o algo por el estilo, siendo este uno de los principales motivos, <u>lo cual alegan los investigados y es de recibo, habría impedido que los investigados tomen conocimiento o presuman que la los bienes adquiridos -guantes de látex-, tengan una procedencia ilícita; lo cual descarta el actuar doloso de los investigados</u>, siendo por tal motivo que debe disponerse el archivo de los actuados respecto al delito de receptación.</p>
2865-2020	<p>SEXTO: Del análisis de los actuados, se tiene que el día 30 de marzo de 2020, el investigado SEBASTIAN RIVAS ALZATE fue intervenido portando un equipo celular marca LG con IMEI 356472082337487, el cual según el sistema de OSIPTEL se encontraba reportado como sustraído el día 20 de mayo de 2018, siendo el único documento que lo incriminaría en el delito de receptación. En ese sentido, <u>no se cuenta con elemento de convicción objetivo que acredite la procedencia delictiva del bien que fuese detectado en la esfera de custodia del receptor</u>, toda vez que para nuestro criterio OSIPTEL informa si los equipos móviles registran como perdidos, robados o recuperados en mérito a un aplicativo informático, el cual no constituye un documento idóneo o suficiente para determinar la procedencia delictiva del bien como sí lo es una denuncia sustentada en una declaración, reconocimiento médico, etc., siendo por ello que <u>este Despacho Fiscal debe disponer el archivo de los actuados, al no existir manera de atribuir objetivamente</u></p>

	<p><u>responsabilidad penal, dada la ausencia de elementos contundentes para formular una imputación penal de base sólida y coherente,</u> que permita construir una “teoría del caso” para sustentar una acusación pública ante el Juez del juzgamiento.</p>
3236-2020	<p>SEGUNDO: De los actuados se tiene que, el día 16 de julio de 2020 a las 18:20 horas en circunstancias que efectivos policiales realizaban patrullaje en la jurisdicción de Chiclayo, lograron divisar, a la altura de la Av. Zarumilla y Vía de Evitamiento, un vehículo menor (mototaxi) sin placa de rodaje, por lo cual procedieron a su intervención, identificando al conductor como Segundo Alejandro Ávila Vargas, quien se encontraba realizando un servicio de transporte a una persona de sexo masculino, el mismo que fue identificado como Danfer Rolando Rivasplata Saucedo, quien portaba un morral marca Nike, color negro, conteniendo un monedero color negro y este a la vez contenía una bolsa plástica transparente, conteniendo en su interior sustancia parduzca pulverulenta, al parecer pasta básica de cocaína. Asimismo, se le encontró dos equipos celulares, uno de ellos marca Samsung con IMEI N° 357617081169666 y el otro de la misma marca con IMEI N° 353459085915296, los cuales al realizar la consulta en el sistema OSIPTEL, estos reportaron como sustraídos el día 18/08/2018 a horas 06:49 y 04/10/2019 a horas 07:28 respectivamente; por lo cual fue puesto a disposición para los fines correspondientes.</p> <p>SEXTO: Del análisis de los actuados, se tiene que el día 16 de junio de 2020, el investigado DANFER ROLANDO RIVASPLATA SAUCEDO fue intervenido portando dos equipos celulares marca Samsung con IMEI N°357617081169666 y N° 353459086915296, los cuales según el sistema de OSIPTEL se encontraban reportados como sustraídos el día 18 de agosto de 2018 y 04 de octubre de 2019, siendo el único documento que lo incriminaría en el delito de receptación. En ese sentido, no se cuenta con elemento de convicción objetivo que acredite la procedencia delictiva del bien que fuese detectado en la esfera de custodia del receptor, toda vez que para nuestro criterio OSIPTEL informa si los equipos móviles registran como perdidos, robados o recuperados en mérito a un aplicativo informático, <u>el cual no constituye un documento idóneo o suficiente para determinar la procedencia delictiva del bien como sí lo es una denuncia sustentada en una declaración, reconocimiento médico, etc. como sí lo es una denuncia sustentada en una declaración, reconocimiento médico, etc.,</u> siendo por ello que <u>este Despacho Fiscal debe disponer el archivo de los actuados, al no existir manera de atribuir objetivamente responsabilidad penal, dada la ausencia de elementos contundentes para formular una imputación penal de base sólida y coherente,</u> que permita construir una “teoría del caso” para sustentar una acusación pública ante el Juez del juzgamiento.</p>

Numero de Carpeta Fiscal	Criterios jurídicos - dogmáticos para calificar el tipo penal de receptación respecto al incumplimiento del deber de presumir la procedencia ilícita del bien
2556-2019	<p>5. En el presente caso, según el acta de intervención policial se describe textualmente “se intervino en actitud sospechosa en intersecciones del Santuario, sin embargo no se aprecia de mayores circunstancias que se sustenten en elementos objetivos en la detención del “sospechoso”, toda vez el motivo de la detención no debe ser meramente subjetiva, sino que el personal policial para que efectúe el registro personal debe ser como consecuencia de búsquedas de pruebas relacionado con un hecho delictivo concreto, y por tanto el registro consecuente del mismo debe seguir las reglas establecidas en el artículo 210° del Código Procesal Penal es decir que existan “fundadas razones” de que tiene en su poder elementos delictivos, lo que ha sucedido en el presente caso.</p> <p>6. Por otro lado, el delito de receptación requiere para su configuración que el sujeto activo tenga conocimiento de la procedencia ilícita del bien que se le incauta, en el caso en concreto no se puede establecer que el imputado haya tenido conocimiento antes de la intervención, que el bien incautado a su persona tenía procedencia ilícita, por lo que no se cumple con lo requerido para su configuración.</p> <p>7. En este contexto, tenemos que si bien es cierto se produjo la incautación del equipo (01) celular de marca SAMSUNG, color negro, modelo J2 PRO, una (01) batería operativa, una (01) memoria SD 8GB , IMEI 1: 353501090680075, haciendo las consultas correspondientes dicho equipo era de procedencia ilegal según el OSIPTEL; también es que, no se ha recabado ningún elemento de convicción que permita establecer que el referido bien mueble tenga una procedencia delictuosa (hecho punible como antecedente), <u>es decir, no se ha logrado acreditar, durante la investigación preliminar, que el referido equipo de telecomunicación esté en poder del investigado como consecuencia de una adquisición ilegal a uno o varios sujetos desconocidos que se dediquen a cometer delitos contra el Patrimonio</u> (hurtos, robos, apropiaciones ilícitas, etc), por lo que objetivamente no se configura el ilícito penal denunciado.</p>
2147-2020	<p>1.1.- El 6 de agosto de 2020 a las 18:00 horas aproximadamente, personal policial realizó un operativo de prevención en la intersección de la avenida Fernando Belaúnde Terry y la calle 30 de agosto – Chiclayo – Chiclayo – Lambayeque, cuando intervinieron al denunciado Walter Agip Sánchez, quien contaba con una requisitoria vigente ordenada por la Corte Superior de Justicia del Callao.</p>

	<p>1.2.- En el momento en el que los efectivos policiales registraron al investigado Agip Sánchez, lo encontraron en posesión del equipo celular SAMSUNG con IMEI n.º 357188106565494, el cual figura como sustraído desde el 19 de septiembre de 2019 en el sistema de consulta proporcionado por OSIPTEL.</p> <p>4.7.- En el presente caso se advierte la existencia de la consulta web del IMEI n.º 357188106565494 (folio 9), en la que se aprecia que dicho IMEI figura como sustraído desde el 18 de septiembre de 2019; sin embargo, no se señala quien es el propietario de este bien, asimismo, también se requiere recibir la declaración de éste para saber cuáles fueron las circunstancias en la que se produjo la sustracción del equipo celular, ello con la finalidad de determinar si existe o no existe delito.</p> <p>4.8.- Por tanto, al no haberse identificado a la víctima del presunto delito cometido por el investigado, así como tampoco haber podido establecer la procedencia delictiva del bien; es por lo que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 321.º del Código Penal, corresponde disponer el archivo provisional de la investigación.</p>
4798-2019	<p><u>SEGUNDO:</u> Conforme a los actuados se tiene que el día 12 de junio de 2019 a las 11:00 horas en circunstancias que efectivos policiales realizaban patrullaje por inmediaciones del Pueblo Joven Santo Toribio de Mogrovejo de Chiclayo, intervinieron a la persona identificada como EDUARDO CABRERA HOYOS, a quien se le solicitó su equipo celular color blanco marca Blackberry, con IMEI N° 359728050797037, procediendo a verificar su procedencia en el sistema de OSIPTEL dando como resultado, positivo para robado con fecha 05 de junio de 2018 a horas 07:17 P.M.; por lo que fue puesto a disposición.</p> <p><u>QUINTO:</u> Del análisis de los actuados, se tiene que la presente investigación sería en base a la intervención de la persona de Eduardo Cabrera Hoyos toda vez que al ser intervenido y al solicitarle su teléfono celular este facilitó a los efectivos policiales, quienes al realizar la consulta a través del sistema de OSIPTEL dicho celular dio positivo siendo reportado por la empresa Movistar; sin embargo, de los actuados se advierte la ausencia de elementos de convicción para acreditar, fuera de toda duda, que el investigado haya adquirido dicho teléfono celular con conocimiento que era de procedencia delictuosa. Asimismo, no existen elementos de convicción que conlleven a determinar que el investigado debía presumir que el teléfono celular incautado provenía de un delito. Si bien, del acta de intervención policial, se advierte que al realizar la consulta ante el sistema de OSIPTEL, dicho equipo celular dio positivo, este medio no resulta suficiente para asegurar que los equipos celulares hayan sido reportado</p>

	<p>como secuencia de un hecho delictivo, pues, también podría tratarse de un bien extraviado, máxime si no se cuenta con agraviado alguno que nos permita determinar si el bien le fue despojado a consecuencia de un hecho delictivo; <u>siendo así y al no haberse acreditado que el equipo celular haya provenido de un hecho delictivo ni menos que el investigado haya tenido conocimiento que provenía de un hecho delictivo se debe proceder al archivo de los actuados.</u></p>
3374-2019	<p><u>SEXTO:</u> Del análisis de la presente investigación, se tiene que, se le imputa al investigado Angello Antony Ferreccio Ojeda, la presunta comisión de delito de Receptación, toda vez que con fecha 06 de febrero de 2019 fue intervenido conduciendo el vehículo menor de placa de rodaje 8684-4M, la misma que estaba reportaba como hurtada con fecha 14 de agosto de 2018, conforme a la denuncia interpuesta por Luisin Andre Pastor Ruiz. Sin embargo, de las diligencias realizadas se ha llegado a determinar que no concurren los presupuestos del tipo penal descrito, toda vez, que si bien existe una denuncia interpuesta por Luisin Andre Pastor Ruiz por haber sido presuntamente víctima de hurto de su vehículo menor de placa de rodaje 8684-4M el 14 de agosto de 2018, esta denuncia se habría realizado debido a las papeletas impuestas al investigado Angello Antony Ferreccio Ojeda, las mismas que afectaban a la persona de Segundo Demetrio Pastor Cerna por ser quien figuraba como propietario ya que nunca se llegó a realizar la transferencia por la compraventa de dicho vehículo. Asimismo, del estudio de las declaraciones del investigado Angello Ferreccio y del testigo Jeinner Vásquez, de la denuncia interpuesta por el investigado por la pérdida de la tarjeta de propiedad del vehículo presuntamente hurtado y del récord de papeletas impuestas al investigado, se concluye que este último adquirió el vehículo de buena fe a la persona de Jeinner Vásquez por el precio de S/3,000.00, habiendo tenido en posesión dicho vehículo desde abril de 2016, mucho antes de la denuncia interpuesta por Luisin Pastor, reportándola como hurtada. Siendo así, al advertirse que dicho vehículo nunca fue hurtada, sino vendida por Luisin Andre Pastor Ruiz a la persona de Jeinner Vásquez Chimpen y éste luego la vendió al investigado, se concluye que el bien adquirido por el investigado no provenía de un hecho ilícito, requisito indispensable para la comisión del delito en comento; debiendo disponerse el archivo de todo lo actuado por los fundamentos antes expuestos.</p>

Conforme se puede apreciar en el cuadro precedente, en el distrito fiscal de Lambayeque, existe una tendencia a disponerse el archivo de las investigaciones, basándose en la ausencia o insuficiencia de elementos de convicción de cargo, que permitan asumir objetivamente (sospecha reveladora) la responsabilidad penal del

investigado, respecto a la “tenencia ilícita de celulares” que han sido reportados como hurtados, robados o perdidos, por cuanto, a criterio de la fiscalía, “OSIPTTEL informa si los equipos móviles registran como perdidos, robados o recuperados en mérito a un aplicativo informático, el cual no constituye un documento idóneo o suficiente para determinar la procedencia delictiva del bien como sí lo es una denuncia por lesiones sustentada en una declaración, reconocimiento médico, etc.”.

Por otro lado, se puede apreciar que la fiscalía al momento de realizar sus análisis jurídico-dogmático, aplica correctamente la prohibición de regreso, por cuanto, tienen en cuenta que el investigado, actuó conforme a su rol social, esto es, en cumplimiento de las expectativas sociales exigidas (como un trabajador de un almacén, de una cochera, de una playa de estacionamiento, entre otros), y, a pesar ello ha contribuido con la realización de un ilícito penal (receptación), sin embargo, ante los ojos de la “imputación objetiva”, su conducta es neutral o estereotipada, no mereciendo un “reproche penal”, y consecuentemente una sanción penal.

5.1.5.SOBRE EL QUINTO OBJETIVO: Proponer criterios jurídicos - dogmáticos para imputar correctamente el delito de receptación, en los casos en que el sujeto activo tenía el deber de presumir la procedencia ilícita del bien.

Para proponer los criterios jurídicos - dogmáticos para imputar correctamente el delito de receptación, en los casos en que el sujeto activo tenía el deber de presumir la procedencia ilícita del bien, es necesario realizar un análisis práctico sobre el incumplimiento de este deber exigidos en el tipo penal de receptación, en relación a determinadas categorías de la imputación objetiva (principio de confianza y prohibición de regreso) y subjetiva (dolo – error de tipo), considerando adecuado hacerlo desde el punto de vista normativista.

A. En virtud de la aplicación del principio de confianza, ¿Se podría exonerar de responsabilidad penal cuando se ha incumplido el deber de presumir la procedencia ilícita al momento de adquirir, recibir en donación o en prenda o guardar un bien, como lo exige el tipo penal de receptación para su configuración?

Como ya se ha precisado precedentemente, las personas constantemente tienen a interrelacionarse e interactuar entre ellas mismas, sobre la base de un mínimo de confianza. Cada persona en virtud de su “rol social” como ciudadano o por su “status cualificado”, tiene que cumplir determinados deberes (generales o especiales). En ese sentido, cada persona responde por los actos propios de su “rol social”, por ello, cada individuo no se preocupa de controlar los posibles riesgos que puedan producir los demás.

El principio de confianza, está basado en que la persona confía en que los demás actúen conforme a la norma de cuidado (deberes de cuidado); esto es, el ciudadano racional confía en que los demás se comporten conforme al ordenamiento jurídico, así como él. Por ello, en el principio de confianza se habla de “expectativas sociales”, las cuales son esperadas por los demás en virtud del rol social que se desempeña (taxista, albañil, profesor, policía, médico, juez, etc.).

Por lo tanto, si no se confiara en el accionar de los demás, las normas carecerían de sentido, pues una de sus principales funciones es orientar o modular la conducta de las personas haciendo predecible la conducta de los terceros (Maraver Gomez, 2011, pág. 40). Se espera que las demás personas actúen conforme a los lineamientos jurídicos dispuestos por las normas vigentes, es decir, que actúen de acuerdo a lo jurídicamente permitido, sin vulnerar la norma vigente.

Para poder responder esta interrogante de manera práctica es necesario formular los siguientes casos:

- i. “A” compra un televisor a “B”, de manera consensual, sin que exista de por medio un comprobante de pago que acredite la titularidad o propiedad del bien. Posteriormente es intervenido por efectivos policiales, manifestándole que posee un bien robado.

En este caso, se podría sostener que “A” compró el televisor confiando que “B” es el titular, es decir, confiando que “B” está actuando conforme al ordenamiento jurídico. Sin embargo, la excepcionalidad radicaría por la presencia de “circunstancias especiales”, como es el caso de no entregarse o solicitarse un comprobante de pago (boleta de venta o factura electrónica), que acredite la

transferencia o titularidad del bien (venta lícita), entonces, no se puede esperar que el otro vaya a cumplir conforme a los deberes (generales: respetar la norma) que emana de su rol como ciudadano fiel al ordenamiento jurídico. Por lo tanto, no se podría exonerar de responsabilidad penal a “A”, por cuanto al conocer la existencia de circunstancias que hacen sospechar o dudar la veracidad lícita del bien, “debió presumir” que la procedencia del televisor es delictuosa.

- ii. “A” compra un celular en una pequeña tienda de la “Feria Balta”, por ello, se le entrega un comprobante de pago (boleta o factura). Sin embargo, el celular adquirido es robado, así mismo, el comprobante de pago es falso (el RUC no corresponde a la razón social, denominación o nombre del emisor), esto es, los datos consignados por el vendedor (emisor) en la boleta de venta son falsos (no existente en el Registro Único de Contribuyentes).

En el presente caso, sí sería viable la aplicación del principio de confianza, en el aspecto que “A” confía en que “B” en su “rol social de vendedor” le ha vendido un celular de procedencia lícita, ya que lo adquiere de una tienda formal (presumiendo que posee los permisos de funcionamiento necesarios), por ello, se le entrega un comprobante de pago, a pesar que éste sea falso. Es decir, las expectativas sociales que se tiene de “B” en virtud de su “rol social de vendedor”, es que actuara conforme al ordenamiento jurídico (norma penal), no obstante, fueron defraudadas dichas expectativas.

- iii. “A” y “B” son trabajadores de una pequeña tienda dedicada a la venta de celulares, cuyas labores son exclusivamente la venta de estos. Un día de labores se les requiere la documentación necesaria que acredite la propiedad de los celulares, siendo la sorpresa que solo el 70% de estos cuenta con la documentación correspondiente, y el resto figuran como hurtados y robados. Alegando que solo ellos se dedican a venderlos en la misma tienda, siendo el dueño el responsable de haberlos adquirido.

En el presente supuesto, sí sería viable la aplicación del principio de confianza, en cuanto “A” y “B” en su “rol de vendedores” únicamente se limitan a la venta de celulares; siendo el responsable de la adquisición de los celulares el dueño o

el administrador, recayendo sobre estos la responsabilidad de haber adquirido celulares hurtados y robados. Esto responde, al hecho que “A” y “B”, no tienen la obligación de averiguar si el dueño o administrador cumple las formalidades exigidas para la venta de celulares, ya que cada persona responde únicamente por las conductas que se encuentren dentro de su ámbito de competencia (deber general o especial), ya que no forma parte del “rol del ciudadano” controlar todos los posibles riesgos que se puedan originar en la conducta de terceros.

- iv. “A” es el asistente de “B”, cuya función es realizar labores de apoyo o asistencia. Un día de labores, “B” le solicita a “A” que reciba una laptop de tal persona en un determinado lugar, y que posteriormente se la entregue a él. Una vez que “A” recibe la laptop conforme a lo ordenado, antes de llegar a centro de trabajo para entregársela a “B”, es intervenido por personal policial, manifestándole que dicha laptop es hurtada.

En este caso, no se le puede atribuir responsabilidad penal a “A”, por cuanto se “limita a desempeñar su rol de asistente”, cumpliendo lo ordenado por “B”. Por lo tanto, la conducta de “A” no puede ser reprochada penalmente, pues el solo hecho de tener la condición de asistente no constituye una circunstancia relevante a efectos de determinar que haya tenido “capacidad de prever” que lo recibido era de procedencia delictuosa.

B. En virtud de la aplicación de la prohibición de regreso, ¿Se podría exonerar de responsabilidad penal cuando se ha incumplido el deber de presumir la procedencia ilícita al momento de adquirir, recibir en donación o en prenda o guardar un bien, como lo exige el tipo penal de receptación para su configuración?

Para poder responder esta interrogante es necesario formular la siguiente casuística:

- i. “A” es el encargado de supervisar una playa de estacionamiento, cuya labor es registrar las unidades vehiculares que ingresan y salen del aparcamiento. Un día de semana, llega a la playa de estacionamiento “B” en una unidad motorizada (moto lineal) con la finalidad de aparcar por un tiempo determinado, sin embargo, esta unidad vehicular motorizada era robada. Posteriormente, ingresan efectivos

policiales y lo detienen a “A” por haber ocultado un vehículo motorizado robado. Es decir, se le imputa a “A” el delito de receptación agravada.

De acuerdo a lo descrito en el ejemplo, se puede afirmar que: ¿A en cumplimiento de su deber como encargado de la playa de estacionamiento, solo se limitó a registrar la unidad motorizada, desconociendo que era robada, y que su actuar fue utilizado para fines delictivos? En virtud de la prohibición de regreso, podemos sostener que: “La actuación de “A” es socialmente cotidiana, neutral o inocua en el ejercicio de su “rol como supervisor” de una playa de estacionamiento, ya que, este no puede cuestionar o indagar que unidades vehiculares son de procedencia delictuosa o fueron utilizadas para fines delictivos, sino únicamente en virtud de su “rol como supervisor” debe registrar y cuidar las unidades vehiculares que ingresen a la playa de estacionamiento”. Por lo tanto, a pesar que se haya utilizado la conducta de “A” para ocultar una moto robada, este no responderá penalmente, porque su “conducta es neutral o cotidiana carente de sentido delictivo”, a pesar que “B” haya utilizado esta conducta en su beneficio otorgándole sentido delictivo.

5.2. RESULTADOS DE LA VALIDACION DE LAS VARIABLES

Conforme a la discusión realizada en los objetivos plasmados en la investigación, y, los datos obtenidos en las encuestas realizadas; se puede verificar la validez de las variables (independiente y dependiente), con la finalidad de establecer la hipótesis final.

VARIABLE INDEPENDIENTE: Los criterios jurídicos-dogmáticos que utilizan los Fiscales del Distrito Fiscal de Lambayeque para imputar penalmente el delito de receptación.

Conforme a lo desarrollado a lo largo de la investigación realizada, específicamente, al momento de analizar los requerimientos acusatorios recopilados (obtenidos del distrito fiscal de Lambayeque, periodo 2019-2020), se puede apreciar que existe una correcta calificación de los hechos denunciados, en cuanto al delito de receptación. En ese sentido, en el distrito fiscal de Lambayeque los criterios jurídicos - dogmáticos para imputar el tipo penal de receptación, son verificar: i) La existencia de un delito previo, del cual no haya intervenido el investigado, ya sea, en calidad de autor o cómplice; ii) El bien encontrado

en tenencia del investigado es de origen ilícito, esto es, provenga de un delito previo, siendo ello así, es insuficiente un simple reporte de OSIPTEL como elemento de convicción para determinar la posible responsabilidad del investigado (tratándose de equipos móviles o celulares); iii) el investigado tiene conocimiento de la procedencia ilícita del bien, y, a pesar de conocer el origen ilícito del bien, igualmente lo adquiere, recibe, guarda, esconde, vende o ayuda a negociar su venta, la fiscalía para determinar que el propio investigado conocía que estaba adquiriendo un bien ilícito, se basa en la propia declaración testimonial del investigado, ya que, reconoce expresamente conocer la procedencia ilícita del bien, y a pesar de ello, lo adquirió, recibió, guardó, escondió, vendió o ayudó a venderlo, así como por las testimoniales de los efectivos policiales que participaron en la intervención del imputado; iv) Analiza el contexto social de los hechos denunciados, y, en virtud de ello puede deslindar responsabilidad penal mediante la aplicación de los criterios de imputación objetiva (según la perspectiva funcionalista de Jakobs), ya que, existen casos en donde el investigado ha actuado conforme a su rol social, esto es, en cumplimiento de las expectativas sociales exigidas (como un trabajador de un almacén, de una cochera, entre otros), y, a pesar ello ha contribuido con la realización de un ilícito penal (receptación), sin embargo, ante los ojos de la “imputación objetiva”, su conducta es neutral o estereotipada, no mereciendo un reproche penal, y consecuentemente una sanción penal.

Por otro lado, conforme a las encuestas realizadas se obtuvieron los siguientes resultados, precisándose los más relevantes:

- a) Del 100% de los encuestados, el 95% respondió que “SI” considera al “deber de presumir la procedencia delictuosa de un bien” adquirido, recibido en donación o en prenda, así como, guardarlo, esconderlo, venderlo o ayudar a negociar su venta, establecido en el texto normativo del artículo 194 del Código Penal, **tiene como finalidad reforzar la política criminal de la lucha contra los delitos contra el patrimonio**; en cambio, el 5% respondió que “NO” considera al “deber de presumir la procedencia delictuosa de un bien” adquirido, recibido en donación o en prenda, así como, guardarlo, esconderlo, venderlo o ayudar a negociar su venta, establecido en el texto normativo del artículo 194 del Código Penal, tiene como finalidad reforzar la política criminal de la lucha contra los delitos contra el patrimonio.

- b) Del 100% de los encuestados, que el 36% respondió que el “deber de presumir la procedencia ilícita del bien” en el delito de receptación debe ser interpretado desde una concepción psicologicista o una concepción normativista, esto es, cualquier concepción dogmática es admisible para efectos de configurar del delito de receptación, previsto en el art. 194 del C.P.; el 47% respondió que el “deber de presumir la procedencia ilícita del bien” en el delito de receptación debe ser interpretado desde una concepción normativista; el 12% respondió que el “deber de presumir la procedencia ilícita del bien” en el delito de receptación debe ser interpretado desde una concepción psicologicista; y, solo el 5% de los encuestados NO OPINA, si el “deber de presumir la procedencia ilícita del bien” en el delito de receptación debe ser interpretado desde una concepción psicologicista o una concepción normativista.
- c) Del 100% de los encuestados, el 87% respondió que de acuerdo a las circunstancias que rodean el hecho (de adquirir, recibir, guardar, esconder, vender o ayudar a venderlo) “SI” se debe presumir que el bien (adquirido, recibido en donación o en prenda) pueda provenir de un ilícito penal o un delito, conforme a lo establecido en el texto normativo del artículo 194 del Código Penal; en cambio, el 13% respondió que a pesar de las circunstancias que rodean el hecho (de adquirir, recibir, guardar, esconder, vender o ayudar a venderlo) “NO” se debe presumir que el bien (ya sea adquirido, recibido en donación o en prenda, así como, guardarlo, esconderlo, venderlo o ayudar a negociar su venta) puede provenir de un delito, conforme a lo establecido en el texto normativo del artículo 194 del Código Penal.
- d) Del 100% de los encuestados, el 83% respondió que “SI” tienen conocimiento de la existencia de la página de Osiptel para consultar si un equipo celular está registrado como sustraído, a través de la digitación del número de IMEI; en cambio, el 17% respondió que “NO” tienen conocimiento de la existencia de la página de Osiptel para consultar si un equipo celular está registrado como sustraído, a través de la digitación del número de IMEI.
- e) Del 100% de los encuestados, el 65% respondió que todo ciudadano al momento de adquirir un equipo celular en un lugar de dudosa reputación “SI” se debería verificar el IMEI en la página de Osiptel a fin de tener conocimiento si figura como sustraído; en

cambio, el 33% de los encuestados respondió que al momento de adquirir un equipo celular en un lugar de dudosa reputación va “depender del grado de instrucción del ciudadano” verificar el IMEI en la página de Osiptel a fin de tener conocimiento si figura como sustraído; y, tan solo el 2% de los encuestados “NO OPINA”.

- f) Del 100% de los encuestados, el 87% respondió que “SI” es viable la aplicación del error de tipo para eximir el cumplimiento del deber de presumir la procedencia delictuosa del bien, exigido en el texto normativo del artículo 194 del Código Penal; en cambio, el 10% respondió que “NO” es viable la aplicación del error de tipo para eximir el cumplimiento del deber de presumir la procedencia delictuosa del bien, exigido en el texto normativo del artículo 194 del Código Penal; y, tan solo el 3% de los encuestados “NO OPINA”.
- g) Del 100% de los encuestados, el 78% respondió que “SI” se podría exonerar de responsabilidad penal al ciudadano que ha incumplido el deber de presumir la procedencia ilícita mediante la aplicación del principio de confianza; en cambio, el 15% respondió que “NO” se podría exonerar de responsabilidad penal al ciudadano que ha incumplido el deber de presumir la procedencia ilícita mediante la aplicación del principio de confianza; y, tan solo el 7% de los encuestados “NO OPINA”.
- h) Del 100% de los encuestados, el 78% respondió que “SI” se podría exonerar de responsabilidad penal al ciudadano que ha incumplido el deber de presumir la procedencia ilícita mediante la aplicación del principio de prohibición de regreso; en cambio, el 18% respondió que “NO” se podría exonerar de responsabilidad penal al ciudadano que ha incumplido el deber de presumir la procedencia ilícita mediante la aplicación del principio de prohibición de regreso; y, tan solo el 4% de los encuestados “NO OPINA”.

Por lo tanto, conforme a los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a la comunidad jurídica chiclayana (100 encuestados), existe el criterio mayoritario (supera el 75% de los encuestados) de asumir los siguientes postulados: 1) El deber de presumir la procedencia delictuosa de un bien, establecido en el texto normativo del artículo 194° del Código Penal, tiene como finalidad reforzar la política criminal de la lucha contra los delitos contra el patrimonio; 2) De acuerdo a las circunstancias que rodean el hecho (se

realiza en un lugar de dudosa reputación, el precio es exiguo a diferencia del precio comercial en el mercado, el vendedor no entrega comprobantes de pago, entre otros) se debe presumir que el bien adquirido, recibido en donación o en prenda, pueda provenir de un ilícito penal o un delito, conforme a lo establecido en el texto normativo del artículo 194° del Código Penal; 3) Es viable la aplicación del **error de tipo** para eximir el cumplimiento del deber de presumir la procedencia delictuosa del bien, exigido en el texto normativo del artículo 194° del Código Penal; 4) Se podría exonerar de responsabilidad penal al ciudadano que ha incumplido el deber de presumir la procedencia ilícita mediante la aplicación del **principio de confianza**; 5) Se podría exonerar de responsabilidad penal al ciudadano que ha incumplido el deber de presumir la procedencia ilícita mediante la aplicación del principio de **prohibición de regreso**.

Por otro lado, existe un criterio dividido o fraccionados en la comunidad jurídica encuestada, en como debe ser interpretado el “deber de presumir la procedencia ilícita del bien” en el delito de receptación, ya sea desde una concepción psicologicista o una concepción normativista.

También, es necesario indicar que se hicieron determinadas preguntas generales sobre el delito de receptación, orientadas a conocer su opinión como ciudadano, obteniéndose los siguientes resultados: 1) Se considera a la receptación como una actividad tan perniciosa para la sociedad, al igual que el hurto y robo; 2) Se considera que la receptación de bienes ilícitos proviene principalmente de delitos patrimoniales, tales como el hurto, robo, estafa, apropiación ilícita, entre otros; 3) Se considera necesario los dos supuestos establecidos en el texto normativo del artículo 194 del Código Penal, para la configuración del delito de receptación; 4) Tienen conocimiento de la existencia de la página de Osiptel para consultar si un equipo celular está registrado como sustraído, a través de la digitación del número de IMEI; 5) Todo ciudadano al momento de adquirir un equipo celular en un lugar de dudosa reputación debería verificar el IMEI en la página de Osiptel a fin de tener conocimiento si figura como sustraído.

VARIABLE DEPENDIENTE: Correcta fundamentación de la imputación penal en el requerimiento acusatorio, respecto al deber de presumir la procedencia ilícita del bien como elemento subjetivo necesario para la configuración del tipo penal de receptación,

conforme a los lineamientos jurídicos de la Teoría del Delito y de la Imputación Penal.

Considero que para imputar correctamente el deber de presumir la procedencia ilícita del bien como elemento subjetivo necesario para la configuración del tipo penal de receptación, conforme a los lineamientos jurídicos de la Teoría del Delito y de la Imputación Penal, se debe tener en cuenta los siguientes criterios jurídicos-dogmáticos: Primero se debe determinar si los hechos denunciados (receptación de un bien) tienen relevancia jurídica penal, y para ello, en prima facie se debe realizar el juicio de imputación objetiva y subjetiva, y, posteriormente, habiéndose superado dicho juicio de imputación, donde se determina la relevancia penal de los hechos, se procederá a tipificar los hechos como un delito de receptación, ya sea, en su tipo base o en alguna de sus formas agravadas, de acuerdo a los elementos de convicción obtenidos.

Es necesario indicar, que cuando se efectuó el juicio de imputación objetiva, para determinar la responsabilidad penal del investigado, necesariamente debe analizarse el contexto social de los hechos, y determinar si procede la aplicación de un “riesgo permitido”, “principio de confianza”, “prohibición de regreso”, o, “competencia de la víctima”. Por ejemplo:

1) “A” compra un televisor a “B”, de manera consensual, sin que exista de por medio un comprobante de pago que acredite la titularidad o propiedad del bien. Posteriormente es intervenido por efectivos policiales, manifestándole que posee un bien robado.

“A” compro un televisor a “B” confiando que es el titular, es decir, confiando que “B” está actuando conforme al ordenamiento jurídico. Sin embargo, la excepcionalidad radicaría en la presencia de “circunstancias especiales”, como es el caso de no entregar o solicitar un comprobante de pago (boleta de venta o factura electrónica), que acredite la transferencia o titularidad del bien (venta lícita), entonces, no se puede esperar que el otro vaya a cumplir conforme a los deberes (generales: respetar la norma) que emana de su rol como ciudadano fiel al ordenamiento jurídico. Por lo tanto, no se podría exonerar de responsabilidad penal a “A”, por cuanto al conocer la existencia de circunstancias que hacen sospechar o dudar la veracidad lícita del bien, “debió presumir” que la procedencia del televisor es delictuosa.

2) “A” compra un celular en una pequeña tienda de la “Feria Balta”, por ello, se le entrega

un comprobante de pago (boleta o factura). Sin embargo, el celular adquirido es robado, así mismo, el comprobante de pago es falso (el RUC no corresponde a la razón social, denominación o nombre del emisor), esto es, los datos consignados por el vendedor (emisor) en la boleta de venta son falsos (no existente en el Registro Único de Contribuyentes).

Siendo ello así, en virtud del contexto social de los hechos, sería procedente la aplicación de un principio de confianza, ya que, “A” confía en que “B” en su “rol social de vendedor” le ha vendido un celular de procedencia lícita, ya que lo adquiere de una tienda formal (presumiendo que posee los permisos de funcionamiento necesarios), por ello, se le entrega un comprobante de pago, a pesar que este sea falso. Es decir, las expectativas sociales que se tiene de “B” en virtud de su “rol social de vendedor”, es que está actuando conforme al ordenamiento jurídico (norma penal), no obstante, fueron defraudadas dichas expectativas.

- 3) “A” y “B” son trabajadores de una pequeña tienda dedicada a la venta de celulares, cuyas labores son exclusivamente la venta de estos. Un día de labores se les requiere la documentación necesaria que acredite la propiedad de los celulares, siendo la sorpresa que solo el 70% de estos cuenta con la documentación correspondiente, y el resto figuran como hurtados y robados. Alegando que solo ellos se dedican a venderlos en la misma tienda, siendo el dueño el responsable de haberlos adquirido.

En el presente supuesto, sí sería viable la aplicación del principio de confianza, ya que, “A” y “B” en su “rol de vendedores” únicamente se limitan a la venta de celulares; siendo el responsable de la adquisición de los celulares el dueño o el administrador, recayendo sobre estos la responsabilidad de haber adquirido celulares hurtados y robados. Esto responde, al hecho que “A” y “B”, no tienen la obligación de averiguar si el dueño o administrador cumple las formalidades exigidas para la venta de celulares, ya que cada persona responde únicamente por las conductas que se encuentren dentro de su ámbito de competencia (deber general o especial), ya que no forma parte del “rol del ciudadano” controlar todos los posibles riesgos que se puedan originar en la conducta de terceros.

- 4) “A” es el asistente de “B”, cuya función es realizar las labores de apoyo que le

encomienda “B”. Un día de labores, “B” le solicita a “A” que reciba una laptop de tal persona en un determinado lugar, y que posteriormente se la entregue a él. Una vez que “A” recibe la laptop conforme a lo ordenado, antes de llegar a centro de trabajo para entregársela a “B”, es intervenido por personal policial, manifestándole que dicha laptop es hurtada.

No se le puede atribuir responsabilidad penal a “A”, por cuanto se “limito a desempeñar su rol de asistente”, cumpliendo lo ordenado por “B”. Por lo tanto, la conducta de “A” no puede ser reprochada penalmente, pues el solo hecho de tener la condición de asistente no constituye una circunstancia relevante a efectos de determinar que se haya tenido “capacidad de prever” que lo recibido era de procedencia delictuosa.

- 5) “A” es el encargado de supervisar una playa de estacionamiento, cuya labor es registrar las unidades vehiculares que ingresan y salen del aparcamiento. Un día de semana, llega a la playa de estacionamiento “B” en una unidad motorizada (moto lineal) con la finalidad de aparcar por un tiempo determinado, sin embargo, esta unidad vehicular motorizada era robada. Posteriormente, ingresan efectivos policiales y lo detienen a “A” por haber ocultado un vehículo motorizado robado. Es decir, se le imputa a “A” el delito de receptación agravada.

De acuerdo a lo descrito en este supuesto caso, en virtud de la prohibición de regreso se puede asumir que: “la actuación de “A” es socialmente cotidiana, neutral o inocua en el ejercicio de su “rol como supervisor” de una playa de estacionamiento, ya que, este no puede cuestionar o indagar qué unidades vehiculares son de procedencia delictuosa o fueron utilizadas para fines delictivos, sino únicamente en virtud de su “rol como supervisor” debe registrar y cuidar las unidades vehiculares que ingresen a la playa de estacionamiento”. Por lo tanto, a pesar que se haya utilizado la conducta de “A” para ocultar una moto robada, éste no responderá penalmente, porque su “conducta es neutral o cotidiana carente de sentido delictivo”, a pesar que “B” haya utilizado esta conducta en su beneficio otorgándole sentido delictivo.

Siendo ello así, en caso se pretenda aplicar la “prohibición de regreso”, se debe corroborar que el investigado en cumplimiento de su rol social (como un trabajador de un almacén, de una cochera, entre otros), ha contribuido con la realización de un ilícito

penal (receptación), sin que tenga conocimiento de su aporte, por ende, su conducta es “neutral o estereotipada”, no mereciendo un “reproche penal”, y consecuentemente una sanción penal.

5.3. CONTRASTACION DE LA HIPOTESIS

Una vez que se ha analizado los resultados obtenidos en virtud de un cuestionario, y, haberse analizado cada requerimiento acusatorio, así como, haberse discutido doctrinariamente cada objetivo. Es necesario, se proceda a elaborar el siguiente cuadro, para fines de contrastar la hipótesis inicialmente formulada:

HIPOTESIS INICIAL	HIPOTESIS FINAL
Si los Fiscales del Distrito Fiscal de Lambayeque al imputar penalmente el delito de receptación, no tienen en cuenta los criterios jurídicos-dogmáticos en que se sustenta el deber de presumir la procedencia ilícita del bien como elemento subjetivo necesario para la configuración de este ilícito penal, entonces, no está correctamente fundamentada la imputación penal en el requerimiento acusatorio conforme a los lineamientos jurídicos de la Teoría del Delito y de la Imputación Penal.	Si los Fiscales del Distrito Fiscal de Lambayeque al imputar penalmente el delito de receptación, tienen en cuenta parcialmente los criterios jurídicos-dogmáticos en que se sustenta el deber de presumir la procedencia ilícita del bien como elemento subjetivo necesario para la configuración de este ilícito penal, entonces, no siempre se realiza una correcta fundamentación de la imputación penal en el requerimiento acusatorio conforme a los lineamientos jurídicos de la Teoría del Delito y de la Imputación Penal.

Conforme se puede apreciar del cuadro comparativo, se concluye que la hipótesis final es diferente a la formulada inicialmente, en la presente investigación, ya que, no todos los Fiscales del Distrito Fiscal de Lambayeque (periodo 2019-2020) para imputar penalmente el incumplimiento del deber de presumir la procedencia ilícita del bien como “elemento subjetivo” necesario para la configuración del delito de receptación, tienen en cuenta los

siguientes criterios jurídicos-dogmáticos: 1) Determinar si los hechos denunciados como receptación de un bien tienen relevancia penal, y para ello, en prima facie se debe realizar el juicio de imputación objetiva y subjetiva; y, 2) Posteriormente, habiéndose superado dicho juicio de imputación, se procederá a realizar un juicio de tipicidad, calificando los hechos en el tipo penal de receptación, ya sea, en su tipo base o en alguna de sus formas agravadas, de acuerdo a los elementos de convicción recabados en la investigación fiscal.

5.4. APOORTE CIENTIFICO

Conforme a lo desarrollado en la presente tesis, es necesario formular una “propuesta” para un “Pleno Jurisdiccional en materia Penal de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque”, donde se debe abordar sobre los criterios jurídicos - dogmáticos que se deben aplicar para imputar el delito de receptación, en cuanto al incumplimiento del “deber de presumir la procedencia ilícita del bien”, conforme a los lineamientos jurídicos de la Teoría del Delito y de la Imputación Penal.

Tema N° 01: El deber de presumir la procedencia ilícita del bien en el delito de receptación conforme a los lineamientos jurídicos de la imputación Penal.

Abarca varios aspectos (dogmáticos y procesales) a tenerse en cuenta, ya que, por un lado, se encuentra los criterios o filtros de “imputación objetiva” e “imputación subjetiva”, en cambio, por otro lado, se encuentra estatuida como un “principio procesal” (imputación necesaria). En ese sentido, el deber de presumir la procedencia ilícita del bien en el delito de receptación conforme a los lineamientos dogmáticos de la imputación objetiva, nos conllevan asumir que “todo ciudadano es responsable de sus acciones o actuaciones realizadas o que va realizar, y, conforme a las expectativas sociales que implica su rol en la sociedad, se le exige cumplir ciertas reglas y normas (prohibitivas y permisivas)”. En el caso, de un ciudadano que pretende “adquirir”, “recibir” – ya sea, como una donación o en prenda – un bien, así como, “guardarlo”, “esconderlo”, “venderlo” o “ayudar a negociar su venta”, en virtud de su “actuar diligente y respetuoso en el cumplimiento de las normas jurídicas”, debe tener en cuenta el “contexto social de su actuar”, esto es, cuáles son las circunstancias (lugar de la entrega, forma de pago, precio comercial del bien, persona quien ofrece el bien, entre otros) en que el ciudadano va a tener que adquirir,

recibir - en donación o en prenda-, así como, guardar, esconder, vender o ayudar a negociar un bien. Incluso, una vez realizado el juicio de imputación, se procedería a efectuar el juicio de tipicidad, donde se podría aplicar un error de tipo (vencible o invencible), cuando un sujeto compra un bien de procedencia delictuosa (delito precedente), creyendo que el vendedor era el titular o propietario, ya que, este le había otorgado la documentación correspondiente (boleta o factura) para acreditar la venta del bien y transferencia de propiedad. En este supuesto, se podría sostener que el comprador actuó bajo un error sobre el elemento normativo “ajeneidad”, porque él pensaba que el bien era del vendedor y lo estaba adquiriendo de manera lícita (conforme a la documentación otorgada); y, en consecuencia, aunque los hechos se encuadren en la descripción típica del delito de receptación, ya que, se adquirió un bien de procedencia delictuosa (hurto, robo, apropiación ilícita), el error del sujeto sobre un elemento normativo excluiría el dolo del autor.

Tema N° 02: Los criterios jurídicos-dogmáticos en que se fundamenta el deber de presumir la procedencia ilícita del bien como elemento subjetivo necesario para la configuración del tipo penal de receptación.

Se requiere aplicar los lineamientos dogmáticos de la “imputación subjetiva”, el cual puede ser interpretado desde una concepción psicologicista o una concepción normativista. Entendiéndose que en la concepción psicologicista, el sujeto debió representarse mentalmente que su acción (adquirir o recibir en donación o en prenda o guarda, así como esconder, vender o ayudar a negociar la venta del bien), podría dar lugar a la comisión de un ilícito penal (receptación), ya que, concurren determinadas circunstancias (se realiza en un lugar de dudosa reputación, el precio es exiguo a diferencia del precio comercial en el mercado, el vendedor no entrega comprobantes de pago, entre otros), que permiten “presumir” o “sospechar” que el bien es de procedencia delictuosa (objeto de un delito precedente), sin embargo a pesar de conocer esta situación, procede a ejecutar su conducta (adquirir, recibir, esconder, vender o ayudar el bien de procedencia ilícita) de manera consciente y voluntaria. En cambio, desde una concepción normativista, el sujeto en razón de su rol social como ciudadano – fiel o respetuoso de la norma penal - , al tener conocimiento de las circunstancias en que se pretende adquirir, recibir en

donación o en prenda o guardar, esconder, vender o ayudar a negociar un bien, son sospechosas o poco confiables (se realiza en un lugar de dudosa reputación, el precio es exiguo a diferencia del precio comercial en el mercado, el vendedor no entrega comprobantes de pago, entre otros), automáticamente debió inferir - a partir de los hechos conocidos - que el bien que se pretende adquirir, recibir en donación o en prenda o guardar, esconder, vender es de procedencia delictuosa. Por lo tanto, las expectativas sociales que se tienen del autor como ciudadano respetuoso de la norma son incumplidas, generando un quebrantamiento a la norma penal. Sin perjuicio de lo concluido, considero que debe interpretarse desde una “concepción normativista”.

Tema N° 3: La aplicación de lineamientos jurídicos dogmáticos de imputación objetiva (principio de confianza y prohibición de regreso), y, subjetiva (dolo), en los casos en que el sujeto activo (autor) incumple el deber de presumir la procedencia ilícita del bien, conforme a lo exigido en el delito de receptación.

Para imputar correctamente el delito de receptación, en los casos en que el sujeto activo tenía el deber de presumir la procedencia ilícita del bien, debe tenerse en cuenta los siguientes criterios: **i) Determinar la existencia de un delito previo**, del cual no haya intervenido el investigado, ya sea, en calidad de autor o cómplice; **ii) Establecer si el bien encontrado en tenencia del investigado es de “origen ilícito”**, esto es, provenga de un delito previo (como un hurto, robo u otro), siendo ello así, es insuficiente un simple reporte de OSIPTEL como elemento de convicción para determinar la posible responsabilidad del investigado (tratándose de equipos móviles o celulares); **iii) el investigado tiene conocimiento de la procedencia ilícita del bien**, y, a pesar de conocer el origen ilícito del bien, igualmente lo adquiere, recibe, guarda, esconde, vende o ayuda a negociar su venta, la fiscalía para determinar que el propio investigado conocía que estaba adquiriendo un bien ilícito, se basa en la propia declaración testimonial del investigado, ya que, reconoce expresamente conocer la procedencia ilícita del bien, y a pesar de ello, lo adquirió, recibió, guardó, escondió, vendió o ayudó a venderlo; **iv) Analizar el contexto social de los hechos denunciados**, y, en virtud de ello puede deslindar responsabilidad penal mediante la aplicación de los criterios de imputación objetiva (según la perspectiva funcionalista de Jakobs), ya que, existe casos en donde el investigado ha actuado conforme

a su rol social, esto es, en cumplimiento de las expectativas sociales exigidas (como un trabajador de un almacén, de una cochera, entre otros), y, a pesar que ello ha contribuido con la realización de un ilícito penal (receptación), sin embargo, ante los ojos de la “imputación objetiva”, su conducta es neutral o estereotipada, no mereciendo un reproche penal, y consecuentemente una sanción penal.

Tratándose de analizar el contexto de los hechos denunciados, para entender mejor la aplicación de este requisito en el ámbito práctico, es necesario formular los siguientes supuestos:

- i. “A” compra un televisor a “B”, de manera consensual, sin que exista de por medio un comprobante de pago que acredite la titularidad o propiedad del bien. Posteriormente es intervenido por efectivos policiales, manifestándole que posee un bien robado.

En este caso, se podría sostener que “A” compro el televisor confiando que “B” es el titular, es decir, confiando que “B” está actuando conforme al ordenamiento jurídico. Sin embargo, la excepcionalidad radicaría por la presencia de “circunstancias especiales”, como es el caso de no entregarse o solicitarse un comprobante de pago (boleta de venta o factura electrónica), que acredite la transferencia o titularidad del bien (venta lícita), entonces, no se puede esperar que el otro vaya a cumplir conforme a los deberes (generales: respetar la norma) que emana de su rol como ciudadano fiel al ordenamiento jurídico. Por lo tanto, no se podría exonerar de responsabilidad penal a “A”, por cuanto al conocer la existencia de circunstancias que hacen sospechar o dudar la veracidad lícita del bien, “debió presumir” que la procedencia del televisor es delictuosa.

- ii. “A” compra un celular en una pequeña tienda de la “Feria Balta”, por ello, se le entrega un comprobante de pago (boleta o factura). Sin embargo, el celular adquirido es robado, así mismo, el comprobante de pago es falso (el RUC no corresponde a la razón social, denominación o nombre del emisor), esto es, los datos consignados por el vendedor (emisor) en la boleta de venta son falsos (no existente en el Registro Único de Contribuyentes).

En el presente caso, sí sería viable la aplicación del principio de confianza, en el aspecto que “A” confía en que “B” en su “rol social de vendedor” le ha vendido un

celular de procedencia lícita, ya que lo adquiere de una tienda formal (presumiendo que posee los permisos de funcionamiento necesarios), por ello, se le entrega un comprobante de pago, a pesar que este sea falso. Es decir, las expectativas sociales que se tiene de “B” en virtud de su “rol social de vendedor”, es que actuará conforme al ordenamiento jurídico (norma penal), no obstante, fueron defraudadas dichas expectativas.

- iii. “A” y “B” son trabajadores de una pequeña tienda dedicada a la venta de celulares, cuyas labores son exclusivamente la venta de éstos. Un día de labores se les requiere la documentación necesaria que acredite la propiedad de los celulares, siendo la sorpresa que solo el 70% de estos cuenta con la documentación correspondiente, y el resto figuran como hurtados y robados. Alegando que solo ellos se dedican a venderlos en la misma tienda, siendo el dueño el responsable de haberlos adquirido.

En el presente supuesto, sí sería viable la aplicación del principio de confianza, en cuanto “A” y “B” en su “rol de vendedores” únicamente se limitan a la venta de celulares; siendo el responsable de la adquisición de los celulares el dueño o el administrador, recayendo sobre estos la responsabilidad de haber adquirido celulares hurtados y robados. Esto responde, al hecho que “A” y “B”, no tienen la obligación de averiguar si el dueño o administrador cumple las formalidades exigidas para la venta de celulares, ya que cada persona responde únicamente por las conductas que se encuentren dentro de su ámbito de competencia (deber general o especial), ya que no forma parte del “rol del ciudadano” controlar todos los posibles riesgos que se puedan originar en la conducta de terceros.

- iv. “A” es el asistente de “B”, cuya función es realizar labores de apoyo o asistencia. Un día de labores, “B” le solicita a “A” que reciba una laptop de tal persona en un determinado lugar, y que posteriormente se la entregue a él. Una vez que “A” recibe la laptop conforme a lo ordenado, antes de llegar a centro de trabajo para entregársela a “B”, es intervenido por personal policial, manifestándole que dicha laptop es hurtada.

En este caso, no se le puede atribuir responsabilidad penal a “A”, por cuanto se “limito a desempeñar su rol de asistente”, cumpliendo lo ordenado por “B”. Por lo tanto, la

conducta de “A” no puede ser reprochada penalmente, pues el solo hecho de tener la condición de asistente no constituye una circunstancia relevante a efectos de determinar que haya tenido “capacidad de prever” que lo recibido era de procedencia delictuosa.

- v. “A” es el encargado de supervisar una playa de estacionamiento, cuya labor es registrar las unidades vehiculares que ingresan y salen del aparcamiento. Un día de semana, llega a la playa de estacionamiento “B” en una unidad motorizada (moto lineal) con la finalidad de aparcar por un tiempo determinado, sin embargo, esta unidad vehicular motorizada era robada. Posteriormente, ingresan efectivos policiales y lo detienen a “A” por haber ocultado un vehículo motorizado robado. Es decir, se le imputa a “A” el delito de receptación agravada.

De acuerdo a lo descrito en el ejemplo, se puede afirmar que: ¿“A” en cumplimiento de su deber como encargado de la playa de estacionamiento, solo se limitó a registrar la unidad motorizada, desconociendo que era robada, y que su actuar fue utilizado para fines delictivos? En virtud de la prohibición de regreso, podemos sostener que: “La actuación de “A” es socialmente cotidiana, neutral o inocua en el ejercicio de su “rol como supervisor” de una playa de estacionamiento, ya que, este no puede cuestionar o indagar qué unidades vehiculares son de procedencia delictuosa o fueron utilizadas para fines delictivos, sino únicamente en virtud de su “rol como supervisor” debe registrar y cuidar las unidades vehiculares que ingresen a la playa de estacionamiento”. Por lo tanto, a pesar que se haya utilizado la conducta de “A” para ocultar una moto robada, éste no responderá penalmente, porque su “conducta es neutral o cotidiana carente de sentido delictivo”, a pesar que “B” haya utilizado esta conducta en su beneficio otorgándole sentido delictivo.

Por lo tanto, mediante la aplicación de los lineamientos jurídicos-dogmáticos expuestos, se mejorará la fundamentación de los requerimientos acusatorios, así como, las disposiciones de archivo, generando una descarga de casos o carpetas fiscales, optimizando las labores fiscales, ya que, cabe la posibilidad de exonerar de responsabilidad penal al ciudadano promedio que a pesar de haber actuado diligentemente al momento de “adquirir”, “recibir” – ya sea, como una donación o en prenda – un bien,

así como, coopera en “guardarlo”, “esconderlo”, “venderlo” o “ayudar a negociar su venta”, resulta que este bien es de procedencia ilícita.

DECISION PLENARIA

En atención a lo expuesto en el presente pleno jurisdiccional en materia penal, los magistrados de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, reunidos de conformidad con lo estipulado en la Ley Orgánica del Poder Judicial, por unanimidad acuerdan aplicar los criterios indicados para efectos de mejorar la administración de justicia en los casos judicializados sobre la segunda modalidad de receptación, tipificado en el artículo 194 del Código Penal.

Publicar esta sentencia plenaria en el Diario Oficial “El Peruano” o el de mayor circulación. Hágase saber.

CONCLUSIONES

1. La estructura típica del delito de receptación, previsto en el artículo 194 del Código Penal, está compuesto por los siguientes elementos: **i) El bien jurídico protegido** es el patrimonio (conforme a la teoría del mantenimiento de la ilicitud, y teoría del aprovechamiento), sin embargo, un cierto sector minoritario considera como bien jurídico a la administración de justicia; **ii) La Tipicidad objetiva**, abarca el **sujeto activo** (puede ser cualquier persona, dado que no se exige una cualidad especial, sin embargo, no debe haber intervenido en el delito precedente, ya, sea como autor o cómplice), **sujeto pasivo** (es aquella persona, que en su condición de titular legítimo del bien, ya sea como propietario o poseedor legítimo, es desposeída como consecuencia de un hecho ilícito precedente), **objeto del delito** (se refiere a un bien de procedencia ilícita, específicamente que provenga de la comisión de un delito contra el patrimonio, ya sea, un robo, hurto, contrabando o apropiación ilícita, entonces, estamos hablando de un “bien mueble ajeno” con valor económico, susceptible de ser sustraído o apoderado por un tercero no legitimado), y, el comportamiento típico (están regidos por los verbos rectores “adquirir, recibir, esconder, guardar, vender, o, ayudar a vender” el bien de procedencia ilícita); **iii) Tipicidad subjetiva** (se refiere al “conocimiento cierto” de la procedencia ilícita del bien que se ha adquirido, recibido - ya sea, en donación o prenda-, guardado, escondido, vendido o ayudado a vender, o, “la presunción” de que el bien obtenido procede de la comisión de un delito contra el patrimonio).
2. El deber de presumir la procedencia ilícita del bien en el delito de receptación conforme a los lineamientos jurídicos de la imputación Penal, abarca varios aspectos (dogmáticos y procesales) a tenerse en cuenta, ya que, por un lado, se encuentra los criterios o filtros de “imputación objetiva” e “imputación subjetiva”, en cambio, por otro lado, se encuentra estatuida como un “principio procesal” (imputación necesaria). En ese sentido, el deber de presumir la procedencia ilícita del bien en el delito de receptación conforme a los lineamientos dogmáticos de la imputación objetiva, nos conllevan asumir que “todo ciudadano es responsable de sus acciones o actuaciones realizadas o que va realizar, y, conforme a las expectativas sociales que implica su rol en la sociedad, se le exige cumplir ciertas reglas y normas (prohibitivas y permisivas)”. En el caso, de un ciudadano que pretende “adquirir”, “recibir” – ya sea, como una donación o en prenda – un bien, así como, “guardarlo”, “esconderlo”, “venderlo” o “ayudar a negociar su venta”, en virtud de su “actuar

diligente y respetuoso en el cumplimiento de las normas jurídicas”, debe tener en cuenta el “contexto social de su actuar”, esto es, cuáles son las circunstancias (lugar de la entrega, forma de pago, precio comercial del bien, persona quien ofrece el bien, entre otros) en que el ciudadano va a tener que adquirir, recibir - en donación o en prenda-, así como, guardar, esconder, vender o ayudar a negociar un bien. Incluso, una vez realizado el juicio de imputación, se procedería a efectuar el juicio de tipicidad, donde se podría aplicar un error de tipo (vencible o invencible), cuando un sujeto compra un bien de procedencia delictuosa (delito precedente), creyendo que el vendedor era el titular o propietario, ya que, este le había otorgado la documentación correspondiente (boleta o factura) para acreditar la venta del bien y transferencia de propiedad. En este supuesto, se podría sostener que el comprador actuó bajo un error sobre el elemento normativo “ajeneidad”, porque él pensaba que el bien era del vendedor y lo estaba adquiriendo de manera lícita (conforme a la documentación otorgada); y, en consecuencia, aunque los hechos se encuadren en la descripción típica del delito de receptación, ya que, se adquirió un bien de procedencia delictuosa (hurto, robo, apropiación ilícita), el error del sujeto sobre un elemento normativo excluiría el dolo del autor.

3. Tratándose de los criterios jurídicos-dogmáticos en que se fundamenta el deber de presumir la procedencia ilícita del bien como elemento subjetivo necesario para la configuración del tipo penal de receptación, se requiere aplicar los lineamientos dogmáticos de la “imputación subjetiva”, el cual puede ser interpretado desde una concepción psicologicista o una concepción normativista. Entendiéndose que en la concepción psicologicista, el sujeto debió representarse mentalmente que su acción (adquirir o recibir en donación o en prenda o guarda, así como esconder, vender o ayudar a negociar la venta del bien), podría dar lugar a la comisión de un ilícito penal (receptación), ya que, concurren determinadas circunstancias (se realiza en un lugar de dudosa reputación, el precio es exiguuo a diferencia del precio comercial en el mercado, el vendedor no entrega comprobantes de pago, entre otros), que permiten “presumir” o “sospechar” que el bien es de procedencia delictuosa (objeto de un delito precedente), sin embargo a pesar de conocer esta situación, procede a ejecutar su conducta (adquirir, recibir, esconder, vender o ayudar el bien de procedencia ilícita) de manera consciente y voluntaria. En cambio, desde una concepción normativista, el sujeto en razón de su rol social como ciudadano – fiel o respetuoso de la norma penal -, al tener conocimiento de las circunstancias en que se pretende adquirir, recibir en donación o en

prenda o guardar, esconder, vender o ayudar a negociar un bien, son sospechosas o poco confiables (se realiza en un lugar de dudosa reputación, el precio es exiguuo a diferencia del precio comercial en el mercado, el vendedor no entrega comprobantes de pago, entre otros), automáticamente debió inferir - a partir de los hechos conocidos - que el bien que se pretende adquirir, recibir en donación o en prenda o guardar, esconder, vender es de procedencia delictuosa. Por lo tanto, las expectativas sociales que se tienen del autor como ciudadano respetuoso de la norma son incumplidas, generando un quebrantamiento a la norma penal. Sin perjuicio de lo concluido, considero que debe interpretarse desde una “concepción normativista”.

4. Actualmente, los Fiscales del Distrito Fiscal de Lambayeque ante los casos de receptación, tienen la tendencia de disponer el archivo de las investigaciones, basándose en la ausencia o insuficiencia de elementos de convicción de cargo, que permitan asumir objetivamente (sospecha reveladora) la responsabilidad penal del investigado, respecto a la “tenencia ilícita del bien (generalmente celulares)” que han sido reportados como hurtados, robados o perdidos, sin realizar tampoco mayores diligencias. En ese sentido, a criterio de la fiscalía, el reporte de OSIPTEL no constituye un “documento idóneo o suficiente” para determinar la procedencia delictiva del bien como sí lo sería una denuncia sustentada en una declaración; no obstante, respecto a los casos archivados por receptación de celulares (donde no saben los datos del agraviado), cabe señalar que, la Fiscalía no dispone -antes del Archivo ni mucho menos en la misma Disposición de Archivo- que se oficie a OSIPTEL a fin de solicitar los datos del titular del equipo celular según el número de IMEI, y así identificar al agraviado, lo cual permitiría la devolución del equipo celular a su propietario, y a la vez podría conllevar a una posible reapertura del caso a fin de recabar la declaración de dicho titular para que brinde mayores detalles sobre la sustracción de dicho equipo celular y si reconoce al investigado por el delito de receptación como la persona que participó en el hecho ilícito, y de ser afirmativa la respuesta, fiscalía podría reformular el tipo penal por el de hurto, robo, apropiación ilícita, etc, según corresponda en cada caso concreto o derivar el caso al Fiscal que previno en caso de existir una denuncia primigenia. Por otro lado, se puede apreciar que la fiscalía al momento de realizar su análisis jurídico-dogmático, si ha realizado un correcto juicio de imputación objetiva, específicamente en la aplicación de la “prohibición de regreso”, por cuanto, ha tenido en cuenta que el investigado, actuó conforme a su “rol social”,

esto es, en cumplimiento de sus “deberes o las expectativas sociales exigidas (como un trabajador de un almacén, de una cochera, entre otros)”, sin embargo, a pesar ello ha contribuido con la realización de un ilícito penal (receptación de un bien).

5. Se propone que los criterios jurídicos - dogmáticos para imputar correctamente el delito de receptación, en los casos en que el sujeto activo tenía el deber de presumir la procedencia ilícita del bien, sería mediante un análisis práctico sobre el incumplimiento de este deber exigidos en el tipo penal de receptación, en relación a determinadas categorías de la imputación objetiva (principio de confianza y prohibición de regreso) y subjetiva (dolo – error de tipo), considerando adecuado hacerlo desde el punto de vista normativista.

RECOMENDACIONES

1. Se recomienda para imputar correctamente el delito de receptación, en los casos en que el sujeto activo tenía el deber de presumir la procedencia ilícita del bien, la aplicación de lineamientos jurídicos dogmáticos de imputación objetiva (principio de confianza y prohibición de regreso), y, subjetiva (dolo). En ese sentido, se mejorará la fundamentación de los requerimientos acusatorios, así como, las disposiciones de archivo, generando una descarga de casos o carpetas fiscales, optimizando las labores fiscales, ya que, se podría exonerar de responsabilidad penal al ciudadano promedio que a pesar de haber actuado diligentemente al momento de “adquirir”, “recibir” – ya sea, como una donación o en prenda – un bien, así como, coopera en “guardarlo”, “esconderlo”, “venderlo” o “ayudar a negociar su venta”, resulta que este bien era de procedencia ilícita.
2. Se recomienda para imputar correctamente el delito de receptación, en los casos en que el sujeto activo tenía el deber de presumir la procedencia ilícita del bien, tener en cuenta los siguientes criterios: **i) Determinar la existencia de un delito previo**, del cual no haya intervenido el investigado, ya sea, en calidad de autor o cómplice; **ii) Establecer si el bien encontrado en tenencia del investigado es de “origen ilícito”**, esto es, provenga de un delito previo (como un hurto, robo u otro), siendo ello así, es insuficiente un simple reporte de OSIPTEL como elemento de convicción para determinar la posible responsabilidad del investigado (tratándose de equipos móviles o celulares); **iii) el investigado tiene conocimiento de la procedencia ilícita del bien**, y, a pesar de conocer el origen ilícito del bien, igualmente lo adquiere, recibe, guarda, esconde, vende o ayuda a negociar su venta, la fiscalía para determinar que el propio investigado conocía que esta estaba adquiriendo un bien ilícito, se basa en la propia declaración testimonial del investigado, ya que, reconoce expresamente conocer la procedencia ilícita del bien, y a pesar de ello, lo adquirió, recibió, guardo, escondió, vendió o ayudo a venderlo; **iv) Analizar el contexto social de los hechos denunciados**, y, en virtud de ello puede deslindar responsabilidad penal mediante la aplicación de los criterios de imputación objetiva (según la perspectiva funcionalista de Jakobs), ya que, existe casos en donde el investigado ha actuado conforme a su rol social, esto es, en cumplimiento de las expectativas sociales exigidas (como un trabajador de un almacén, de una cochera, entre otros), y, a pesar que ello ha contribuido con la realización de un ilícito penal (receptación), sin embargo, ante los ojos de la “imputación objetiva”, su

conducta es neutral o estereotipada, no mereciendo un reproche penal, y consecuentemente una sanción penal.

3. Se recomienda para los casos archivados por receptación de equipos celulares (donde no se saben los datos del agraviado) que, la Fiscalía mínimamente disponga antes del Archivo o en la misma Disposición de Archivo que se oficie a OSIPTEL a fin de solicitar los datos del titular del equipo celular según el número de IMEI, y así identificar al agraviado, lo cual permitiría la devolución del equipo celular a su propietario, y reaperturar el caso a fin de recabar la declaración de dicho titular para que brinde mayores detalles sobre la sustracción de dicho equipo celular y si reconoce al investigado por el delito de receptación como la persona que participó en el hecho ilícito cometido en su agravio, y de ser afirmativa la respuesta, fiscalía podría reformular el tipo penal por el de hurto, robo, apropiación ilícita, etc, según corresponda en cada caso concreto o derivar la investigación al Fiscal que previno en caso de existir una denuncia primigenia, esto con el fin de coadyuvar a la lucha contra la delincuencia por delitos patrimoniales.

BIBLIOGRAFÍA

1. Alcocer Huaranga, W. N. (01 de noviembre de 2015). *Derecho y Cambio Social*. Obtenido de Derecho y Cambio Social: file:///C:/Users/lenovo/Downloads/Dialnet-TeoriaDeLaImputacionObjetivaEnLaJurisprudenciaPeru-5456411%20(2).pdf
2. Almanza Altamirano, F. (2022). *Manual de Teoría del Delito* (Primera ed.). Lima, Perú: San Bernardo Libros Jurídicos E.I.R.L.
3. Armaza Galdós, Jorge; Zavala Toya, Fernando. (1999). *La Decisión Judicial*. Lima: Gaceta Jurídica.
4. Arquíño, M. (2010). *Universidad San Martín de Porres*. Obtenido de Universidad San Martín de Porres: http://www.derecho.usmp.edu.pe/postgrado/doctorado/trabajo_de_investigacion/2010/imputacion_objetiva_expresion_campo_i.pdf
5. Bacigalupo, E. (1996). *Manual de Derecho Penal: Parte General*. Santa Fe de Bogotá: Temis.
6. Bajo Fernández, M. (1991). *Manual de Derecho Penal: Parte Especial*. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces.
7. Bregalia Arias, O. (2003). *Código Penal y Leyes Complementarias* (Vol. II). Buenos Aires: Astrea de A. y R. Depalma.
8. BUSTO RAMÍREZ, J. (1986). *Introducción al Derecho Penal*. Bogotá: Temis.
9. Cancio Mela, M. (2004). *Líneas Básicas de la Teoría de la Imputación Objetiva*. Madrid: Ediciones Jurídicas Cuyo.
10. Carbajar Almerco, Y. (2018). *LA IMPUTACION OBJETIVA COMO FUNDAMENTO DEL CONCEPTO DE DELITO PREVIO DE LA RECEPCION*. Lima: Universidad San Martín de Porres.
11. Caro Jhon, J. A. (2003). *La imputación objetiva en la participación delictiva*. Lima: Grijley.

12. Caro Jhon, J. A. (2006). Imputacion Subjetiva. *VIII Curso Internacional de Derecho Penal: "El Funcionalismo jurídico-penal a debate"* (págs. 01-13). Lima: Grijley.
13. Caro Jhon, J. A. (2012). La Normativización del tipo subjetivo en el ejemplo del dolo. *Derecho & Sociedad*, 22-34. Obtenido de <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/13057/13669>
14. Caro Jhon, J. A. (2014). *Manual Teorico-Practico de la Teoria del Delito*. Lima: ARA EDITORES.
15. Cordoba, F. (2015). Evitabilidad individual y lesividad en la Teoría del ilícito. *Indret Revista para el analisis del derecho*, 01-16. Obtenido de <https://indret.com/wp-content/themes/indret/pdf/1151.pdf>
16. Cornejo Sanchez, M. (2017). *LA IMPOSICION DE LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD Y LA PARTICIPACION EN EL DELITO DE RECEPTACION EN LA PROVINCIA DE CUSCO*. Lima: Universidad Inca Garcilaso de la Vega.
17. CORTINA CADENAS, C. (1992). *Problematica de penalidad en los delitos de receptación y blanqueo de dinero*. Madrid: Estrisas.
18. Davalos Aldas, H. F. (2015). *EL DELITO DE RECEPTACION Y SU CONCEPCION JURIDICO DOCTRINARIA*. Ambato: Universiad Regional Autonoma de los Andes.
19. DEVESA, R. (1988). *Derecho Penal Español: Parte Especial*. Madrid: Dykinson.
20. Dialogo con la Jurisprudencia. (Julio de 2004). *Ejecutoria Suprema del 13 de enero del 2003. R. N 2521-2003, 70*. Lima: Gaceta Jurídica.
21. DIAZ ARANDA, E. (2014). *Lecciones de Derecho Penal: Para el Nuevo Sistema de Justicia en Mexico*. Mexico: Instituto de Investigaciones Juridicas STRAF.
22. Díaz, C. L. (2005). La Teoría de la Imputación Objetiva . En M. B. Gónzales, *Imputación Objetiva y Dogmatica Penal* (pág. 247). Merida: Universidad de los Andes.
23. Española, R. A. (14 de mayo de 2020). *Diccionario de la lengua española*. Obtenido de Diccionario de la lengua española: <https://www.rae.es/drae2001/guardar>
24. Española, R. A. (14 de mayo de 2020). *Diccionario de la lengua Española*. Obtenido de Diccionario de la lengua Española: <https://dle.rae.es/recibir>

25. Española, R. A. (14 de mayo de 2020). *Diccionario de la Lengua Española*. Obtenido de Diccconacion de la Lengua Española: <https://dle.rae.es/donaci%C3%B3n>
26. Española, R. A. (14 de mayo de 2020). *Diccionario de la Lengua Española*. Obtenido de Diccconacion de la Lengua Española: <https://www.rae.es/drae2001/vender>
27. Española, R. A. (14 de mayo de 2020). *Diccionario del Español Jurídico de la RAE*. Obtenido de Diccconacion del Español Jurídico de la RAE: <https://dej.rae.es/lema/adquirir>
28. Española, R. A. (14 de mayo de 2020). *DIRAE*. Obtenido de DIRAE: <https://dirae.es/palabras/esconder>
29. Freyre, L. R. (1986). *Manual de Derecho Penal: Parte Especial* (Vol. III). Lima: Editorial y Distrobuidora de Libros S.A.
30. Frisancho, J. L. (2016). *IMPUTACION OBJETIVA*. Lima: Academia de la Magistratura.
31. García Caveró, P. (2019). *Derecho Penal: Parte General*. Lima: IDEAS SOLUCION EDITORIAL.
32. Garrido Montt, M. (1997). *Derecho Penal: Parte General* (Segunda ed., Vol. II). Santiago: JURIDICA DE CHILE.
33. Gomez Pavon, P. (1988). *El Encubrimiento, artículos 17 y 18 del Código Penal*. Madrid: Trivium.
34. Hans Heinrich Jescheck, Thomas Weigend. (2003). *Tratado de Derecho Penal: Parte General*. Granada: Comares.
35. Hurtado Pozo, José; Prado Saldarriaga, Víctor. (2011). *Manual de Derecho Penal: Parte General I*. Lima.
36. JAKOBS, G. (1996). *La imputacion objetiva en el derecho penal*. Buenos Aires: AD-HOC.
37. JAKOBS, G. (1996). *Sociedad, norma y persona en una teoría de un Derecho Penal funcional*. Madrid: Civitas.
38. JAKOBS, G. (1997). *Criminalización en el estadio previo a la lesión de un bien jurídico*. Madrid: Civitas.

39. Jakobs, G. (1998). *Derecho Penal: Parte General* (Segunda Edición (Traducido por Cuello Contreras y Gonzalo Serrano de Murillo) ed.). Madrid.
40. Jakobs, G. (2007). La imputación jurídico-penal y las condiciones de vigencia de la norma. En G. J. Diaz, *Teoría de sistemas y Derecho penal*. Lima: ARA EDITORES.
41. JAKOBS, Günther; CANCIO, Mela. (2000). *El Sistema Funcionalista del Derecho Penal* (Primera ed.). Lima: Grijley.
42. Jose De la Mata Amaya, Jose Miguel Sánchez Tomás, Rafael Alcácer Guirao. (2007). *Teoría del Delito*. Republica Dominicana: Escuela Nacional de la Judicatura.
43. Lesch, D. V. (1999). *Grundlinien einer funktional en Revision*. Koln.
44. Luzón Peña, D. (2016). *Derecho Penal: Parte General I* (Tercera ed.). Madrid.
45. Maraver Gomez, M. (2011). El Principio de confianza. En F. Perez Alvarez, & L. M. Diaz Cortes, *Temas Actuales de investigación en Ciencias Penales* (págs. 35-58). Salamanca: Universidad de Salamanca.
46. MARTOS NUÑEZ, J. (1985). *El delito de receptación*. Madrid: Montecorvo.
47. Mayer, M. E. (2007). *Derecho Penal: Parte General*. Montevideo: B de F.
48. Mezger, E. (1957). *Tratado de Derecho Penal: Parte General*. Madrid.
49. Mir Puig, S. (2006). *Derecho Penal: Parte General* (Octava ed.). Barcelona: Reppertor.
50. Mir Puig, S. (2008). *Norma de determinación, valoración de la norma y tipo penal. Estudios Penales en Homenaje a Enrique Gimbernat*. Madrid.
51. Miro Llinares, Miguel; Polaino Orts. (2010). *La imputación penal a debate. Una confrontación entre la doctrina de la imputacion Kantiana y la imputacion objetiva en Jakobs*. Lima: Ara Editores.
52. MUÑOZ CONDE, F. (2012). *Derecho Penal: Parte Especial*. Valencia: Tirant Lo Blanch.
53. Muñoz Conde, F. (2021). *Derecho Penal - Parte Especial* (23º ed.). Valencia, España: Tirant Lo Blanch.

54. Muñoz Conde, F., & García Arán, M. (2019). *Derecho Penal - Parte General* (Décima ed.). Valencia, España: Tirant Lo Blanch.
55. Nieves, R. (2013). *Teoría del delito y practica penal. Reflexiones Dogmaticas y Mirada Crítica* . Santo Domingo: Escuela Nacional del Ministerio Publico.
56. NUÑEZ, R. (1979). *Tratado de Derecho Penal*. Buenos Aires: Cordoba.
57. Peña Cabrera Freyre, A. R. (2013). *Derecho Penal: Parte Especial*. Lima: IDEMSA.
58. Peña Cabrera Freyre, A. R. (2015). *Curso Elemental de Derecho Penal - Parte General* (Quinta ed.). Lima, Perú: Ediciones Legales E.I.R.L.
59. Peña Cabrera Freyre, A. R. (2019). *Manual de Derecho Penal: Parte Especial*. Lima: Ediciones Legales.
60. Peña Cabrera Freyre, A. R. (2021). *Delitos contra el Patrimonio* (Tercera ed.). Lima, Perú: Motivensa S.R.L.
61. Pérez Barbera, G. (junio de 2011). *derecho.uba.ar*. Recuperado el 01 de junio de 2020, de *derecho.uba.ar*: <http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/pensar-en-derecho/revistas/1/dolo-como-reproche.pdf>
62. Prado Saldarriaga, V. R. (2021). *Derecho Penal. Parte Especial* (Primera ed.). Perú: Instituto Pacífico S.A.C.
63. Preuss, W. (1974). *Untersuchungen zum erlaubten Risiko im Strafrecht*. Berlin: Tesis Doctoral.
64. Pumpido Ferreiro, C. C. (1955). *Encubrimiento y Receptación*. Barcelona: Bosch S.A.
65. Ragues Valles, R. (1999). *El dolo y su prueba en el proceso penal*. Barcelona: Bosch.
66. Reategui Sanchez, J. (2015). *Manual de Derecho Penal: Parte Especial* (Primera ed.). Lima: Instituto Pacifico.
67. Recurso de Nulidad 1923-2011 Lima Norte, 1923-2011 Lima Norte (SALA PENAL TRANSITORIA 13 de Enero de 2012).
68. Rio, F. G. (2004). *Manual de derecho penal: Parte General y Especial*. Lima: Legales Iberoamericanas E.I.R.L.

69. Rodas Vera, C. E. (2006). La Teoría de la imputación objetiva de la doctrina dominante en los delitos comisivos dolosos de resultado y su recepción en la jurisprudencia. *Foro Juridico*, 107-119.
70. Rojas Aguirre, L. E. (julio de 2010). Lo subjetivo en el juicio de imputación objetiva: ¿Aporte Teórico? *Revista de Derecho*, XXIII(1), 249 y ss.
71. Rojas Vargas, F. (2000). *Jurisprudencia Penal Patrimonial*. Lima: Grijley.
72. Roxin, C. (1972). *Política Criminal y Sistema de Derecho Penal*. Barcelona.
73. Roxin, C. (2015). *Derecho Penal: Parte General. Fundamentos de la Estructura del Delito*. Madrid: Thomson Reuters.
74. Salinas Siccha, R. (2018). *Derecho Penal. Parte Especial* (Séptima ed., Vol. II). Lima, Perú: Iustitia.
75. Sanchez Vera; Gomez Trelles, Javier. (2002). *Delito de infracción de deber y participación delictiva*. Madrid: Marcial Pons.
76. Siccha, R. S. (2015). *Delitos contra el patrimonio*. Lima: Pacifico Editores.
77. Silva Sanchez, J. M. (1992). *Aproximación al Derecho Penal Contemporáneo*. Barcelona: Bosch .
78. Tomas Aladino Galvez; Walter Delgado. (2012). *Derecho Penal: Parte Especial* (Primera ed., Vol. II). Lima: Jurista Editores.
79. Velez Fernandez, G. F. (mayo de 27 de 2008). *perso.unifr.ch*. Obtenido de [perso.unifr.ch](http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/articulos/a_20080527_35.pdf):
http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/articulos/a_20080527_35.pdf
80. Villanueva, R. P. (2004). *Teoría del Delito*. Mexico: UNAM.
81. Villavicencio Terreros, F. (2006). *Derecho Penal: Parte General*. Lima: Grijley.
82. Villavicencio Terreros, F. (2007). La imputación objetiva en la jurisprudencia peruana. *Derecho PUCP*, 253-279. Obtenido de <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/2951>
83. Welzel, H. (1964). *El Nuevo Sistema del Derecho Penal*. Barcelona.

84. Welzel, H. (1964). *Vom Bleibenden und Vergänglichem in der Strafrechtswissenschaft*. Marburg.
85. Welzel, H. (1969). *Das Deutsche Strafrecht* (Once ed.). Berlin.
86. Welzel, H. (1987). *Derecho penal alemán. Parte General* (Tercera (Traducida de la 12° ed. alemana) ed.). Santiago, Chile: Jurídica.
87. Wilhelm, G. (2018). *La Teoría del Delito en su momento actual*. Buenos Aires: B de F.
88. Yanes Sevilla, M. D. (2015). *ANALISIS DEL DELITO DE RECEPCION Y SU INCIDENCIA EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA PENAL EN EL ECUADOR*. Ambato: Universiad Pontificia Católica del Perú.



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA
UNIDAD DE INVESTIGACION



ACTA DE SUSTENTACIÓN
A C T A DE SUSTENTACIÓN VIRTUAL N° 15-2023-UI-FDCP

Sustentación para optar el Título de ABOGADO de: **Kevin Yennure Gálvez Polo.**

Siendo las 11:00 a.m. del día jueves 09 de marzo del 2023 se reunieron vía Plataforma Virtual MEET de Google Suite de la Unidad de Investigación de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional "Pedro Ruiz Gallo", los miembros del jurado evaluador de la tesis titulada: "**CRITERIOS JURÍDICOS - DOGMÁTICOS PARA IMPUTAR EL INCUMPLIMIENTO DEL DEBER DE PRESUMIR LA PROCEDENCIA ILÍCITA DEL BIEN EN EL DELITO DE RECEPCIÓN, EN EL DISTRITO FISCAL DE LAMBAYEQUE, 2019-2020**", designados por Decreto N° 220-2021-FDCP-VIRTUAL de fecha 07 de octubre del 2021, con la finalidad Evaluar y Calificar la sustentación de la tesis antes mencionada, por parte de los Señores Catedráticos:

PRESIDENTE : Dr. AMADOR MONDOÑEDO VALLE.

SECRETARIO : Abog. JOSÉ ELOY GAMONAL GUEVARA.

VOCAL : Mag. CARLOS MANUEL ANTENOR CEVALLOS DE BARRENECHEA

La tesis fue asesorada por Mag. MARY ISABEL COLINA MORENO, nombrada por Decreto N°220-2021-FDCP-VIRTUAL de fecha 07 de octubre del 2021.

El acto de sustentación fue autorizado por Resolución N°014-2023-VIRTUAL-UI-FDCP-UNPRG de fecha 28 de febrero del 2023.

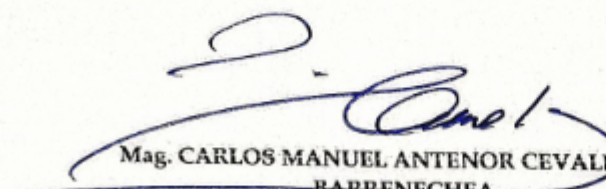
La tesis fue presentada y sustentada por el bachiller **Kevin Yennure Gálvez Polo** y tuvo una duración de 120 minutos. Después de la sustentación y absueltas las preguntas y observaciones de los miembros del jurado; se procedió a la calificación respectiva, obteniendo el siguiente resultado: **APROBADO con la nota de 16 (Dieciséis) en la escala vigesimal, mención de BUENO. Por lo que queda APTO** para obtener el Título Profesional de **ABOGADO**, de acuerdo con la Ley Universitaria 30220 y la normatividad vigente de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, y la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

Siendo las 14:06 p.m., del mismo día, se da por concluido el acto académico suscribiendo los miembros del jurado el Acta; quedando registrado el video en el link: https://drive.google.com/file/d/1BwZSxWWdmCQe7nwd_dXsCIdGHrLly3m2/view?usp=share_link

Lambayeque, jueves 09 de marzo del 2023

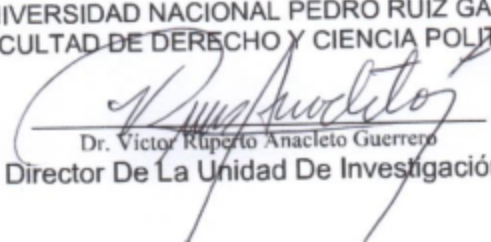

Dr. AMADOR MONDOÑEDO VALLE
Presidente del Jurado


Abog. JOSÉ ELOY GAMONAL GUEVARA
Secretario del Jurado


Mag. CARLOS MANUEL ANTENOR CEVALLOS DE BARRENECHEA
Vocal del jurado

Certificación: El Director de la Unidad de Investigación de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, certifica la veracidad del contenido del Acta de sustentación de tesis Virtual N° 15-2023-UI-FDCP correspondiente a Kevin Yennure Gálvez Polo, evento que se ha realizado de manera virtual el día jueves 09 de marzo del 2023 y aparece registrada en el archivo correspondiente.

Lambayeque, 21 de marzo del 2023

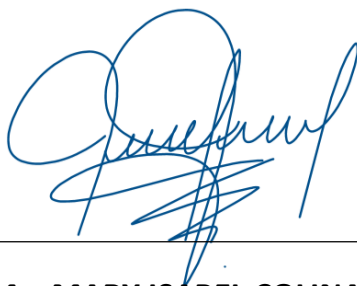
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA

Dr. Víctor Ruperto Anacleto Guerrero
Director De La Unidad De Investigación

CONSTANCIA DE APROBACIÓN DE ORIGINALIDAD DE TESIS

Yo, **Mg. MARY ISABEL COLINA MORENO**, Asesora del tesista: **Kevin Yennure Gálvez Polo**, luego de la revisión exhaustiva de su Tesis titulada ***“Criterios jurídicos-dogmáticos para imputar el incumplimiento del deber de presumir la procedencia ilícita del bien en el delito de Receptación, en el Distrito Fiscal de Lambayeque 2019-2020”***, constado que la misma tiene un índice de similitud de **12 %** verificable en el reporte de similitud del programa Turnitin.

La suscrita analizó dicho reporte y concluyó que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender, la tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

Lambayeque, 21 de septiembre del 2022.



Mg. MARY ISABEL COLINA MORENO
D.N.I 40997649
ASESORA

Criterios jurídicos – dogmáticos para imputar el incumplimiento del deber de presumir la procedencia ilícita del bien en el delito de receptación, en el Distrito Fiscal de Lambayeque, 2019-2020

INFORME DE ORIGINALIDAD

12%	12%	1%	4%
INDICE DE SIMILITUD	FUENTES DE INTERNET	PUBLICACIONES	TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1	hdl.handle.net Fuente de Internet	2%
2	qdoc.tips Fuente de Internet	1%
3	vsip.info Fuente de Internet	1%
4	repositorio.uladech.edu.pe Fuente de Internet	1%
5	idoc.pub Fuente de Internet	1%
6	Submitted to Universidad Catolica Los Angeles de Chimbote Trabajo del estudiante	<1%
7	doku.pub Fuente de Internet	<1%

docplayer.es



Mg. MARY ISABEL COLINA MORENO
D.N.I 40997649
ASESORA




Recibo digital


Este recibo confirma que su trabajo ha sido recibido por **Turnitin**. A continuación podrá ver la información del recibo con respecto a su entrega.

La primera página de tus entregas se muestra abajo.

Autor de la entrega: Kevin Yennure Galvez Polo
Título del ejercicio: TESIS
Título de la entrega: Criterios jurídicos – dogmáticos para imputar el incumplimi...
Nombre del archivo: INFORME_FINAL_GALVEZ_POLO_KEVIN_YENNURE.docx
Tamaño del archivo: 603.98K
Total páginas: 160
Total de palabras: 50,055
Total de caracteres: 268,814
Fecha de entrega: 20-sept.-2022 06:12p. m. (UTC-0500)
Identificador de la entre... 1904890537



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas



TESIS:

"Criterios jurídicos – dogmáticos para imputar el incumplimiento del deber de presumir la procedencia ilícita del bien en el delito de receptación, en el Distrito Fiscal de Lambayeque, 2019-2020"

ASESOR:

Mg. MARY ISABEL COLINA MORENO

PRESENTADO POR:

KEVIN YENNURE GALVEZ POLO

PARA OPTAR:

EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO

LAMBAYEQUE, 2022

Derechos de autor 2022 Turnitin. Todos los derechos reservados.

Mg. MARY ISABEL COLINA MORENO
D.N.I 40997649
ASESORA